

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación
Convocatoria 2014-2016

Tesis para obtener el título de maestría en Relaciones Internacionales con mención en
Negociación y Cooperación Internacional

La práctica neoextractivista de recursos naturales y su relación con los indicadores
socioeconómicos de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014

Fátima Belén Aguirre Franco

Asesora: Cintia Quiliconi
Lectores: Ernesto Vivares y Ricardo Buitrago

Quito, diciembre de 2016

Tabla de contenidos

Resumen	VII
Agradecimientos.....	IX
Capítulo 1	
Introducción.....	1
Capítulo 2	
Marco Teórico	10
1. El neoextractivismo.....	11
2. Modelos de desarrollo en América Latina: el modelo neoliberal y progresista latinoamericano	22
2.1. El modelo neoliberal	24
2.2. El modelo progresista latinoamericano	27
3. La transformación de la política social en América Latina.....	29
Conclusiones.....	35
Capítulo 3	
La exportación de commodities y su contribución al crecimiento económico de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014	37
Introducción.....	37
1. Auge de los Commodities: Impacto de las economías emergentes asiáticas en los precios de los commodities a nivel mundial	39
2. Auge de los Commodities: Contexto latinoamericano	41
3. Ecuador.....	45
3.1. Evolución de la economía ecuatoriana: período 2000-2014.....	45
3.2. Canasta exportadora ecuatoriana	52
4. Colombia	53
4.1. Evolución de la economía colombiana: período 2000-2014	53
4.2. Canasta exportadora colombiana	59
Conclusiones.....	66
Capítulo 4	
El crecimiento económico y su efecto en el ámbito social de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014	71
Introducción.....	71
1. La transformación de la política social en América Latina.....	73
2. Ecuador.....	78
2.1. El modelo progresista ecuatoriano y la política social.....	78
2.2. Programas Sociales de Transferencias Condicionadas	81

2.3. Indicadores sociales.....	83
2.3.1. Educación.....	83
2.3.2. Salud	85
2.3.3. Desigualdad.....	86
3. Colombia	87
3.1. El modelo neoliberal colombiano y la política social	87
3.2. Programas Sociales de Transferencias Condicionadas	91
3.3. Indicadores sociales.....	93
3.3.1. Educación.....	93
3.3.2. Salud	95
3.3.3. Desigualdad.....	96
4. Análisis comparativo.....	98
Conclusiones.....	101
Capítulo 5	
Conclusiones.....	104
Apéndices o anexos	114
Lista de siglas y acrónimos	140
Lista de referencias.....	141

Ilustraciones

Figuras

3.1. Evolución del índice de precios de los commodities a nivel mundial	40
3.2. Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en América Latina	42
3.3. Exportación de las 5 materias primas principales de América Latina 2000-2014 en porcentajes	43
3.4. Participación de productos manufacturados y primarios en las exportaciones totales de América Latina	44
3.5. Crecimiento porcentual del PIB anual ecuatoriano	45
3.6. Precios de los principales productos básicos de exportación ecuatorianos	46
3.7. Comportamiento de la producción y exportación petrolera ecuatoriana	47
3.8. Participación de productos primarios en el total de las exportaciones ecuatorianas	50
3.9. Participación de los principales productos en las exportaciones ecuatorianas	53
3.10. Crecimiento porcentual del PIB anual colombiano	54
3.11. Precios de los principales productos básicos de exportación colombianos	54
3.12. Comportamiento de la producción y exportaciones petroleras colombianas	55
3.13. Participación de productos primarios en el total de las exportaciones colombianas	58
3.14. Participación de los principales productos en las exportaciones colombianas	60
3.15. PIB total anual a precios constantes en millones de dólares	61
3.16. Participación de productos primarios en el total de las exportaciones	62
3.17. PIB anual por actividad económica Ecuador 2000-2014	63
3.18. PIB anual por actividad económica Colombia 2000-2014	65
4.1. Gasto público social total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Ecuador	80
4.2. Gasto público social en Educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en Ecuador	84
4.3. Gasto público social en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Ecuador	85

4.4. Evolución del Índice de Gini en Ecuador	87
4.5. Gasto público social total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Colombia	91
4.6. Gasto público social en Educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Colombia	94
4.7. Gasto público social en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Colombia	95
4.8. Evolución del Índice de Gini en Colombia	97
4.9. Tendencias del IDH en Ecuador 2000-2014	98
4.10. Tendencias del IDH en Colombia 2000-2014	100

.....

Tablas

1.1. Exportaciones de bienes primarios y petróleos crudos de las principales economías extractivistas latinoamericanas período 2000-2014	4
1.2. Evolución de los indicadores sociales de las principales economías extractivistas latinoamericanas en de 2000 a 2014	4
4.1. Programa de Transferencias Condicionadas en Ecuador	82
4.2. Programas de Transferencias Condicionadas en Colombia	92
5.1. Similitudes en el área económica y social entre el paradigma neoliberal y progresista latinoamericano	111
5.2. Diferencias en el área económica y social entre el modelo neoliberal y progresista latinoamericano	112

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo, Fátima Belén Aguirre Franco, autora de la tesis titulada declaro que la obra “La práctica neoextractivista de recursos naturales y su relación con los indicadores socioeconómicos de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014” es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría en Relaciones Internacionales con mención en Negociación y Cooperación Internacional concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia de Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, diciembre de 2016.


Fátima Belén Aguirre Franco

Resumen

El neoextractivismo es un fenómeno que se desprende del extractivismo, actividad originada con el proceso de colonización y el surgimiento del sistema capitalista. En la actualidad, el neoextractivismo es una práctica acogida y arraigada en los países latinoamericanos gracias al boom de los commodities, hecho que ha logrado atraer tanto a los gobiernos neoliberales como progresistas, debido a las cuantiosas rentas propiciadas por el incremento de los precios de los bienes primarios a nivel mundial. Como consecuencia, se ha asentado un modelo neoextractivista y primario-exportador a lo largo de la región que se respalda y legitima con la consecución de mejores niveles de bienestar social a través de las rentas generadas, y que trasciende la tendencia política e ideológica de los diferentes gobiernos de la región.

Por esta razón, la presente investigación analiza la relación entre la práctica neoextractivista y los indicadores socioeconómicos en el período 2000-2014 a través del estudio de caso de dos países, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos hacen uso del mismo mecanismo -el neoextractivismo- como sustento económico para la implementación de programas sociales que contribuyan al bienestar social, pero que a la vez cuentan con modelos políticos distintos. Este estudio explora las dinámicas entre los indicadores socioeconómicos de estos dos países en tres ámbitos: participación de los commodities en las exportaciones y en el crecimiento económico, peso de este ingreso en el financiamiento del Estado y en el gasto público social.

Con este objetivo, se ha identificado la manera en qué las variables económicas han influido en la consolidación del neoextractivismo en ambos países, y cómo las rentas arrojadas por esta actividad han sido destinadas para la consecución del desarrollo y bienestar social, a través del gasto público social y de instrumentos de la política social como los programas de transferencias condicionadas.

Como método para el desarrollo de este trabajo se ha seleccionado el estudio de caso comparativo con el propósito de contrastar los resultados de los indicadores económicos y sociales de un modelo progresista y otro neoliberal que hacen uso de los réditos del neoextractivismo para el financiamiento de su desarrollo social. Esta investigación se nutre de la búsqueda, clasificación, selección y análisis de documentos y estadísticas de fuentes oficiales emitidos por los gobiernos de Ecuador y Colombia respectivamente, así como de organizaciones internacionales. También, cuenta con entrevistas a funcionarios de organizaciones internacionales así como a académicos, funcionarios públicos y tomadores de

decisiones de ministerios de ambos países, cuyas áreas de trabajo se encuentran relacionadas con la parte económica y social.

Entre los principales hallazgos de esta investigación se encuentra el peso significativo que tuvo el boom de los commodities en las exportaciones de este tipo de bienes, así como en el espectacular crecimiento económico que vino a alimentar las arcas de estos dos Estados cerca de una década. Asimismo, se ha podido constatar que independientemente del paradigma, si bien parte de las rentas extractivistas han ayudado a financiar el gasto público social no lo han hecho en la medida que podría haberse esperado considerando el volumen de estos flujos.

También, se destaca que entre las pocas diferencias de estos dos modelos se encuentra el discurso, el rol del Estado y la prioridad que se le ha adjudicado al sector social. Por su parte, a pesar de pronunciarse como un paradigma rupturista con el modelo neoliberal, en la praxis, el progresismo se ha establecido cómo una fase más del capitalismo. El mismo que no puede funcionar sino a expensas de la explotación extractiva de las economías periféricas. Cabe recordar que únicamente se puede hablar de un cambio de paradigma cuando este conlleva a una verdadera transformación política, económica y social.

Palabras clave: neoextractivismo, neoliberal, progresista, commodities, Ecuador, Colombia.

Agradecimientos

Deseo agradecer primeramente a Dios por todas las bendiciones que ha vertido en mi vida. A las personas incondicionales en mi vida: Fanny, Gaby y Santiago ya que su amor, su confianza y su apoyo son mis incentivos para seguir adelante e ir por nuevos retos. A FLACSO Ecuador por la gran oportunidad que me brindó para seguir mis estudios de posgrado. A todas las personas maravillosas que han hecho de estos dos años un período memorable en mi vida lleno de crecimiento personal y profesional. A mis queridos profesores, especialmente a Ernesto Vivares y Cintia Quiliconi, quienes a través de su conocimiento y experiencia no solo han impulsado en mí el pensamiento crítico, sino también a ser una mejor profesional y ser humano. A mi Gladycita bella, por ser mi cómplice y confidente, por su disposición a ayudarme siempre y por toda esa energía que le caracteriza. A esas personas que conocí durante este camino de aprendizaje, y que orgullosamente hoy puedo llamar mis amigos, con quienes he compartido buenos momentos, pláticas y risas. Finalmente, a las personas que con su conocimiento y consejo ayudaron a la realización de este trabajo.

Capítulo 1

Introducción

El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho.

-Wayne Dyer

El extractivismo es un modelo de acumulación que empezó hace 500 años con la colonización de América, África y Asia y el surgimiento del sistema capitalista cuya lógica demandaba la extracción de bienes primarios de las periferias para ser transformados o manufacturados por los centros (Acosta 2012, 85). Se entiende como extractivismo a “aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación” (Acosta 2012, 85).

Se debe destacar que el reciente crecimiento económico experimentado en América Latina se ha visto combinado con distintos procesos políticos, lo cual ha ocasionado la intensificación de la explotación de bienes comunes naturales, convirtiendo de esta manera a las prácticas neoextractivistas en uno de los principales motores de la actividad económica, que trascienden la tendencia política e ideológica de los diferentes gobiernos latinoamericanos (Rey 2015, 2). El neoextractivismo es:

[...] un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos (Gudynas 2009, 188).

Gracias a las rentas generadas por esta práctica, en la región se ha visto consolidado un modelo neoextractivista y primario-exportador que se respalda en la consecución de mejores niveles de bienestar social. Esta situación ha sido respaldada por lo que Svampa denomina “Consenso de los Commodities”:

[...] el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las

reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas (Svampa 2013, 31).

El discurso neoliberal y progresista latinoamericano ha justificado la práctica neoextractivista indicando que los recursos arrojados por las rentas extractivas son claves para financiar el desarrollo a través de planes de asistencia social y de reducción de la pobreza (Dávalos 2013, 190). Es así como las rentas neoextractivistas han devenido una estrategia de articulación política y social que ha movilizó a la sociedad entera y que ha producido consenso popular sobre la práctica neoextractivista como una necesidad imperativa para el desarrollo y la equidad social (Dávalos 2013, 194). Sin embargo, contrario a la promesa de este discurso, se ha podido constatar que las economías que se sustentan en el neoextractivismo han patrocinado una serie de consecuencias nocivas en las estructuras sociales y económicas con la consolidación de altos niveles de desigualdad dentro de los países que acogen este tipo de prácticas (Acosta, 2009:35).

A pesar de que en la actualidad existe un amplio debate dentro del área de Economía Política Internacional, en torno al neoextractivismo con los aportes de importantes académicos expertos en el tema, el énfasis se encuentra en la devastación medioambiental y los impactos sociales producto de esta práctica. Asimismo, la literatura se ha focalizado en la relación neoextractivismo-progresismo ya que con el ascenso de la nueva izquierda en algunos países de la región, e incluso con la inclusión de cosmovisiones indígenas en las constituciones de países con gobiernos progresistas como Ecuador, se vaticinaba el establecimiento de un régimen contrario a las prácticas neoliberales que se tradujesen en la implementación de políticas económicas lejos de las modalidades tradicionales de inserción en los mercados internacionales como el neoextractivismo (Lander 2014, 3).

Si bien, los gobiernos progresistas se presentan como una ruptura o quiebre histórico con el pasado, es decir con el neoliberalismo tradicional y la izquierda estatista, y suelen recurrir a la retórica del “Socialismo del Siglo XXI”, Petras cuestiona, dentro de este debate, hasta qué punto los gobiernos progresistas pueden desarrollar políticas económicas que se aparten verdaderamente de los gobiernos neoliberales actuales y precedentes (Petras, 2012). También, el debate recae en que esta práctica lejos de implantar justicia social, por los grandes impactos sociales y ambientales que produce, se legitima a través de medidas de redistribución económica que en lugar de ayudar a la implantación de cambios substanciales, y por ende a un verdadero desarrollo, se asemejan a la caridad y la benevolencia (Acosta 2009, 37). Es así

como surge la interrogante de como podrán mantenerse los resultados obtenidos en el sector social una vez que el boom de los commodities ha terminado y el crecimiento en Latinoamérica se ha tornado mas lento (Sousa 2015).

En el aspecto económico del debate sobre el neoextractivismo, algunos defienden que a diferencia de los gobiernos neoliberales, los actuales gobiernos latinoamericanos, particularmente los de la nueva izquierda, han logrado alterar las condiciones injustas del extractivismo presentes en el pasado, al limitar la entrada de capital transnacional y recuperar así la renta extractiva para el Estado (Falconí 2014, 86). No obstante, hay quienes se contraponen con esta visión, ya que de acuerdo a Svampa las prácticas neoextractivistas “tienden a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial, que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y van configurando espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional” (Svampa 2013, 35). De la misma manera, Acosta sostiene que el neoextractivismo “mantiene y reproduce elementos claves del extractivismo del raigambre colonial” puesto que a pesar de que se declare un mayor control estatal sobre este tipo de emprendimientos extractivistas, en la praxis, son los países centrales quienes poseen aún el control de las exportaciones nacionales (Acosta 2012, 102).

Por tal razón, esta investigación persigue descifrar la relación entre la práctica neoextractivista y los indicadores socioeconómicos, con base en los estudios de caso de dos países con modelos distintos, uno progresista y otro neoliberal: Ecuador y Colombia, y las dinámicas entre sus indicadores económicos y sociales en tres ámbitos: peso o participación real de los commodities en las exportaciones y en el crecimiento económico, peso de este ingreso en el financiamiento del Estado y en el gasto público social.

Como anteriormente fue señalado, la tendencia neoextractivista se encuentra ampliamente sustentada e impulsada tanto por los denominados gobiernos progresistas, como Ecuador, como por los gobiernos neoliberales de la región como Colombia, por la cual resulta interesante realizar un contraste de dos paradigmas cuyas bases políticas e ideológicas son distintas, pero que a la vez hacen uso del mismo mecanismo -el neoextractivismo- para obtener rentas que puedan ser direccionadas al desarrollo y bienestar social. Cabe destacar que tanto Ecuador como Colombia se encuentran entre las principales economías extractivistas de la región, además de que sus exportaciones presentan una amplia dependencia en un solo bien primario: el petróleo (tab.1.1).

Tabla 1.1. Exportaciones de bienes primarios y petróleo crudo de las principales economías extractivistas latinoamericanas período 2000-2014

País	Productos primarios / exportaciones totales	Petróleo crudo / exportaciones totales
Venezuela	93.0	70.7
Ecuador	90.9	49.3
Bolivia	89.3	5.2
Chile	85.1	-
Perú	83.1	2.5
Colombia	69.7	29.5
Brasil	54.4	5.7

Fuente: CEPALSTAT.

Asimismo, dentro de las principales economías extractivas latinoamericanas, tanto Ecuador como Colombia, han registrado avances importantes en sus indicadores sociales a lo largo de este período (tab.1.2). Varios de estos logros se han dado en sectores y variables trascendentales para el desarrollo como educación, salud y desigualdad. Por lo cual se torna imprescindible examinar la relación y la manera en que los réditos derivados de la actividad extractiva han contribuido con estos resultados.

Tabla 1.2. Evolución de los indicadores sociales de las principales economías extractivistas latinoamericanas en de 2000 a 2014

País	Índice de Desarrollo Humano		Gasto público en educación como porcentaje del PIB		Gasto público en salud como porcentaje del PIB		Desigualdad medida por el Coeficiente de Gini	
	2000	2014	2000	2014	2000	2014	2000	2014
Venezuela	0.673	0.762	5.9	6.0**	2.6	4.5**	58.9	40.7***
Ecuador	0.674	0.732	1.7	4.7	0.6	2.1	56.4	45.2
Bolivia	0.603	0.662	5.2	5.3**	1.3	1.3**	63.0	49.1***
Chile	0.683	0.832	3.9	4.5***	2.8	3.8***	55.3	50.9***
Perú	0.677	0.734	2.9	2.9**	1.5	2.4**	50.8	43.9
Colombia	0.654	0.720	3.3	3.1	1.9	2.9	58.7	53.5
Brasil	0.683	0.755	4.9	5.8*	3.9	5.1*	48.3	54.8

* Datos disponibles hasta 2009.

** Datos disponibles hasta 2012.

*** Datos disponibles hasta 2013.

Fuente: PNUD & CEPALSTAT.

Por otro lado, gran parte de la literatura existente sobre la temática del neoextractivismo, como en el caso de Acosta, Gudynas y Svampa, hace énfasis en la apropiación de esta práctica por los gobiernos de corte progresista, dejando de lado la perspectiva de los gobiernos neoliberales, donde si bien a lo largo de la historia es conocido que la práctica extractivista ha sido uno de los motores fundamentales de sus economías, se torna importante

estudiar este fenómeno en este tipo de Estados, también, debido a las nuevas dinámicas mundiales. Un Estado neoliberal como Colombia:

[...] es fundamentalmente una forma de dirección política que se articula en torno a los principios formales de la economía mercantil. [...] El Estado neoliberal tiene que saber intervenir en todos los aspectos de la vida, cuidando que ninguno quede por fuera de dicha injerencia, en función de los intereses de la reproducción de la economía mercantil capitalista. Desde este enfoque, el saber intervenir es un asunto de gobierno, un tipo de dirección política de la sociedad que busca su total mercantilización (Sierra 2011, 2).

Tras dos décadas de neoliberalismo y las profundas problemáticas sociales inherentes de este modelo, en algunos países de la región, entre ellos Ecuador, se produjo una gran movilización popular que buscó resistir el avance capitalista (Sierra 2011, 3). Estos movimientos sociales, así como los partidos de izquierda, aplaudieron e impulsaron el surgimiento de un nuevo tipo de gobierno anti-neoliberal que pusiera fin a la larga noche neoliberal, a través de la transformación social y el desmantelamiento de la institución estatal que operó durante la época neoliberal (Sierra 2011, 2). A este nuevo tipo de gobierno se denomina como progresista o de la nueva izquierda.

Sin embargo, en el caso de Ecuador, a pesar del desarrollo de políticas sociales que han beneficiado a algunos sectores marginados, en áreas como salud y educación, no se puede hablar de una verdadera transformación social, ya que en la praxis, este proyecto progresista se encuentra consolidando una economía mercantil capitalista, con base en una política gubernamental neoliberal (Sierra 2011, 2). También, se debe resaltar que la política gubernamental ecuatoriana, abrió el camino para la implementación de la nueva ola extractiva demandada por el capital internacional en la última década al crear condiciones estructurales para la explotación petrolera y mineral (Sierra 2011, 10).

Esta investigación examina el período comprendido entre el año 2000 y 2014, ya que fue en este espacio de tiempo donde se dio el inusitado crecimiento económico de las economías latinoamericanas producto del boom en los precios de los commodities a nivel mundial. De igual manera dentro de esta coyuntura, se dio la emergencia del progresismo en varios países latinoamericanos, como en Ecuador con Rafael Correa en el año 2007 y la profundización y radicalización del neoliberalismo en países como Colombia.

Asimismo, a partir del año 2011 se empezaron a observar los primeros signos de agotamiento del súper ciclo de los bienes primarios, y junto con este, una serie de repercusiones económicas y sociales para estos dos países. Es así como surge la necesidad de realizar una retrospectiva, el antes y el después, de estos acontecimientos fundamentales para la implantación de la práctica neoextractivista en la región.

El objetivo central de esta investigación es analizar la relación existente entre la práctica neoextractivista y la relación de los recursos obtenidos con los indicadores socioeconómicos de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014. Para este fin, se ha identificado cómo las variables económicas han influido en la consolidación del neoextractivismo en ambos países, y la manera en qué los recursos obtenidos por esta actividad han sido destinados para la consecución del desarrollo y bienestar social, a través de la política social.

De este objetivo se desagregan objetivos específicos como: examinar la participación de los commodities en la exportaciones y en el crecimiento económico de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014, estudiar cómo se ha financiado los estados ecuatoriano y colombiano con los ingresos de la exportación de las materias primas en la última década, investigar cómo se han visto reflejados los ingresos de la exportación de materias primas en la política social de Ecuador y Colombia a través del gasto público social tras el boom de los commodities, y explorar las semejanzas y diferencias que supondrían un régimen con políticas progresistas, como en el caso de Ecuador, y un régimen con políticas neoliberales como Colombia en el ámbito socioeconómico.

Para responder la pregunta en torno a la cual gira esta investigación, así como para alcanzar los objetivos trazados, se optó por un diseño metodológico de carácter cualitativo ya que la interrogante planteada se ha direccionado a proporcionar una comprensión holística del fenómeno a ser estudiado bajo aspectos que van más allá de la cuantificación y que requieren de un enfoque comparativo. Complementariamente, el análisis que se ha pretendido realizar en este trabajo es de carácter inductivo, ya que se ha planteado generar reflexiones crítico-conceptuales particulares, con base en la comparación de los dos estudios de caso, a la temática y a los datos obtenidos, que nos puedan conducir a una perspectiva más general sobre el tema.

Como método para el desarrollo de este trabajo se ha seleccionado el estudio de caso comparativo con el propósito de contrastar los resultados de los indicadores económicos y sociales de un modelo progresista y neoliberal que hacen uso de los réditos del neoextractivismo para el financiamiento de su desarrollo social. Cabe resaltar que el estudio de caso, es uno de los enfoques más adecuados para adquirir destrezas conceptuales y analíticas de un tema particular; además de ser uno de los métodos más utilizados por los académicos en el campo de las relaciones internacionales (Spray & Roselle 2012, 32). También, el estudio de caso tiene la ventaja, sobre otro tipo de métodos, de contrastar hechos reales con un proceso esperado, y revelar el por qué -el mecanismo causal- de una relación de tipo x está conectada con y (Harvey & Brecher 2005, 171).

Este estudio se nutre de la búsqueda, clasificación, selección y análisis de documentos y estadísticas de fuentes oficiales emitidos por los gobiernos de Ecuador y Colombia respectivamente, así como de organizaciones internacionales. Asimismo, cuenta con entrevistas a funcionarios de organizaciones internacionales cuyas áreas de trabajo se encuentran relacionadas con la parte económica y social, así como a académicos, funcionarios públicos y tomadores de decisiones de ministerios de ambos países, encargados de temas socioeconómicos.

Las estrategias antes descritas fueron seleccionadas ya que además de generar datos para responder a la pregunta de investigación, brindan la posibilidad de realizar una triangulación de datos. La triangulación implica el uso de más de un método o fuente de datos en el estudio de los fenómenos sociales, lo cual le otorga mayor confianza a los hallazgos de una investigación (Bryman 2008, 379).

Este trabajo se compone de cinco capítulos estructurados en relación a los objetivos fijados y a los datos obtenidos y generados durante el proceso de investigación. El Capítulo 1 consiste en una introducción al tema de investigación, expone su justificación, objetivos, metodología y estructura.

El Capítulo 2 es una aproximación teórica desde la economía política internacional que gira alrededor del neoextractivismo, los modelos de desarrollo latinoamericanos y su relación con la transformación de la política social. Este capítulo aborda las contribuciones y posturas de distintos académicos en el debate en torno a la práctica neoextractivista y su vinculación con el aspecto económico y social de los países que la emplean. La finalidad de esta base teórica

es contrastar los distintos enfoques que se le otorga al fenómeno del neoextractivismo y a las rentas que este genera como impulsor del desarrollo y bienestar social en los países latinoamericanos.

Dentro del debate, algunos académicos consideran que el neoextractivismo es necesario para el desarrollo social de los países de la región, indistintamente del tipo de modelo, en un escenario donde los precios altos de los commodities representan una ventaja comparativa para los países latinoamericanos. Mientras que para otros, el fenómeno del neoextractivismo y sus generosos réditos no justifican la devastación que esta práctica conlleva, ya que no ven en él la solución a los problemas sociales, además de que posicionan una raigambre colonial en la región y una profundización del esquema capitalista.

El Capítulo 3 presenta un análisis de los commodities con base en indicadores económicos con el objetivo de develar la participación real que han tenido los bienes primarios en las exportaciones y en el crecimiento económico que experimentaron Ecuador y Colombia en el período 2000-2014. También, realiza un diagnóstico entorno al boom de las materias primas y la manera en que este fenómeno ha influido en las rentas extractivistas dentro de las arcas de ambos Estados. Adicionalmente, demuestra el alto grado de dependencia en la exportación de materias primas que mantienen estos dos países dentro de su actividad económica, especialmente con el petróleo, y cómo esta particularidad los mantiene sujetos a shocks externos, como crisis o recesiones del sistema, donde su margen de maniobra es muy limitado y vienen a develar los desequilibrios y problemas estructurales que sus economías han venido acumulado por años.

El Capítulo 4 estudia los efectos de los ingresos de la exportación de materias primas y del crecimiento económico experimentado por Ecuador y Colombia gracias a la implantación del neoextractivismo, principal fuente generadora de recursos en la última década, en el ámbito social. Con este objetivo, expone la política social actual, los programas sociales, particularmente los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), y la evolución del gasto público de indicadores sociales indispensables para el desarrollo como salud, educación y desigualdad, de ambos países. Además, realiza una comparación de la transformación que han experimentado los indicadores sociales que componen el Índice de Desarrollo Humano (IDH): salud, educación, y estándar o nivel de vida, tras el reciente crecimiento económico. Asimismo, muestra las semejanzas y diferencias que supondrían un régimen con políticas

progresistas, como en el caso de Ecuador, y un régimen con políticas neoliberales, como Colombia; así como su relación con el desarrollo social.

Finalmente, el Capítulo 5, referente a conclusiones, presenta los principales hallazgos de esta investigación. Este capítulo vincula los tres capítulos precedentes con el fin de llegar a una comprensión holística del tema propuesto. De igual manera, además de efectuar una crítica a los regímenes presentes en América Latina y a sus agendas desarrollistas, invita a explorar nuevos esquemas que rompan verdaderamente con las lógicas economicistas de mercado y que lleven a la región hacia el bienestar a través de un desarrollo social a largo plazo.

Capítulo 2

Marco Teórico

La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales.

-Eduardo Galeano

El neoextractivismo es un fenómeno, que en los últimos años, ha cobrado fuerza dentro de la agenda desarrollista de los países de América Latina prescindiendo de su orientación política e ideológica. A pesar de las consecuencias negativas que conlleva, esta práctica ha sido justificada por los distintos gobernantes latinoamericanos, como un medio para la consecución de mejores niveles de desarrollo social para sus poblaciones y la lucha contra la pobreza a través de las cuantiosas rentas que esta actividad genera. En parte, esta situación respondería a un hecho coyuntural producto del incremento de los precios de las materias primas o commodities a nivel mundial en la última década.

Dentro de este panorama, la presente investigación gira alrededor de dos casos de estudio: Ecuador y Colombia, dos países que a pesar de tener orientaciones políticas e ideológicas diferentes, el primero progresista y el segundo neoliberal, son fieles promotores de la práctica neoextractivista con miras hacia el desarrollo. El objetivo central de esta investigación es analizar la relación entre la práctica neoextractivista y los indicadores socioeconómicos de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014, espacio de tiempo que coincide con el auge mundial sin precedente de los precios de las materias primas y la emergencia de los gobiernos progresistas y su coexistencia con los gobiernos neoliberales de la región. Para este fin, este capítulo busca realizar un acercamiento desde la economía política internacional a la teoría del neoextractivismo, junto con sus conceptos clave, y presentar cómo esta teoría se encuentra relacionada a la vez con los modelos de desarrollo presentes en Latinoamérica, así como su nexo con el marco de políticas sociales promovidas por los mismos.

Este capítulo se encuentra dividido en tres apartados. El primer apartado aborda el neoextractivismo, junto con sus características, causas, justificaciones, y los principales debates generados alrededor de esta práctica. Asimismo, este capítulo presenta y desarrolla los principales conceptos inherentes a esta teoría. El segundo apartado realiza un recorrido de los distintos modelos de desarrollo en Latinoamérica, con énfasis en el modelo neoliberal y progresista latinoamericano, y destaca cómo la práctica extractivista ha sido un rasgo compartido por todos ellos. Finalmente, el tercer apartado expone las transformaciones de la

política social en América Latina y la manera en que la política social es encaminada por las directrices desarrollistas neoliberales y progresistas de la región.

1. El neoextractivismo

Los recursos naturales han jugado un papel fundamental en la estructura y dinámica económica mundial (Portillo 2014, 13). Históricamente, Latinoamérica ha estado ligada a la explotación de recursos naturales, insertándose así en la división internacional del trabajo como proveedora de materias primas, bajo un carácter dependiente y sujeto a las necesidades de quienes demandan sus productos (Portillo 2014, 13). Este fenómeno conocido como extractivismo, es un modelo de acumulación que empezó hace 500 años con la colonización de América, África y Asia y el surgimiento del sistema capitalista cuya lógica demanda la extracción de bienes primarios de las periferias para ser transformados o manufacturados por los centros (Acosta 2012, 85).

El modelo extractivista “forma parte integrante de la economía-mundo capitalista, de la división del trabajo internacional, de la articulación de flujos y stock en las redes de los mercados, en la articulación de un consumo productivo dado a escala mundial” (Prada 2014, 59). Asimismo, este modelo al encontrarse estrechamente asociado al mercado internacional, es ajeno al mercado interno, puesto que su lógica se mueve con los vaivenes de los precios internacionales de los commodities, más no con los requerimientos del mercado local (Prada 2014, 57). Este hecho ha sido el responsable, en gran medida, de la imposibilidad que han presentado los países exportadores de este tipo de bienes para arrancar un proyecto de industrialización de materias primas desde el modelo extractivista (Prada 2014, 57).

Acosta define al extractivismo como:

[...] aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero (Acosta 2012, 85).

En la actualidad, las variaciones políticas, sociales y económicas en la implementación de la práctica extractivista han dado origen al neoextractivismo, piedra medular, de la economía de los gobiernos latinoamericanos tanto neoliberales como progresistas. Se debe destacar que el reciente proceso de crecimiento económico que ha experimentado la región latinoamericana ha sido producto de la intensificación de la explotación de bienes naturales, deviniendo de

esta manera las prácticas neoextractivistas, uno de los principales motores de la actividad económica, que trasciende la tendencia política e ideológica de los diferentes gobiernos latinoamericanos (Rey 2015, 2). Gudynas define al neoextractivismo como:

[...] un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos (Gudynas 2009,188).

Cabe resaltar que las labores neoextractivas no se limitan únicamente a actividades tradicionales como la minería y los hidrocarburos, sino que también abarcan otras actividades como los agronegocios o la producción de biocombustibles, los cuales involucran una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo que tiende a la monoproducción, desestructura y reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el acaparamiento de tierras (Svampa 2012).

En la última década, gracias a las rentas generadas por esta práctica, se ha visto consolidado un modelo neoextractivista y primario-exportador a lo largo de América Latina que se respalda en la consecución de mejores niveles de bienestar social. Esta situación es producto de lo que Svampa denomina “Consenso de los Commodities”:

[...] el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas (Svampa 2013, 31).

El apelativo de “consenso” en el concepto desarrollado por Svampa, tiene la virtud de evocar no solo un orden económico, sino la consolidación de un sistema de dominación distinto al de la década de los noventa, ya que en lugar de referirse a la emergencia de un discurso único, que desestima el rol de las ideologías o celebra el neoliberalismo como horizonte insuperable de nuestra época; alude más bien a una serie de ambivalencias y paradojas, que marcan la coexistencia y enlazamiento entre la ideología neoliberal y el neodesarrollismo progresista (Svampa 2012).

Con el advenimiento de los gobiernos progresistas, Gudynas identifica dos tipos o vertientes del neoextractivismo. Por un lado, se encuentra el extractivismo convencional donde el papel dominante lo tienen las transnacionales y el Estado toma un rol subsidiario (Gudynas 2009, 203). De hecho, entre los rasgos principales del neoextractivismo neoliberal, consolidado bajo el Consenso de los Commodities, se encuentra un amplio número de emprendimientos, lo cual da cuenta de la gran envergadura que ésta práctica conlleva en términos de inversión de capitales, el carácter de los actores involucrados (grandes corporaciones transnacionales), así como de los mayores riesgos e impactos que dichos emprendimientos tienen en términos sociales, económicos y ambientales (Svampa 2012).

Y por otro lado, el neoextractivismo progresista que hace hincapié en las diferencias que mantiene con el modelo neoliberal tanto en la concepción como en el manejo de esta práctica, al reemplazar el discurso de las exportaciones y el mercado por el de la globalización y la competitividad, con la justificación de financiar programas sociales y contribuir así a la mitigación de los altos niveles de desigualdad (Gudynas 2009, 203). No obstante, estudios recientes sobre la dinámica política del neoextractivismo muestran una dependencia similar en la extracción de recursos naturales, la inversión extranjera directa y la exportación de productos primarios entre ambos tipos de modelos (Veltmeyer 2013, 83-84).

Desde 2003, el valor de las exportaciones de bienes primarios en Latinoamérica, empezó a mostrar un crecimiento inédito debido al alza de los precios internacionales de los metales, el petróleo y otros productos primarios, que alcanzaron máximos históricos entre 2007 y 2008 (CEPAL 2013, 7). La demanda de minerales de exportación como el hierro, el cobre y el aluminio fue impulsada por el crecimiento de sectores que presentaron una rápida expansión en el marco del proceso de desarrollo económico de las grandes economías asiáticas, tales como la construcción, la infraestructura y la manufactura (UNASUR y CEPAL 2013, 15). Asimismo, el veloz crecimiento económico de las economías asiáticas contribuyó a impulsar la demanda mundial de petróleo y otros bienes primarios (UNASUR y CEPAL 2013, 15).

El boom en la demanda internacional de bienes primarios constituyó un componente fundamental para un mejor desempeño macroeconómico y posición fiscal en los países exportadores latinoamericanos a partir de 2003 (CEPAL 2013, 7). Se debe señalar que tras los meses de julio y agosto de 2008, cuando los precios de los productos primarios registraron una fuerte caída a raíz de la crisis financiera mundial, varios de estos países pudieron expandir su gasto público como medida de estímulo, sobre la base de los ahorros fiscales acumulados

durante el auge de precios anterior a 2008 (CEPAL 2013, 7). Tiempo después de la cúspide de la crisis, los precios de los productos básicos experimentaron una fuerte recuperación entre 2010 y 2012, no obstante, la reciente desaceleración que ha experimentado la economía mundial, debido a la crisis europea, la lenta recuperación de los Estados Unidos y un crecimiento menor en China, ha dado como resultado una corrección del nivel de precios y una moderación de la tendencia a la alza que prevaleció durante la última década (CEPAL 2013, 7).

Por otro lado, el Banco Mundial ha manifestado que América Latina ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza en la última década, ya que para 2013, menos de un cuarto de la población de la región vivía con menos de 4 USD al día y uno de cada diez con menos de 2.50 USD por día (Sousa, 2015). Estos índices distan de los registrados en la década precedente donde más del 40% vivía con menos de 4 USD por día y más de un cuarto con menos de 2.50 USD, siendo un factor a destacar que la reducción en estos los indicadores de pobreza, solo se produjo en los países de la región que se beneficiaron del boom de los commodities (Sousa, 2015).

Sin embargo, el debate recae en que esta práctica lejos implantar justicia social, por los grandes impactos sociales y ambientales que produce, se legitima a través de medidas de redistribución económica que en lugar de ayudar a la implementación de cambios substanciales, y por ende a un desarrollo humano sostenible, se asemejan a la caridad y la benevolencia (Acosta 2009, 37). Asimismo, surge la interrogante de cómo podrán mantenerse los resultados obtenidos en el sector social una vez que el boom de los commodities ha terminado y el crecimiento en los países latinoamericanos se ha tornado más lento (Sousa, 2015).

En la coyuntura del neoextractivismo, podemos distinguir en América Latina dos tipos de Estados o gobiernos: los de corte neoliberal y los de corte progresista. Un Estado neoliberal:

[...] es fundamentalmente una forma de dirección política que se articula en torno a los principios formales de la economía mercantil. [...] El Estado neoliberal tiene que saber intervenir en todos los aspectos de la vida, cuidando que ninguno quede por fuera de dicha injerencia, en función de los intereses de la reproducción de la economía mercantil capitalista. Desde este enfoque, el saber intervenir es un asunto de gobierno, un tipo de dirección política de la sociedad que busca su total mercantilización (Sierra 2011).

Tras dos décadas de neoliberalismo y de las profundas problemáticas sociales inherentes a esta política, en algunos países de la región, se produjo una gran movilización popular que buscó resistir el avance capitalista (Sierra 2011). “Se criticaba la dependencia exportadora, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la débil tributación” (Gudynas 2009, 188-189). Mientras que por otra parte, se demandaba deshacer las reformas neoliberales, terminar con la dependencia, diversificar la producción, industrializar las materias primas, entre otros (Gudynas 2009, 189). Los movimientos sociales, así como los partidos de izquierda, aplaudieron e impulsaron el surgimiento de un nuevo tipo de gobierno anti neoliberal que pusiera fin a la larga noche neoliberal, a través de la transformación social y el desmantelamiento de la institución estatal que operó durante esta época (Sierra 2011). A este nuevo tipo de gobierno se lo considera como progresista o de la nueva izquierda.

Con el denominado giro a la izquierda latinoamericano, sustentado en gran medida por las luchas de los movimientos populares, se generaron altas expectativas en cuanto a una orientación gubernamental con políticas públicas contrarias a las modalidades primario-extractivistas de inserción colonial dentro de los mercados internacionales y a los estilos de desarrollo convencionales (Lander 2014, 3). Sin embargo, varios coinciden en que una de las particularidades del neoextractivismo y de la reprimarización es precisamente que “han sido acogidos por los regímenes de centro-izquierda resultantes de los movimientos populares que derrocaron a los regímenes neoliberales” (Petras y Veltmeyer, 2012).

Esto debido a que las exportaciones petroleras y minerales son consideradas como el motor del crecimiento económico por los “gobiernos progresistas”, los cuales son fuertes promotores del neoextractivismo como mecanismo para el desarrollo (Gudynas 2009, 187). Si bien, estos regímenes se presentan como una ruptura o quiebre histórico con el pasado, es decir con la oligarquía neoliberal tradicional y la izquierda estatista, y suelen recurrir a la retórica del “Socialismo del Siglo XXI”, el debate gira hasta qué punto pueden desarrollar políticas que se aparten de los gobiernos neoliberales precedentes (Petras 2012).

Falconí y Vallejo, destacan que tras dos décadas de políticas neoliberales, en la actualidad, la inserción de las economías latinoamericanas en los mercados mundiales ha tomado otra dirección debido a la mejora de los términos de intercambio, respaldada por el incremento de los precios de los commodities a raíz de la demanda de economías emergentes como China (Falconí y Vallejo 2012, 61). Sin embargo, de acuerdo a Svampa, esta demanda estimulada

por los commodities ha dado como resultado, “un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas con escaso valor agregado” (Svampa 2013, 32).

A la par, Lander afirma que el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre América Latina y economías emergentes como China, lejos de ofrecer nuevas modalidades de inserción en la división del mercado internacional, han acentuado las fórmulas coloniales de inserción históricamente dominantes (Lander 2014, 5). Lander sustenta su tesis en que “las exportaciones latinoamericanas a China tienen un componente primario aún mayor que el que tienen las exportaciones dirigidas a los Estados Unidos” (Lander 2014, 5). Lo más preocupante -quizás- de acuerdo a este académico, es que la reprimarización de las industrias latinoamericanas se está produciendo, incluso, en países con economías emergentes como Brasil, donde la reprimarización le podría acarrear serias consecuencias como una desindustrialización temprana (Lander 2014, 6).

Tal situación sucede, según Prada, cuando se modifican los términos de intercambio, así como la misma división del mercado internacional, transfiriéndose la industria pesada a las economías emergentes (Prada 2014, 58). Como resultado, los países con economías emergentes no dejan su dependencia en el modelo extractivista, por lo cual les resulta difícil armonizar la composición fragmentada de su sector económico (Prada 2014, 58). Tal inestabilidad es producto de la clase de vinculación que este tipo de economías tiene con el mercado externo, que además de ser estrecha, es bastante volátil.

Dentro de esta coyuntura, el discurso neoliberal lejos de haber colapsado en América Latina, pese a los cuestionamientos al Consenso de Washington, se ha fortalecido ya que las orientaciones básicas de este posicionamiento no han variado sustancialmente a lo largo de la región (Svampa 2012). El discurso neoliberal latinoamericano continúa sosteniendo -con el énfasis de siempre- la idea de un Estado subordinado al mercado y, particularmente, a las instancias de regulación supranacionales (Svampa 2012). Asimismo, la naturaleza y los recursos naturales, más allá de la fuerte crítica social y ambiental de las últimas dos décadas, continúan siendo catalogados como un recurso o como un capital inagotable por los gobiernos neoliberales (Svampa 2012). No obstante, en los últimos años el discurso neoliberal ha sabido acoplarse a los tópicos de la agenda global, que buscan neutralizar la potencialidad crítica de ciertas nociones o conceptos, y como resultado su discurso ha comenzado a suavizarse e involucrar conceptos como el de “desarrollo sostenible” (Svampa 2012).

Falconí plantea que los gobiernos progresistas latinoamericanos han logrado cambiar las condiciones injustas del extractivismo que se presentaban en el pasado a nivel rentista al hacer frente al capital transnacional y recuperar la renta extractiva para el Estado (Falconí 2014, 114). No obstante, de acuerdo a Veltmeyer, esta estrategia ha sido aplicada incluso en regímenes abiertamente neoliberales como Colombia, ya que el neoextractivismo implica un régimen de regulación cuyo interés principal consiste en lograr un mejor acuerdo con las empresas transnacionales y así poder cooptar una mayor proporción del botín en forma de rentas extractivas a través de regalías e impuestos (Veltmeyer 2013, 87).

Complementariamente, Petras afirma que los gobiernos progresistas de la región, con la posible excepción de Venezuela, han firmado contratos con multinacionales extranjeras importantes del sector extractivo, donde los acuerdos no presentan diferencias significativas de los contratos firmados por los gobiernos neoliberales predecesores (Petras 2013, 13).

Según Acosta, el neoextractivismo “mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo del raigambre colonial” ya que a pesar de que se proclame un mayor control estatal de estas labores extractivistas, en la práctica, son los países centrales quienes tienen el control sobre las exportaciones nacionales (Acosta 2012, 102). Esta visión coincide con los enunciados de la teoría de la dependencia, desarrollada en la segunda mitad de la década de los sesenta. Esta teoría representó un esfuerzo crítico para advertir las limitaciones de un desarrollo iniciado en un período en que la economía mundial ya se encontraba fundada bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas fuerzas imperialistas, aun cuando parte de ellas se encontraba en crisis y se abría la oportunidad para un proceso de descolonización (Dos Santos 2002, 5). Los economistas suecos Blomström y Hettne distinguen 4 ideas centrales que configuran y desarrollan esta teoría:

- a) El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados;
- b) el desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal;
- c) el subdesarrollo no puede ser considerado como primera condición para un proceso evolucionista;
- d) la dependencia no es sólo un fenómeno externo, sino que se manifiesta también bajo diferentes formas en la estructura interna (social, ideológica y política) (Dos Santos 2002, 5).

Por su parte, la corriente estructuralista destaca diferentes aspectos de la dependencia. De acuerdo a Sunkel, por ejemplo, la expresión clave dentro de la dependencia es la “desintegración nacional” en América Latina en tanto que los “conglomerados transnacionales” se posicionan dentro de las economías nacionales, abriendo así una brecha en la sociedad donde la mayor parte de la población resulta marginada (Sunkel 1971 citado en Schaposnik, 2003, 6). Para Furtado la dependencia consiste en los “patrones dependientes de consumo”; mientras que para Cardoso en el “desarrollo dependiente asociado” ya que no considera que una situación de dependencia sea contradictoria con el desarrollo (Kay 1991, 110-111).

Svampa argumenta que los emprendimientos neoextractivistas “tienden a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial, que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y van configurando espacios socioprodutivos dependientes del mercado internacional” (Svampa 2013, 35). A la par, Prada resalta que:

Cuando se dan intentos de replantear las condiciones de las relaciones de intercambio, buscando una salida nacionalista, puede mejorarse la situación, en la medida que se mejore el control del excedente, optando incluso por la industrialización de las materias primas; empero en la medida que sus propias salidas independientes mantienen el modelo extractivista, vuelven a caer en la lógica perversa de la dominación, que ocasiona la subalternidad, y en la lógica destructiva de la dependencia (Prada 2014, 59).

Tanto el discurso neoliberal como progresista latinoamericano ha justificado la práctica neoextractivista indicando que los cuantiosos recursos arrojados por las rentas extractivas son claves para financiar el desarrollo a través de planes de asistencia social y de reducción de la pobreza (Dávalos 2013, 190). Es así como las rentas neoextractivistas se han convertido en una estrategia de articulación política y social que ha movilizado a la sociedad entera y que ha producido consenso popular sobre la práctica neoextractivista como una necesidad imperativa para lograr el desarrollo y la equidad social (Dávalos 2013, 194). Inclusive, dentro de la declaración del ALBA de la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, llevada a cabo el 30 de julio de 2013 en la ciudad de Guayaquil, uno de los párrafos que sustenta la práctica neoextractivista reza lo siguiente:

Por otro lado, manifestamos el derecho y la necesidad que tienen nuestros países de aprovechar, de manera responsable y sustentable, sus recursos naturales no renovables, los cuales cuentan con el potencial de ser utilizados como una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y, en definitiva, el bienestar de nuestros pueblos, teniendo claro que el principal imperativo social de nuestro tiempo y de nuestra regiones es combatir la pobreza y la miseria. En este sentido, rechazamos la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que viven cerca de esa fuente de riqueza. En la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en materia social y económica (Declaración del ALBA desde el Pacífico. XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP 2013).

Dávalos realiza una dura crítica al discurso neoextractivista de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Este académico encasilla a este discurso como una falacia -y en especial- a la metáfora empleada por el presidente progresista ecuatoriano, Rafael Correa, en cuanto a que “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro” con el fin de justificar y legitimar la práctica neoextractivista, puesto que los recursos arrojados por las actividades extractivistas serían utilizados para para financiar el desarrollo, con énfasis en el gasto social en educación y salud (Dávalos 2013, 190). Para este autor, esta metáfora hace evidente la estrecha vinculación existente entre la renta extractivista y la política social, la cual sería otra de las principales características de los gobiernos progresistas de la región (Dávalos 2013, 190). Dávalos identifica 6 argumentos falaces o cuestionables dentro de los discursos neoextractivistas:

En primer lugar está el argumento que la renta extractiva permite el financiamiento al gasto público, especialmente en salud y educación, y que habían sido largamente postergados en los tiempos neoliberales. En segundo lugar, está el discurso que vincula la renta extractiva con la inversión pública, el desarrollo económico y el crecimiento económico. En tercer lugar, está la vinculación de la renta extractiva con las políticas de redistribución del ingreso, sobre todo por la vía de subsidios y asistencia social a los más pobres. En cuarto lugar, está el discurso que propone una visión de soberanía nacional sobre la renta extractiva y que la presenta en plena disputa y confrontación con el capital transnacional, sobre todo con el capitalismo norteamericano. En quinto lugar, está la conformación de empresas nacionales extractivas, así como la renegociación de regalías y contratos de servicios, que implican un cambio

importante con relación al “entreguismo” de los neoliberales. En sexto lugar, está la concepción del extractivismo como una fase de transición hacia una modernización pos-extractiva en una economía intensiva en capital y creadora de valor agregado, que en Ecuador ha asumido la forma de un debate sobre la “matriz productiva” (Dávalos 2013, 192-193).

Además, contrario a la promesa del discurso a favor del neoextractivismo, algunos académicos sustentan que esta práctica ha patrocinado una serie de consecuencias nocivas en las estructuras sociales y económicas con la consolidación de altos niveles de desigualdad dentro de los países que acogen este tipo de actividades (Acosta 2009, 35). De acuerdo a Veltmeyer, por ejemplo, a pesar del éxito que han tenido algunos países en la reducción de la pobreza, existe poca evidencia de un compromiso real por parte de los regímenes progresistas para un cambio social sustantivo que corrija la desigualdad persistente, además de que la prolongada dependencia de estos regímenes en la inversión de empresas extranjeras para la extracción de recursos naturales presenta implicaciones negativas para el desarrollo (Veltmeyer 2013, 83). Asimismo, este académico destaca que existe escasos indicios de que los regímenes progresistas hayan canalizado los ingresos fiscales adicionales derivados de rentas de la exportación de materias primas a programas sociales inclusivos, así como también, de que hayan asignado una parte de los ingresos fiscales a la igualdad social, con la excepción de Venezuela bajo el gobierno de Chávez (Veltmeyer 2013, 83).

No obstante, académicos como Borón, mantienen que la inclusión de la práctica neoextractivista dentro de las agendas desarrollistas de los países latinoamericanos, es necesaria ya que consideran imposible atender los problemas sociales sin tocar dichos recursos (Borón 2013). En el caso progresista, se ha argumentado que es necesario aprovechar el contexto de la elevada demanda y precio de las materias primas para acumular los recursos requeridos con el fin de realizar las inversiones sociales, productivas y de infraestructura que permitan, en una fase posterior, superar el extractivismo (Lander 2015).

También, estos últimos han enfatizado que a pesar de que los recursos naturales son necesarios para lograr mejores niveles sociales, “los recursos naturales no son la opción del futuro, sino más bien alternativas consideradas para dinamizar el desarrollo de un país” (Falconí 2014, 114-155). Es así, como el debate teórico ha reunido a detractores y partidarios de la extracción de recursos naturales y exportación de productos primarios como estrategia de desarrollo.

Adicionalmente, Acosta mantiene que los países latinoamericanos son víctimas de la “paradoja de la abundancia” debido a que la praxis permite afirmar que “la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales” (Acosta 2012, 83). Es así como las economías que dependen para su financiamiento de la labor extractivista y de la exportación de bienes primarios, se encontrarían predispuestas al subdesarrollo, especialmente si éstas son capitalizadas por recursos primarios como el petróleo y los minerales (Acosta 2012, 83). Cabe recordar que América Latina, y en especial Sudamérica, es poseedora de:

[...] las mayores reservas minerales del planeta: un 65% de las reservas mundiales de litio, un 42% de plata, un 38% de cobre, un 33% de estaño, un 21% de hierro, un 18% de bauxita y un 14% de níquel. Se estima que el potencial minero es aún mayor ya que la información geológica disponible es parcial. También son importantes sus reservas petroleras, sobre todo tras la certificación de los crudos extra pesados de la Faja del Orinoco en la República Bolivariana de Venezuela. La región posee además alrededor de un 30% del total de los recursos hídricos renovables del mundo, lo que corresponde a más del 70% del agua del continente americano (UNASUR y CEPAL 2013, 7).

Complementariamente, Schuldt, remarca que de la paradoja de la abundancia se desprenden un sinnúmero de patologías que contribuyen a la consolidación de un círculo vicioso que difícilmente permite salir a estos países del subdesarrollo como: la enfermedad holandesa, el deterioro de los términos de intercambio, el crecimiento empobrecedor, los problemas permanentes de balanza comercial, la dependencia financiera externa, las fluctuaciones de las actividades económicas y sociopolíticas nacionales, la deuda externa contraída en montos sobredimensionados, el auge consumista temporal, y la concentración del ingreso y de la riqueza en pocas manos (Schuldt 2004).

Para comprender la paradoja de la abundancia se debe tener en cuenta que la riqueza proveniente de los recursos naturales es distinta a otros tipos de riqueza. Dentro de esta explicación surgen dos características principales. En primer lugar, a diferencia de otras fuentes de riqueza, la riqueza de recursos naturales no tiene que ser producida sino extraída (Humphreys, Jeffrey y Stiglitz 2007, 4). Por su naturaleza extractiva, la riqueza de recursos naturales puede separarse de otros procesos económicos al prescindir de mayores vínculos con otros sectores industriales y de la participación de amplios sectores de la fuerza laboral nacional. En segundo lugar, los recursos naturales como los minerales y el petróleo, al ser bienes no renovables, se comportan más a manera de activo que a modo de fuente de ingreso

(Humphreys, Jeffrey y Stiglitz 2007, 4). Como resultado, ambas características dan lugar a una gran variedad de procesos políticos y económicos que terminan por producir efectos adversos en la economía de un país.

No obstante, el Banco Mundial sostiene que la abundancia de recursos naturales no necesariamente impide el crecimiento o desarrollo, ya que la evidencia reciente sugeriría que los recursos naturales pueden realmente tener un impacto positivo en el crecimiento y que la “maldición” puede surgir si estos recursos son administrados de forma deficiente (Sinnott, Nash y De la Torre 2010, 1). Frente a esta realidad, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promueven como solución una adecuada “gobernanza” de los recursos naturales, cobijada bajo políticas económicas ortodoxas, dejando de lado los problemas estructurales y medulares que traen consigo este tipo de economías extractivistas (Acosta 2012, 84).

Asimismo, la CEPAL, ha planteado la necesidad de avanzar hacia consensos políticos para fortalecer la gobernanza de los recursos naturales, ya que históricamente, los países latinoamericanos han presentado dificultades para traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos naturales, en procesos de desarrollo económico a largo plazo, con niveles de crecimiento estables que permitan reducir de manera drástica la pobreza y elevar el ingreso per cápita (CEPAL 2013, 10-11).

2. Modelos de desarrollo en América Latina: el modelo neoliberal y progresista latinoamericano

Un modelo de desarrollo es la manera en que una sociedad organiza tanto sus recursos materiales como sus instituciones, con el objetivo de alcanzar el progreso y la satisfacción de las necesidades de todos sus miembros, articulándolo con su historia, su cultura, su producción económica, su tradición jurídico política y sus posibilidades de adelanto científico y tecnológico (Mejía-Ortega y Franco-Giraldo 2007). En el siglo XX, Latinoamérica experimentó tres modelos de desarrollo: el modelo keynesiano y Estado de Bienestar, el modelo basado en la Sustitución de Importaciones (ISI), y el modelo neoliberal. No obstante, a principios del siglo XXI, algunos países latinoamericanos han comenzado a promover un nuevo esquema de desarrollo: el modelo progresista latinoamericano. Cabe resaltar que un rasgo característico compartido por estos cuatro modelos, es su fuerte dependencia en las actividades extractivas y la reprimarización industrial.

El primer modelo, keynesianismo y Estado de Bienestar, fue un esquema presente en América Latina a partir de los años treinta. El keynesianismo se encontraba centrado en la teoría general de la ocupación, el interés financiero y el dinero, y se ocupaba de agregados como el ingreso, el consumo, el ahorro e inversión, más que de la determinación de precios, elemento principal de la teoría económica (Mejía-Ortega y Franco-Giraldo 2007, 474). Mientras que el Estado de Bienestar, surgió en la forma de un Estado que garantizaría estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, vivienda educación y seguridad social a cada ciudadano, sin discriminación alguna, como un derecho político (Mejía-Ortega y Franco-Giraldo 2007, 475). Es a partir de este modelo que Latinoamérica empezó a advertir un activismo macroeconómico desconocido previamente, cuyo objetivo primordial fue el intento de moderar los ciclos económicos (Ocampo 2011).

Sin embargo, en América Latina el modelo keynesianismo y Estado de Bienestar nunca tuvo ni pudo alcanzar, la extensión y la profundidad características de los Estados de sociedades desarrolladas. Esto debido a que la provisión de bienes y servicios por parte del Estado se limitó a los miembros de la clase laboral vinculados al proceso productivo (Moncayo 2012, 34). Además, el funcionamiento de los aparatos gubernamentales se desplegó en condiciones de ineficiencia, ineficacia e irracionalidad (Moncayo 2012, 34). Pero sobre todo, los modelos de desarrollo capitalista internos pusieron serias limitaciones y restricciones al despliegue de formas avanzadas del Estado interventor y de bienestar (Moncayo 2012, 34).

El modelo basado en la Sustitución de Importaciones (ISI), una etapa que inició en América Latina entre la década de 1930 y 1940, consistía en la combinación de industrialización e intervención estatal. El eje de este nuevo modelo de desarrollo se manifestó en torno a tres elementos: “el desarrollo de una política macroeconómica centrada en el manejo de la balanza de pagos, la visión de la industrialización como motor de desarrollo y la fuerte intervención estatal en diversas esferas de la vida económica y social” (Ocampo 2011). Sin embargo, dentro de la fase de industrialización, los sectores primario-exportadores jugaron un papel trascendente en el desarrollo latinoamericano, ya que este proceso continuó dependiendo -la mayor parte del período- de las divisas que generaban las exportaciones de productos primarios (Ocampo 2011).

Durante este modelo, los patrones de desarrollo presentaron diferencias entre los países de la región que variaron a lo largo del tiempo. Por una parte, los países más pequeños - particularmente- los centroamericanos, pero también Bolivia, Ecuador y Perú, impusieron la Sustitución de Importaciones sobre un modelo que continuó siendo primario-exportador de manera esencial (Ocampo 2011). Mientras que los países de mayor tamaño, como Brasil, México, Argentina y Colombia, presentaron una evolución gradual, hacia variantes de un modelo mixto que combinaba sustitución de importaciones con promoción de exportaciones e integración regional. No obstante, en la década de 1970, el modelo ISI comenzó a mostrar los primeros signos de agotamiento en la región debido a que Latinoamérica empezó a experimentar de manera progresiva, bajos índices de competitividad en el mundo, reducidas oportunidades para exportar, altos índices de inflación y la consecuente crisis de la deuda de los años ochenta (Mejía-Ortega y Franco-Giraldo 2007, 475).

2.1. El modelo neoliberal

El neoliberalismo es una de las ideologías más importantes de finales del siglo XX. En la segunda mitad de los setenta y durante los ochenta, desde la Universidad de Harvard, varios académicos lanzaron una arremetida sin precedentes contra las políticas de igualdad, cuyos planteamientos trascendieron el mundo académico para introducirse en los discursos proclamados por la naciente ola de los gobiernos neoconservadores (Garretón 2012, 24). Esta ideología tenía como propósito combatir el keynesianismo y acomodar las bases para otro tipo de capitalismo (Garretón 2012, 24).

Desafiando al Estado de Bienestar de la época, el proyecto neoliberal se fundó en el valor intrínseco de la desigualdad como condición necesaria para el mantenimiento de la libertad de los individuos y de la competencia (Garretón 2012, 24). Este proyecto puede resumirse en 7 postulados: el individualismo extremo; la primacía de la libertad; el mercado es el lugar principal, y en la práctica excluyente de otros, de realización de la libertad; el individualismo neoliberal considera la desigualdad una cuestión natural; el modo de producción capitalista es visto como el motor de la historia; la intervención estatal atenta contra el orden social de mercado como eje constitutivo de las sociedades; y, la sumisión del régimen político a la dinámica económica (Garretón 2012, 24-27).

En el caso de Latinoamérica, la crisis de la deuda de agosto de 1982, fue la puerta de entrada para el establecimiento del modelo neoliberal en la región. A inicios de los ochenta, las economías latinoamericanas comenzaron a sufrir grandes dificultades para alcanzar niveles adecuados de financiamiento externo, lo cual les obligó a desarrollar procesos de reforma y programas de ajuste que les permitieran generar divisas destinadas al pago de los compromisos contraídos en los años anteriores (Gigli 1999, 7). Dichos programas, se caracterizaron por realizar un importante control de los precios, sin excesivo énfasis en la disciplina fiscal, y cuando fracasaron en su intento de generar grandes excedentes, produjeron significativos descensos de los ingresos reales y un aumento descomunal de la inflación (Gigli 1999, 7).

El fracaso de este ajuste ortodoxo sumió a Latinoamérica en un panorama de estancamiento denominado como Década Pérdida para el Desarrollo, ya que no se logró superar los desequilibrios económicos y condujo a que los países latinoamericanos opten por un replanteamiento de las estrategias de reforma (Guillén 2008, 39). Esta nueva estrategia de los años noventa, bautizada como el Consenso de Washington consistía en diez medidas de política económica que abarcaban desde la disciplina fiscal hasta la liberalización comercial y financiera (Guillén 2008, 39). Este decálogo amparaba las siguientes medidas y reformas:

1. Disciplina fiscal en aras de garantizar excedentes presupuestarios;
2. Desvío de las prioridades del gasto público en dirección a las áreas más productivas (sanidad, educación e infraestructura);
3. Reforma fiscal encaminada a bajar las tasas de impuestos;
4. Liberalización de los mercados financieros;
5. Mantenimiento de tipos de cambio estandarizados y competitivos;
6. Liberalización del comercio, supresión de las contingencias y baja de aranceles aduaneros;
7. Igual tratamiento a las inversiones extranjeras directas que a las internas;
8. Privatizaciones;
9. Desregulaciones; también de los sectores con fines sociales;
10. Garantía de los derechos de propiedad (Serrano 2005, 16).

Se debe observar que el Consenso de Washington no consistió únicamente en un decálogo de política económica impuesto desde Washington, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, sino que expresaba, esencialmente, un compromiso político y un entramado de intereses, entre el capital financiero globalizado de Estados Unidos y las élites locales de América Latina (Guillén 2008, 39).

Si bien el modelo neoliberal junto con sus políticas tuvieron éxito en reorganizar de manera sustancial el aparato productivo de Latinoamérica, profundizando su inserción en los mercados internacionales con base en la exportación de productos primarios, y consolidando una nueva forma y estructura del Estado; presentaron un resultado adverso en su promesa de mejorar la situación social de las poblaciones más desfavorecidas y establecer una nueva era de desarrollo y crecimiento sostenible en la región (Papa 2004, 8).

En el caso colombiano, al igual que en varios países de la región, las empresas transnacionales han mantenido un rol determinante dentro de este modelo, al mismo tiempo que el Estado ha sido funcional a sus intereses, a través de regulaciones y controles limitados, donde se incluyen regalías y tributos bajos (Lerman Alperstein 2014, 128). Con este contexto, surge el cuestionamiento de cómo puede sustentarse una base para el desarrollo, la equidad y la justicia social, cuando los grandes monopolios así como las transnacionales han venido absorbiendo las economías nacionales, dentro de una ardua lucha por el dominio del mercado, y todo esto respaldado por el Estado (Castaño 2002, 61).

Cabe señalar que el modelo neoliberal en la región apostaba al extractivismo como generador de crecimiento económico y pronosticaba que los réditos de esta práctica tendrían un efecto de derrame hacia el resto de la sociedad, al mismo tiempo de que se minimizaban, negaban o reprimían las protestas ciudadanas por los impactos sociales y ambientales ligados a la explotación (Lerman Alperstein 2014, 128). También, las políticas aplicadas al amparo del Consenso de Washington en la década de los noventa, “sentaron las bases normativas y jurídicas que permitieron la expansión del modelo extractivista, garantizando seguridad jurídica para los capitales y una alta rentabilidad empresarial” (Svampa 2012). En la actualidad, resulta obvio afirmar que este modelo social, económico, político y cultural sólo puede sobrevivir destruyendo su entorno social y ambiental (Ceja Martínez 2014, 2).

En la década del 2000, las sociedades afectadas por fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia común o el desorden generalizado, como Colombia y Ecuador, se encontraron en la disyuntiva de absorber por completo el modelo neoliberal o perseguir un nuevo paradigma. En Colombia, con una guerra de por medio, y gracias al gobierno de Álvaro Uribe, el avance neoliberal se tornó impetuoso e incontenible (Moncayo 2012, 45-46). Mientras que en Ecuador, el nuevo régimen político optó por una senda alternativa y controversial del capitalismo aún no resuelta, el progresismo (Moncayo 2012, 46).

2.2. El modelo progresista latinoamericano

Como resultado de la crisis del modelo neoliberal, a inicios del siglo XXI, las acciones de conflicto en Latinoamérica se multiplicaron de manera significativa, y fueron tomando forma de movimientos sociales. El incremento de las movilizaciones, huelgas y bloqueos de rutas fueron impulsadas por distintos colectivos y organizaciones que se manifestaban en un contexto regional marcado por la expansión y agravamiento de la crisis económica y social (Seoane, Taddei y Algranati 2001, 45). La mayoría de estas luchas cristalizaron una fuerte y enfática reacción a las políticas de ajuste fiscal y a las secuelas y regresiones en el sector social como el desempleo, la pobreza, la indigencia, la desnutrición infantil y la exclusión de millones de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, resultado de la aplicación del modelo neoliberal en la región (Seoane, Taddei y Algranati 2001, 46).

Este hecho dio lugar a un proceso inédito en el continente latinoamericano con la emergencia de un conjunto de gobiernos con el apelativo de progresistas. Estos gobiernos son el resultado del desarrollo de alternativas de izquierda moderadas y radicales a la ortodoxia neoliberal que se extendió por todo el continente en décadas anteriores, para devolverle al Estado y a la sociedad, el predominio sobre el mercado y los grandes intereses capitalistas nacionales y transnacionales (Martner 2011, 2).

El modelo progresista difiere de país a país en sus configuraciones institucionales y estrategias de desarrollo, con matices específicos en términos de radicalidad de las respuestas estatales ante la cuestión social actual. Dentro del modelo progresista contemporáneo se puede identificar dos variantes principales. En primer lugar, se encuentran:

[...] los gobiernos progresistas del Cono Sur: -el Chile de los socialistas moderados Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en coalición con los cristiano-demócratas desde 2000, en continuidad con los gobiernos democráticos desde 1990; el Brasil del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva desde 2003 su sucesora Dilma Rousseff; el Uruguay del Frente Amplio de Tabaré Vázquez desde 2005 y su sucesor José Mujica- los que pertenecen a corrientes políticas de izquierda o centro izquierda más o menos comparables con la vertiente socialdemócrata, en todo caso emanadas de las complejas realidades latinoamericanas y de sus procesos recientes de consolidación democrática. Una orientación relativamente semejante, pero en diversos aspectos más radical, ha mantenido la Argentina de los peronistas Néstor Kirchner y Cristina Fernández [...] (Martner 2011, 2-3).

En segundo lugar, se distingue a los gobiernos de corte refundacional que han emergido particularmente en el espacio andino: en Venezuela con Hugo Chávez desde 1999, en Bolivia con Evo Morales desde 2006 y en Ecuador con Rafael Correa desde 2007 (Martner 2011, 3). Se debe enfatizar que estos últimos han llegado al poder luego de serias crisis políticas y del colapso de los sistemas tradicionales de los partidos políticos en sus respectivos países (Martner 2011, 3). Complementariamente, dentro de este esquema progresista no se puede hablar de una izquierda latinoamericana, sino de izquierdas, ya que bajo el concepto de izquierda progresista, se han articulado diferentes tendencias, no siempre compatibles, y a menudo antagónicas en los distintos países de la región (Ensignia 2008, 9).

No obstante, los gobiernos progresistas de la región, comparten el hecho de que se han alejado del espíritu de la izquierda clásica con sus estrategias de desarrollo, especialmente con el empleo y profundización de prácticas como el neoextractivismo, al mantener estructuras productivas primarizadas, asentadas sobre enclaves de exportación subordinadas al comercio y la inversión internacional (Gudynas 2010, 155). A su vez, estos gobiernos han intentado regresar a lineamientos de izquierda a través de la implementación de programas sociales que se apoyan cada vez más en planes de transferencias monetarias (Gudynas 2010, 155).

Cabe resaltar que en varios de los países que han acogido este tipo de modelo, se ha visualizado un cambio sustancial respecto a la situación política neoliberal precedente, ya que más allá de sus diferentes posturas y énfasis, los gobiernos progresistas han roto con las reformas neoliberales, reposicionando al Estado, y desplegando un abanico de programas sociales que en general, han sido exitosos en reducir la pobreza, y en algunos casos incluso la desigualdad (Gudynas 2010, 157). Si bien la pobreza ha descendido, esto no implica necesariamente su eliminación en tanto se mantengan los anclajes de la acumulación de capital, es decir, las restricciones y límites de las políticas sociales progresistas están delimitados por el propio sistema económico capitalista (Adel 2014, 134).

Actualmente, entre las tendencias políticas presentes en América Latina y la búsqueda del desarrollo, se han confrontado dos polos opuestos: un polo conservador, con los gobiernos neoliberales aún presentes en la región, que considera al desarrollo como un sinónimo de modernización que se consigue con la adaptación pasiva de los países latinoamericanos a las necesidades de los centros capitalistas; y un polo progresista que postula un proyecto nacional de desarrollo que atienda las necesidades básicas de la población sin renunciar a su inserción e integración con la economía-mundo (Guillén 2008, 45). En este sentido, la postura progresista

se establece como una mirada crítica del presente, que si bien marca una continuidad con las izquierdas tradicionales, carece de la intención de establecer un cambio sistémico, ya que lo que en realidad persigue, es una mayor equidad y una mejor y más justa inserción de las economías latinoamericanas en los escenarios de la globalización (Garretón 2012, 48).

3. La transformación de la política social en América Latina

La política social y los distintos modelos de desarrollo en Latinoamérica, han guardado una relación muy estrecha, ya que estos últimos, han sido determinantes a la hora de definir la política social, ya sea de manera directa o indirecta. A la par, para que la política social pueda ser implementada, los Estados necesitan contar con una fuente de recursos que les permita implementar sus estrategias de desarrollo. En el caso latinoamericano y en la coyuntura actual, las actividades extractivas han llegado a consolidarse como una de las principales fuentes de ingreso para atender y –sobre todo- mejorar la problemática social, de acuerdo al discurso de los gobiernos neoliberales y progresistas de la región.

La política social es el instrumento estatal a través del cual se transfiere una parte de los ingresos de un sector de la población a otro (Sierra 2011). La política social puede ser visualizada en dos esferas, la de la política sectorial y la de los programas. La lógica de ésta política se expresa en la socialización de ciertos elementos como la educación, la salud, el transporte, la vialidad, y en lo que se conoce como consumo socializado (Sierra 2011). Las políticas sociales de este tipo son propias del modelo de Estado de Bienestar. Cabe recordar, que toda política social promueve y se compromete a alcanzar un patrón menor de desigualdad social, por lo cual es parte de una estrategia de desarrollo y a la vez, un efecto de este (Valdés y Espina 2011, 14). En este sentido los sujetos hacia los cuales va dirigida la política social son:

- a) La población comprendida en la franja de pobreza. Caso en que la política social tiene un carácter asistencial o compensatorio.
- b) La población vulnerable por su situación socioeconómica, geográfica o etnocultural. Aquí la política social tiene un carácter fundamentalmente preventivo.
- c) La población que por su nivel de ingresos no puede acceder a los bienes públicos en condiciones mercantiles: la mayor parte de la población trabajadora.
- d) El sector que, por su condición ciudadana, tiene derecho a recibir determinados bienes públicos. En este caso se encuentran aquellos ciudadanos a quienes la Constitución y las leyes otorgan derecho a recibir determinados bienes públicos, sobre todo salud y educación primaria.
- e) La población total que, como seres humanos, tiene derecho a recibir, con carácter

universal y gratuito, los bienes públicos básicos; o sea, los residentes permanentes o transitorios en toda sociedad (Valdés y Espina 2011, 16).

En América Latina, las políticas sociales han variado de acuerdo a los distintos momentos históricos y a los modelos de desarrollo impulsados en éstos (Sánchez 2012, 2). Anterior a la crisis de la deuda de la década de los ochenta, en el marco del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), se instauró un Estado de bienestar, donde la protección y seguridad social estaban reservados sobre todo al empleo formal, junto con una ampliación de la cobertura en educación, salud y asistencia a través de subsidios al consumo (Sánchez 2012, 2). De esta manera, la política social se estableció como un mecanismo de redistribución de recursos que buscaba remediar la desigualdad social de acuerdo al criterio de equidad, al margen de los mecanismos de mercado, a través de la oferta de bienes y servicios en áreas como salud, educación, vivienda, alimentación, transporte, etcétera, disponibles de manera gratuita o a precios subsidiados (Cardozo Brum 2005, 171).

Cabe señalar que en este contexto, la seguridad social tuvo una participación importante ya que representaba la mayor parte del gasto social y que la asignación de recursos a servicios y programas sociales estaba regida por la oferta (Ponce Jarrín 2008, 10). Respecto a salud y educación, se favorecieron los servicios complejos. En salud se promovió la atención curativa, y las inversiones en hospitales y medicina especializada, mientras que en educación, el gasto se dirigió hacia la educación post-secundaria y superior (Ponce Jarrín 2008, 10-11). Dentro de este espacio, en países como Colombia, por ejemplo, el Estado empezó a asumir gradualmente responsabilidades en torno a la asistencia pública, y partió por garantizar la seguridad social de los trabajadores a través de la creación de la Caja Nacional de Previsión en 1944 y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) en 1946 (Zapata 2009, 9).

Sin embargo, a partir de la crisis de la deuda hasta inicios del siglo XXI, en el contexto de la instauración del modelo neoliberal, impulsado en varios países latinoamericanos por las dictaduras militares, el Estado dio un retroceso y asumió un rol subsidiario y mitigador frente a situaciones de emergencia, particularmente, ante las crisis económicas (Sánchez 2012, 2). Los ejes del modelo neoliberal se enfocaron en la descentralización del Estado, privatización de empresas y servicios públicos, incremento de la participación privada en la gestión y prestación directa de servicios, y en la focalización hacia los más pobres a través de políticas sociales de carácter asistencial (Serrano 2005, 16).

En cuanto a política social, la principal característica del período de estabilización fue la restricción fiscal, y el gasto social se convirtió en la principal variable de ajuste de la mayoría de las economías latinoamericanas (Ponce Jarrín 2008, 14). El decálogo del Consenso de Washington en la era neoliberal, a su vez, dio partida a un proceso que disminuyó la gestión social estatal, lo cual se tradujo en una dramática reducción del gasto público y el gasto social en todos los países latinoamericanos.

Por su parte, durante el período de estabilización macroeconómica neoliberal surgieron cuatro tipos de programas sociales en América Latina. Entre éstos se destacaron: programas de empleo de emergencia (que consistían en una transferencia monetaria a cambio de trabajo para la construcción de obra pública en las regiones de pobreza extrema); fondos de inversión social (que perseguían ampliar la infraestructura básica, la oferta de salud y la educación básica en las comunidades menos favorecidas), redes de protección social y por último, programas de transferencias monetarias (ambos destinados a la disminución de la pobreza y pobreza extrema a corto plazo) (Ponce Jarrín 2008, 15). No obstante, a pesar de que varios de estos programas se concibieron como una medida transitoria, terminaron por convertirse en programas que continúan hasta la actualidad.

Tras la reforma neoliberal, en la última década se ha registrado cambios significativos en el campo de la política social en América Latina, en especial, a partir del ascenso al poder de los gobiernos progresistas o de izquierda (Adel 2014, 132). La protección social, y primordialmente, la lucha contra la pobreza, han devenido puntos de atención prioritaria dentro de la agenda política y de desarrollo en Latinoamérica, no solamente en los gobiernos de centroizquierda, sino también, de los gobiernos de centroderecha. (Barrientos 2012, 65).

Por un lado, se ha reconocido los derechos de ciudadanía y por otro, se ha retornado al Estado Benefactor como ente regulador, articulador y proveedor de bienestar (Adel 2014, 132). Este hecho además de ser enigmático, es en cierto modo inesperado, debido a la disminución del papel estatal y del gasto social registrado durante las décadas precedentes de 1980 y 1990 (Barrientos 2012, 66). Asimismo, las administraciones progresistas han implementado, sobre todo, planes y programas de transferencias monetarias, que se han acoplado a la estructura de protección social preexistente (Adel 2014, 134).

A pesar de que la política social está concebida para ser sostenida por diferentes fuentes de financiamiento, el gasto público social se ha convertido en su principal pilar y promotor (Valdés y Espina 2011, 15). Por tal razón, el gasto público social se ha contemplado como un porcentaje del presupuesto público relacionado con los ingresos del Estado y la capacidad fiscal que éste posee para sustentarlo (Valdés y Espina 2011, 15).

Cabe resaltar que hasta mediados de la década del 2000, el gasto público social había evolucionado de manera procíclica (CEPAL 2013, 39). Sin embargo, en la segunda mitad de la década, en varios países latinoamericanos se dieron esfuerzos sistemáticos para reforzar los programas sociales, en particular los orientados a la lucha contra la pobreza, hecho que marcó un primer punto de inflexión en el comportamiento del gasto público social (CEPAL 2013, 39). Este crecimiento acelerado del gasto social desde 2005, se dio principalmente a partir de políticas destinadas a contrarrestar choques externos como:

[...] el fuerte aumento de los precios de los alimentos y combustibles en 2008; el alza de los precios de productos básicos importados y exportados que se había iniciado en 2003; la crisis financiera mundial, con sus mayores manifestaciones y consecuencias entre fines de 2008 y 2009; y la más reciente incertidumbre en el contexto externo, como consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico mundial, que aún se refleja en una tasa de crecimiento muy baja en los países de la Unión Europea y en la mantención de los estímulos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a la espera de la disminución de la tasa de desempleo (CEPAL 2013, 39).

En los últimos 10 años, las estrategias de desarrollo presentes en las agendas de política social de la mayoría de los países de la región para combatir la pobreza y la desigualdad se han cimentado en cuatro pilares: inversiones importantes en educación y salud, no sólo para ampliar o universalizar la cobertura, sino también, para asegurar mejorías substanciales en la calidad de suministro; inversión en infraestructura y servicios básicos; modernización del Estado, a través de la agilidad en el acceso a subsidios y pensiones, mejoramiento de sistemas de información y registro, establecimiento de un sistema impositivo, eficiencia en trámites y permisos, etc.; y programas sociales a través de transferencias directas, condicionadas y no condicionadas (Peticara 2012, 6).

Es precisamente este último pilar, los programas o proyectos sociales, a través del cual la política social ha comenzado a operar en forma progresiva. Un programa social es “un conjunto planificado de acciones humanas y recursos materiales que tiene el propósito de resolver algún problema, de forma tal que el diseño de las intervenciones expresa una teoría determinada sobre la realidad que se interviene” (Fernández-Ballesteros 1996). Dentro de los programas sociales se puede diferenciar dos tipos de proyectos: los de carácter promocional, asociados con la idea de desarrollo de capacidades, y los de protección social, fundados en transferencias monetarias condicionadas (Serrano 2005, 24).

Los programas promocionales, de manera general, son descentralizados y relativamente flexibles en su implementación, participan agentes tanto públicos como privados, los beneficiarios asumen cuotas de participación y responsabilidad por el tipo de soluciones que se brindan, y tienen un marcado carácter local ya que suelen involucrar a los municipios o prefecturas e incorporar componentes promocionales, participativos y de desarrollo local (Serrano 2005, 24).

Los programas asistenciales, por su parte, consisten en transferencias monetarias a los individuos o recursos materiales, y en algunos casos solicitan contraprestación de parte de los beneficiarios (Serrano 2005, 24). Éstos últimos representan un importante espacio de debate sobre lo que podría representar una nueva política social. Para algunos se trata únicamente de programas sociales compensatorios que representan una herencia del neoliberalismo, mientras que para otros se trata de programas orientados a generar capacidades, donde se ven combinados el universalismo y el enfoque de derechos (Ponce Jarrín 2008, 19).

Asimismo, en América Latina, las prestaciones a través de los programas sociales se han dado en tres etapas visiblemente diferenciadas. En la primera etapa que comprendió desde mediados de la década de los ochenta hasta principios de la década de los noventa, predominaron intervenciones sociales compensatorias y coyunturales, orientadas particularmente hacia los sectores sociales considerados indigentes (Midaglia 2012, 81). La segunda fase comenzó en los noventa, con programas que se idearon como estrategias de cierta permanencia y que intentaron contemplar la multiplicidad de causas presentes en las situaciones de pobreza (Midaglia 2012, 81). Dentro de este contexto, se destacaron medidas que perseguían iniciativas multisectoriales que extendieron la cobertura incorporando a nuevos segmentos de población más necesitada (Midaglia 2012, 82). Estas medidas fueron resultado de la incapacidad que presentó el crecimiento de las economías latinoamericanas

para transformar las condiciones sociales de la población sumida en la pobreza extrema. Por último, la tercera fase inició con la llegada del siglo XXI con la promoción de paquetes específicos asistenciales (Midaglia 2012, 82).

Un Programa Asistencial de Transferencias Condicionadas:

[...] consiste en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de que estas cumplan con ciertas conductas asociadas al mejoramiento de sus capacidades humanas. En algunos programas, se contempla la entrega de beneficios a otras categorías de personas, como adultos sin empleo, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que permite incorporar familias sin hijos menores de edad (Cecchini y Madariaga 2011, 13).

Entre los Programas sociales de Transferencias Condicionadas (PTC) que han emergido en Latinoamérica a partir del año 2000 se encuentran: México: Progresá, Programa de Educación, Salud y Alimentación (1997-2001) y Oportunidades (2002 a la fecha); Brasil: Hambre Cero y Bolsa Familia (2003-2006); Argentina: Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (abril de 2002 a la fecha); Ecuador: Bono Solidario (1998-2003) y Bono de Desarrollo Humano (abril de 2003 a la fecha); y, Chile: Sistema de Protección Social Chile Solidario (mayo de 2002 a la fecha) (Serrano 2005, 43-50). Cabe destacar que el volumen de población que estos programas ampara es significativo (Serrano 2005, 52).

En Ecuador, las medidas que apuntan a la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza han ido en aumento y han tomado distintos matices a través de programas sociales en los últimos años. Dichos programas sociales cubren áreas como: la seguridad social, el mercado laboral y la asistencia social, que constituye una de las áreas más amplias y diversas (Albornoz y Oleas 2012, 90). Cabe señalar que la mayoría de programas sociales creados a partir de finales de los años noventa corresponden a bonos, es decir transferencias de efectivo, generalmente no condicionada, que pueden o no estar atados a bienes o servicios particulares (Albornoz y Oleas 2012, 90).

A partir de 2007, con el ascenso de presidente progresista, Rafael Correa, el Estado tomó el rol protagónico en el ámbito y el programa estrella de transferencia de efectivo, el Bono de Desarrollo Humano (BDH), se vio duplicado (Albornoz y Oleas 2012, 91). De manera general, el gasto del gobierno se disparó, así como también, el gasto destinado a políticas y programas sociales (Albornoz y Oleas 2012, 91). Sin embargo, no se debe dejar de lado el

hecho de que varios de estos programas sociales pueden ser utilizados por la racionalidad populista como una plataforma política y clientelar.

Por su parte, en el caso colombiano, tras la crisis de finales de los años noventa, este país emprendió una nueva era de su política social neoliberal con la implementación y transformación de algunos programas sociales para la superación de la pobreza extrema, así como para mitigar los efectos de la recesión sobre la población más vulnerable del país (Parra Torrado y Trujillo 2012, 59). Siguiendo la tendencia mundial de la implementación de programas de transferencias condicionadas, el gobierno colombiano creó el programa Familias en Acción, cuya ejecución representó una innovación entre los programas sociales existentes en el país al exigir ciertas condiciones a los beneficiarios con el fin de mejorar su bienestar (Parra Torrado y Trujillo 2012, 59). Adicionalmente, en los últimos años el gobierno colombiano ha desarrollado una nueva estrategia de superación de la pobreza extrema que persigue, a través de visitas de cogestores sociales, empoderar a los hogares para que sean gestores de su propio desarrollo, a la vez que tiene como objetivo articular y fortalecer la oferta de programas sociales dando acceso preferente a la población atendida por esta estrategia (Parra Torrado y Trujillo 2012, 59).

Conclusiones

En conclusión, los debates en torno al neoextractivismo, los modelos de desarrollo latinoamericanos emprendidos por las distintas tendencias políticas e ideológicas y su nexo con la política social, así como la coyuntura política y económica internacional son factores esenciales para poder comprender la intensificación y consolidación de la práctica extractivista en Latinoamérica en la última década. La teoría del neoextractivismo involucra todas estas variables y brinda una comprensión holística sobre el tema en el plano económico, político y social.

Resulta innegable que el neoextractivismo tomó un gran impulso en todos los países latinoamericanos, independiente de su tendencia política e ideológica y de su modelo de desarrollo, cuando en la última década, el precio de las materias primas o commodities se disparó a nivel mundial, constituyéndose este hecho en un incentivo para continuar -e inclusive- profundizar el extractivismo, que desde la época colonial fue implantado en la región y que nunca ha dejado de estar presente en los distintos modelos latinoamericanos de desarrollo. Si bien los niveles socioeconómicos, en varios países latinoamericanos,

presentaron un importante repunte durante el pasado período de prosperidad económica gracias a las generosas rentas derivadas de las actividades extractivas; en la coyuntura actual, la sostenibilidad de los resultados alcanzados se torna incierta.

Es por esta razón que el neoextractivismo es la teoría de Economía Política Internacional que mejor se ajusta como marco teórico para poder sustentar la problemática y solventar el objetivo central que esta investigación busca desarrollar: analizar la relación entre la práctica neoextractivista y los indicadores socioeconómicos de Colombia y Ecuador en el período 2000-2014.

Capítulo 3

La exportación de commodities y su contribución al crecimiento económico de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014

Lo inevitable rara vez sucede, es lo inesperado lo que suele ocurrir.

-John Maynard Keynes

Introducción

El propósito del presente capítulo es realizar un análisis de las materias primas sustentado en indicadores económicos con el objetivo de descifrar el peso o participación real de este tipo de bienes en las exportaciones y en el crecimiento económico que experimentaron Ecuador y Colombia durante el período 2000-2014. A través de este estudio se pretende plasmar un diagnóstico entorno al boom de los commodities y de qué manera éste ha influido o no en una variación significativa de las rentas extractivistas dentro de las arcas de ambos Estados. Asimismo, busca poner en relieve el alto grado de dependencia en las materias primas que conservan estos dos países dentro de su actividad económica, particularmente con el petróleo, y cómo este hecho los mantiene sujetos a shocks externos, como crisis o recesiones del sistema, donde su margen de maniobra es muy limitado y vienen a develar los desequilibrios y problemas estructurales que sus economías han venido acumulado por años.

Para comenzar con este análisis es imprescindible estudiar los factores que en el transcurso de este período, fueron responsables y que dieron origen a este auge sin precedentes de las materias primas a nivel mundial. Es así como uno de los puntos claves para entender el incremento de la demanda de las materias primas, y por ende el alza de los precios internacionales de este tipo de bienes, fue el intenso dinamismo que cobraron las economías emergentes, especialmente las asiáticas, a partir del año 2000. Este hecho contrapuso elementos como la oferta y la demanda que coadyuvaron a que se produzca el boom de las materias primas. También, las bajas tasas de interés, junto con la debilidad del dólar dentro de esta coyuntura y la emisión de una amplia gama de derivados en los mercados financieros, jugaron un papel importante para tal incremento en la demanda de bienes primarios. No obstante, este ciclo de expansión económica ha empezado a mostrar signos de agotamiento junto con una disminución progresiva de los precios de las materias primas en los últimos años.

Por su parte, también se torna indispensable analizar de qué manera el boom internacional de las materias primas ha afectado a las economías latinoamericanas. Si bien a lo largo de la historia, América Latina ha sido considerada como una región primario exportadora dentro de los mercados internacionales, el fenómeno de los commodities ha venido a reafirmar esta categorización, además de favorecer la desindustrialización de aquellos países cuyas economías se perfilaban como emergentes dentro de la región. Sin embargo, el crecimiento latinoamericano apoyado en las exportaciones de bienes primarios ha llegado a su fin, y actualmente la región enfrenta los primeros signos de recesión, tras una década de prosperidad económica.

En cuanto a los casos de estudio: Ecuador y Colombia, resulta interesante explorar la manera en que sus economías han ido evolucionando, así como los factores que han incidido en este proceso, a lo largo del período 2000-2014, -es decir- antes, durante y después del boom de los commodities. Cabe recordar que ambos países recibieron el nuevo milenio tras una profunda recesión de la cual lograron sobreponerse con la implementación de políticas fiscales y estructurales. Además, contrario a todo pronóstico, para mitad de la década presentaron un crecimiento exponencial de su PIB, apoyado -en gran medida- en el alza de los precios de las materias primas. También, se torna importante develar los principales commodities que han nutrido el crecimiento económico de estos dos países a través de sus exportaciones, y los efectos, como la desindustrialización y la reprimarización, que la especialización en este tipo de bienes trae consigo.

Asimismo, el hecho de que en Ecuador haya asumido la presidencia un ejecutivo progresista, y en Colombia se haya dado una transición entre ejecutivos neoliberales con posturas similares, es un rasgo que ha tenido relevancia tanto en su política como en su desempeño económico en este espacio de tiempo. Con base en estos datos, este apartado busca demostrar la forma en que los ingresos provenientes de la venta externa de materias primas, particularmente durante el auge de los commodities, han nutrido el crecimiento económico así como su contribución al financiamiento del Estado ecuatoriano y colombiano.

La primera sección del capítulo aborda el auge de los commodities y la participación de las economías emergentes, específicamente las asiáticas, como punto de partida para el significativo crecimiento económico que experimentaron varios países en la última década. Por su parte, en la segunda sección se plantea el auge de los commodities dentro del contexto latinoamericano, así como la fuerte y persistente dependencia de las materias primas en la

mayoría de los países de la región y la creciente tendencia a la reprimarización de varias de sus economías. Posteriormente, en la tercera y cuarta sección se analiza los casos de estudio: Ecuador y Colombia, con base en su desempeño económico a lo largo de este período. En la sexta sección, se desarrolla una comparación entre los casos de estudio. Finalmente, en el sexto y último apartado se desarrollan las conclusiones sobre el tema.

1. Auge de los Commodities: Impacto de las economías emergentes asiáticas en los precios de los commodities a nivel mundial

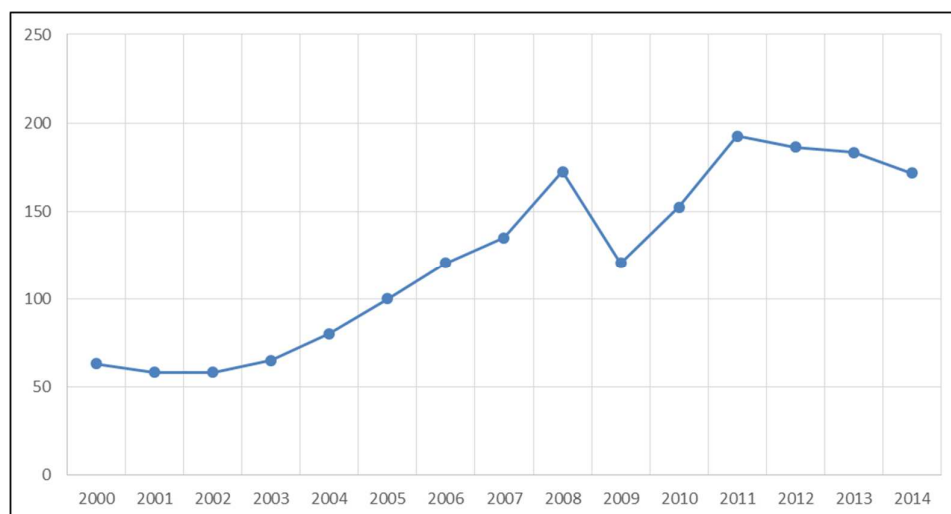
El incremento sin precedentes de los precios de las materias primas o commodities en la última década puede ser explicado a partir de principios como la oferta, la demanda y factores financieros. Por el lado de la demanda, en los últimos años –específicamente entre 2002 y 2007- se registró un importante crecimiento económico mundial, convirtiéndose dicho ciclo en el período de expansión económica más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Durante este ciclo, la producción a nivel mundial creció a un ritmo del 4.6%, un porcentaje muy por encima del 3% promedio de los últimos 30 años (Ramírez, Polo y Sabatini 2008, 7). Como resultado, las economías de la mayor parte de países crecieron en este período a tasas superiores de su media histórica, destacándose dentro de estos países, las economías emergentes asiáticas como China e India.

De igual manera, un hito que contribuyó al crecimiento del sistema económico mundial fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el año 2001. Este hecho significó la puerta de entrada para China hacia una participación plena dentro del comercio internacional, tanto del lado de la oferta como de la demanda. China se convirtió, así, en el mayor demandante de materias primas, y al mismo tiempo en el mayor oferente de manufacturas, con un incremento exponencial de sus exportaciones hacia el resto del mundo.

En cuanto a la demanda, el crecimiento y el dinamismo económico que China y el resto de las economías emergentes del sudeste asiático lograron, estimuló la demanda de los commodities. Como resultado, se produjo una inminente alza de los precios de este tipo de bienes a nivel mundial. En el caso de China, por ejemplo, factores como la rápida industrialización y urbanización intensificaron la demanda de un amplio abanico de materias primas: desde el cobre para la construcción hasta la soya para el consumo.

Commodities como el crudo, metales como el cobre y el hierro, el carbón y la soya son tan solo algunas de las materias primas cuyos precios presentaron incrementos importantes durante este período, revirtiendo de esta manera la tendencia a la baja que los precios de los commodities registraban a finales del siglo XX (fig.3.1). Si bien en la evolución de los precios de los bienes primarios, éstos han atravesado ciclos favorables, que en su mayoría han sido cortos y que no han tardado en volver a sus niveles previos, lo interesante de este último período ha sido su extensa duración. No obstante, desde 2011 con la desaceleración de las economías emergentes asiáticas, principales responsables de esta tendencia alcista, se ha empezado a recordar la ley de que todo lo que sube tiene que bajar, y que en este caso, tras el auge y aparente prosperidad de los últimos años, se avecina la recesión.

Figura 3.1. Evolución del índice de precios de los commodities a nivel mundial



Fuente: IMF Primary Commodity Prices.

Por otro lado, un segundo factor que incidió en el alza de las materias primas a escala mundial durante este período fue la oferta. En las etapas iniciales del auge de los commodities, la oferta no pudo responder de manera efectiva a la demanda incrementada de materias primas debido a los límites en la producción. Este fenómeno se apoyó en la demanda inelástica de las materias primas, principio que no le permitió a la oferta acomodarse a la creciente demanda de las mismas, por lo menos en el corto plazo.

Otro elemento importante que contribuyó con el boom de los commodities, además de la oferta y la demanda, fueron las variables financieras, como el recorte en las tasas de interés que realizó la Reserva Federal de los Estados Unidos en 2001, hecho que otorgó a los mercados financieros una gran liquidez (Ramírez, Polo y Sabatini 2008, 8). Ambos hechos,

las bajas tasas de interés y la liquidez de este período, impulsaron un incremento en la demanda de materias primas a nivel mundial. Posteriormente, la crisis financiera mundial de 2007, lejos de tornarse en una situación adversa al ciclo de alza de los precios de los commodities, les otorgó un nuevo impulso cuando los mercados financieros empezaron a refugiarse en los commodities mediante la compra de instrumentos derivados a causa del temor causado por la caída de los activos, el quiebre de instituciones financieras y la depreciación del dólar (Ramírez, Polo y Sabatini 2008, 9).

Es así como el exponencial crecimiento económico mundial apoyado en una creciente demanda y oferta moderada, las bajas tasas de interés, la devaluación del dólar junto con el alto grado de liquidez internacional y la emisión de derivados, fueron las condiciones indispensables para que los precios de los commodities llegaran a niveles nunca antes registrados, y además, por tiempo prolongado. Sin embargo, con la reciente desaceleración de las economías emergentes, la apreciación del dólar y el incremento de las tasas de interés, el boom de las materias primas ha llegado a su fin y con éste el cierre de este ciclo económico.

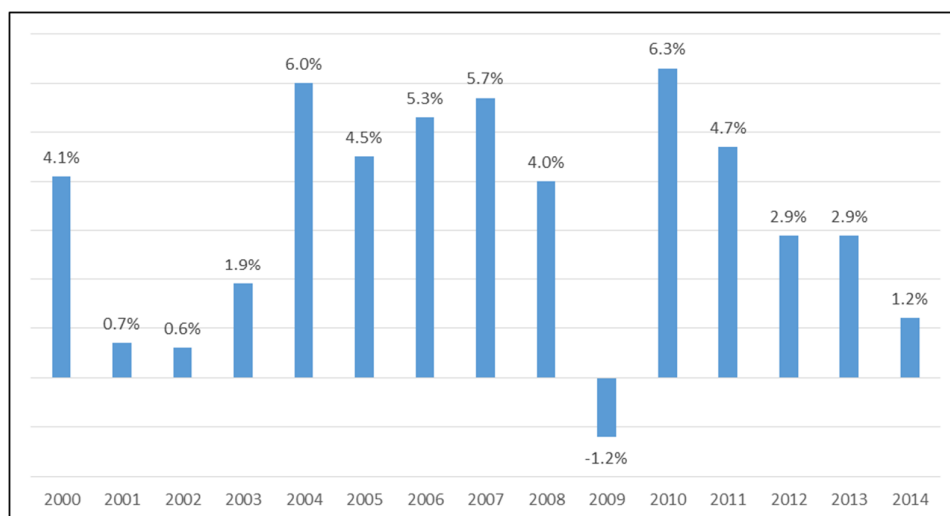
2. Auge de los Commodities: Contexto latinoamericano

Como región, América Latina experimentó un importante crecimiento y progreso económico en la última década, denominado como la “década de América Latina”¹. Prueba de este inusitado desarrollo económico, es que varios de los países latinoamericanos han logrado notoriedad y relevancia dentro del sistema económico internacional. Tal es el caso de Brasil y su participación en el grupo de economías emergentes, BRICS, la denominación de Colombia y Perú como las nuevas “estrellas” de los países emergentes a nivel internacional, e incluso, el apelativo del “milagro ecuatoriano” al desarrollo económico experimentado por este país.

No obstante, para comprender lo trascendental del reciente desarrollo económico en América Latina, es necesario remontarse al panorama de finales del siglo XX. En los 35 años precedentes al boom de los commodities, el desempeño económico de América Latina había sido bastante pobre. El crecimiento del PIB (fig.3.2) presentaba un promedio del 1.01% en el período 1970-2004; sin embargo, esta situación se revirtió cuando su crecimiento pasó a una tasa promedio de 4% durante el período 2004-2014 (Grijalva 2014, 1).

¹ Apelativo con el que se calificó al período reciente de fuerte expansión económica en la región latinoamericana (Moreno, 2011).

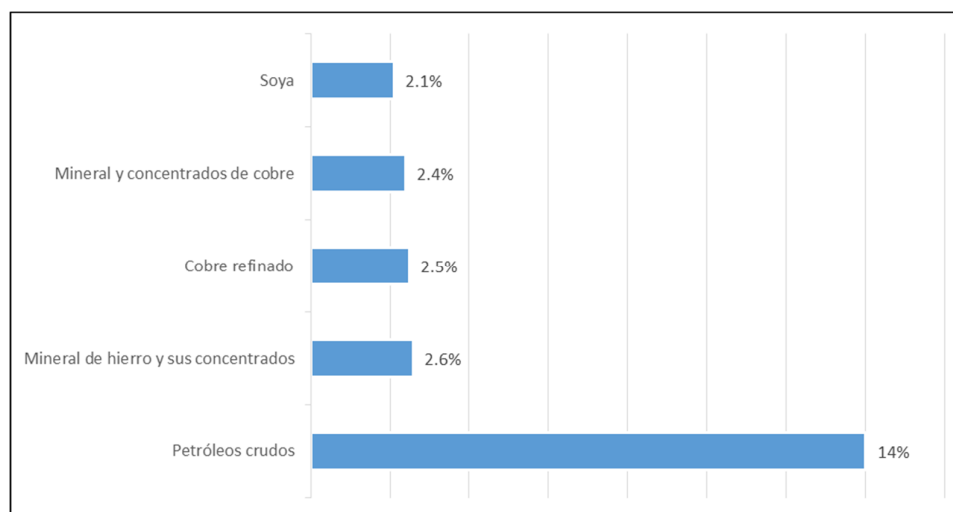
Figura 3.2. Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en América Latina



Fuente: CEPALSTAT.

Uno de los factores principales detrás del crecimiento económico de América Latina en la última década, fue el incremento de los precios de los commodities, que representan una parte significativa de las exportaciones de la región. Sudamérica ha sido catalogada como la subregión más dependiente de la exportación de productos básicos, característica que se ha visto consolidada con el tiempo. Muestra de ello es que sus exportaciones netas de productos básicos representaron el 10% del PIB en 2010, contrario al 6% reportado en 1970 (Adler y Sosa 2011, 9). Si bien la intensificación de la exportación de los bienes primarios se dio en una amplia gama de productos, el crudo y los metales fueron los grupos que representaron la mayor proporción de las exportaciones totales de commodities (fig.3.3). También, la participación de los commodities en las importaciones totales de América Latina se ha incrementado de manera notable como porcentaje del PIB, con el crudo como la categoría principal de las materias primas exportadas por la región.

Figura 3.3. Exportación de las 5 materias primas principales de América Latina 2000-2014 en porcentajes



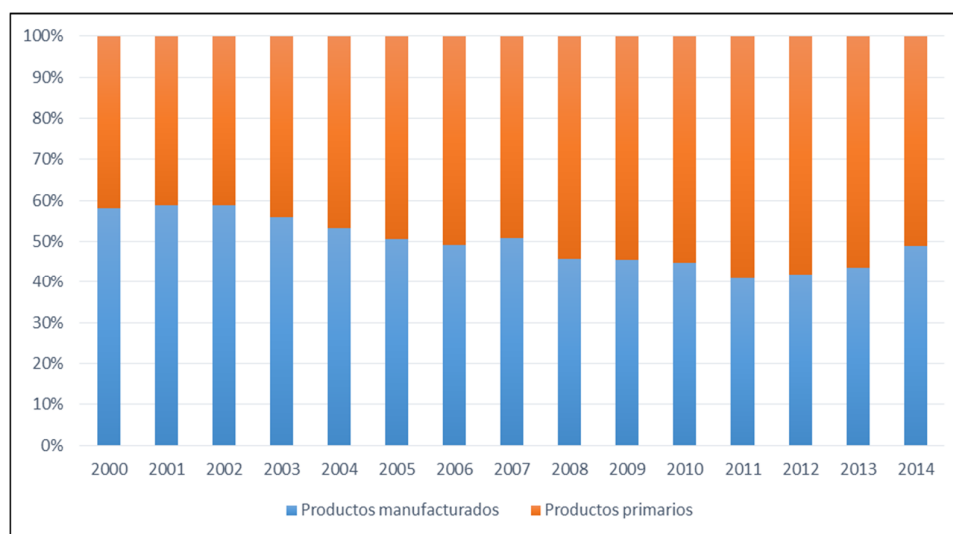
Fuente: CEPALSTAT.

No obstante, a pesar de que varios países sudamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay han buscado la diversificación de sus exportaciones lejos de la concentración en las materias primas, estas últimas todavía representan en promedio, el 60% de sus exportaciones totales de bienes y servicios (Adler y Sosa 2011, 9). Empero, esta búsqueda por la diversificación, no ha tenido lugar en los países exportadores de metales y de crudo de la región. De hecho, en el caso de exportadores de metales como Perú y Chile, y de exportadores de crudo como Colombia, Ecuador y Venezuela, perdura una concentración de este tipo de bienes de alrededor del 60% al 80% en sus exportaciones totales (Adler y Sosa 2011, 10). De igual manera, este grupo de países presentan un mayor grado de dependencia en los commodities, con un promedio de exportaciones de productos básicos entre el 20% y el 17% del PIB, en comparación con el 8% registrado en otros países de la región (Adler y Sosa 2011, 10).

Sin embargo, varias de las economías latinoamericanas que habían alcanzado cierto grado de industrialización, como Brasil y Argentina, han experimentado un retroceso ya que el auge del precio de las materias primas de la última década ha desencadenado un proceso de reprimarización y desindustrialización. Si bien la demanda de las economías emergentes, particularmente China, mejoró los términos de intercambio para las materias primas, también condujo a que los países latinoamericanos se especialicen en este tipo de bienes en detrimento de su industria (fig.3.4). El caso más emblemático de la región, que ejemplifica esta problemática, es Brasil, donde la participación de productos primarios en sus exportaciones

pasó del 24% al 44% entre 2001 y 2010, mientras que la de productos manufacturados se contrajo del 62% al 42% (Sevares 2011, 42).

Figura 3.4. Participación de productos manufacturados y primarios en las exportaciones totales de América Latina



Fuente: CEPALSTAT.

Resulta difícil predecir el grado en que el crecimiento de las exportaciones primarias latinoamericanas, sustentado en el auge de los commodities, pueda proveer bases sólidas para la estabilidad a largo plazo y la diversificación de las economías latinoamericanas (Grugel y Riggirozzi 2012). Cabe recordar que una dependencia en las exportaciones oprime de manera significativa la competitividad industrial de la región y la encierra en una profunda dependencia en la producción primaria, precisamente lo que la mayoría de estrategias de desarrollo sugieren evitar (Jenkins y Dussel 2009) De hecho, varios países han retrocedido sus logros entorno a la industrialización, lo cual ha dado paso a una desindustrialización temprana en muchos de ellos (Lander 2014, 6).

Actualmente, el colapso de los precios del petróleo y la tendencia a la baja de todas las materias primas, son signos de que el boom de los commodities ha terminado, y junto con ello, el crecimiento alcanzado a través de las exportaciones de este tipo de bienes, en la última década. El particular descenso de los precios de los minerales y los combustibles fósiles ha puesto en una difícil situación a los países exportadores de este grupo de bienes, como Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia. La crisis y el tiempo permitirán constatar si los

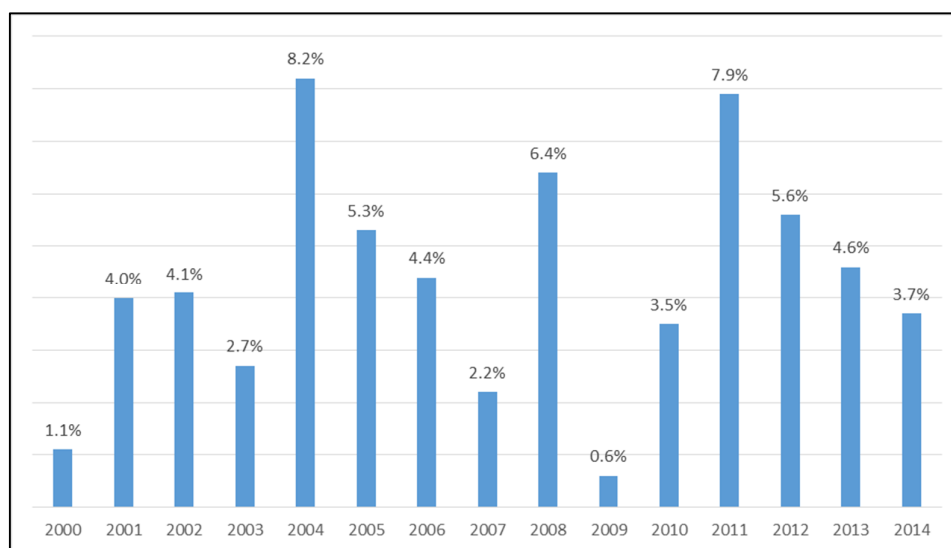
extraordinarios ingresos del decenio pasado fueron bien aprovechados, o si por el contrario, la región pasa de la “década de América Latina” a un escenario como el de la “década perdida”.

3. Ecuador

3.1. Evolución de la economía ecuatoriana: período 2000-2014

El desempeño de la economía ecuatoriana en el período 2000-2014, estuvo caracterizado por un conjunto de variables micro y macro económicas. Entre los elementos que definieron la actividad económica se encuentran: la dolarización, las reformas estructurales, el ascenso del presidente progresista Rafael Correa en la segunda mitad de este período y su conjunto de políticas económicas, la marcada dependencia en la exportación de productos primarios e, indudablemente, el boom de los commodities. Todos estos factores, dentro de este espacio de tiempo, han promovido una tasa de crecimiento promedio del PIB ecuatoriano del 4.3% (fig.3.5).

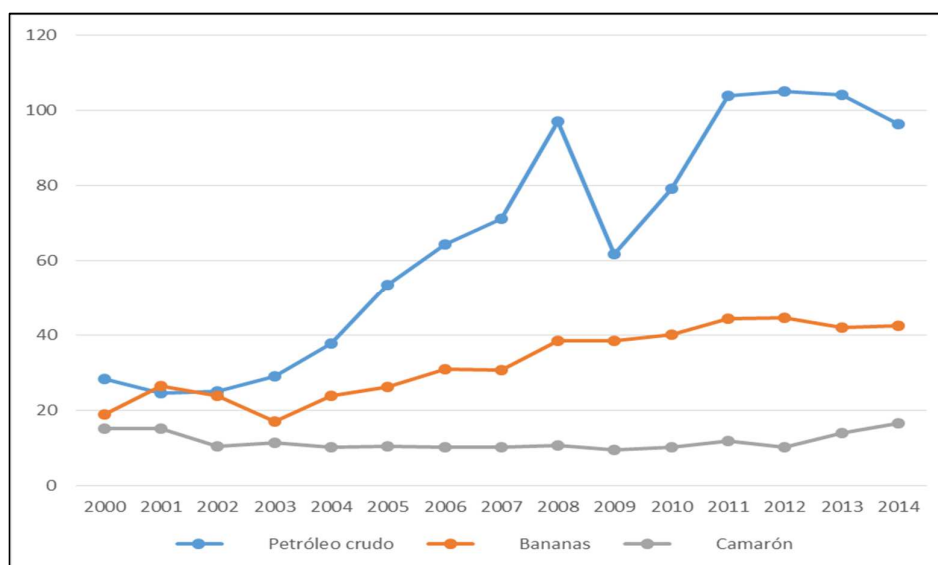
Figura 3.5. Crecimiento porcentual del PIB anual ecuatoriano



Fuente: World Bank Database.

Cabe recordar que la economía ecuatoriana es una de las más volátiles en América Latina, ya que tiende a atravesar altas tasas de crecimiento y fuertes contracciones en períodos de tiempo relativamente cortos. Este hecho se encuentra estrechamente relacionado a la alta correlación que existe entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de las exportaciones, particularmente, si se considera que las principales exportaciones del Ecuador son bienes primarios cuya característica es la marcada fluctuación de sus precios en los mercados internacionales (fig.3.6).

Figura 3.6. Precios de los principales productos básicos de exportación ecuatorianos



Fuente: CEPAL.

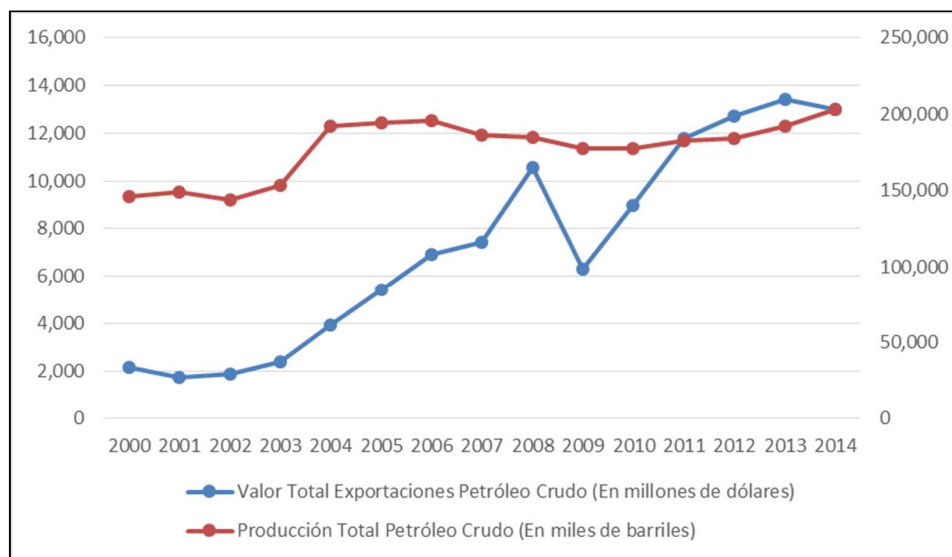
En enero de 2000, Ecuador decidió sustituir el sucre por el dólar americano debido a la caída internacional de su divisa y a la consecuente crisis de confianza en la misma. Esta medida junto con una reforma estructural, permitieron que la economía ecuatoriana, que se había contraído de manera aguda en 1999, alcance una modesta recuperación del 1.1% gracias al incremento de la demanda interna y de las exportaciones petroleras (CEPAL 2001, 169). Dentro de esta coyuntura, el petróleo tuvo un papel relevante, ya que el alto precio al que se cotizaba este bien en la época, contribuyó de manera directa a la estabilización de la balanza de pagos y a la reactivación económica ecuatoriana tras la crisis.

En 2001, producto del proceso de dolarización, la economía ecuatoriana alcanzó una recuperación inusitada y sorprendente al alcanzar un crecimiento del 4%, el más alto de la región, partiendo del hecho de que Ecuador acababa de sufrir una profunda recesión hace tan solo dos años atrás (fig.3.5). La dolarización proporcionó al país estabilidad, la cual a su vez contribuyó al impulso de la inversión y el consumo interno.

La producción y el valor de las exportaciones de petróleo sufrieron variaciones en el período 2000-2014 (fig.3.7). Tales variaciones fueron consecuencia de factores como: la constante caída y recuperación de los precios internacionales del petróleo, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en 2001 y la producción de la petrolera estatal -Petroecuador- versus la producción privada. Cabe resaltar que el crudo contribuyó con la mayor parte del crecimiento de las exportaciones durante este período gracias a los altos precios

internacionales de este bien, mas no por un incremento real en la producción (CEPAL 2006, 173).

Figura 3.7. Comportamiento de la producción y exportación petrolera ecuatoriana



Fuente: CEPAL.

Por otro lado, en 2003 se empezó a plantear el desarrollo del proyecto petrolífero Ishpingo - Tambococha - Tiputini (ITT), entre el gobierno y las empresas privadas, con el fin de incrementar la producción petrolera de manera sustancial. Esto debido a que casi la mitad del crecimiento registrado en este año, respondió al aumento de la producción privada de petróleo tras la puesta en marcha del OCP que duplicó la capacidad de transporte de crudo (CEPAL 2004, 181). A la par del petróleo, otros productos primarios como el banano y los camarones y en menor medida, las flores, el cacao y el pescado enlatado, fueron en este período y continúan siendo hasta la actualidad, parte esencial de las exportaciones ecuatorianas.

El año 2007, marcó un hito con la designación del presidente progresista Rafael Correa y el cambio de mando presidencial. Dentro de esta coyuntura se produjo el incremento de los precios internacionales de las materias primas, además de la depreciación del dólar. En este año, Ecuador presentó un crecimiento del 2.2% del PIB. El valor de las exportaciones de bienes aumentó tan solo un 12.7%, en comparación con el incremento del 26% registrado en 2006 (CEPAL 2008, 157). Las dos terceras partes de este crecimiento obedecieron a un mayor precio de las exportaciones petroleras y productos derivados. Si bien el volumen de exportaciones de crudo disminuyó un 9.2%, esta suma fue compensada con creces por el 18% de aumento de los precios del petróleo a nivel internacional (CEPAL 2008, 157).

En 2008, al igual que en otros países latinoamericanos, el incremento en los precios de las materias primas exportadas, y en el caso de Ecuador principalmente con el petróleo, significó una notable expansión de los ingresos fiscales. Por su parte, con la entrada en vigor de la nueva Constitución ecuatoriana en octubre de este año, se introdujeron modificaciones legales dirigidas a aumentar el papel del Estado en el ámbito económico. Varias de estas modificaciones se encuentran relacionadas con el manejo de los commodities, o también llamados recursos estratégicos, como los minerales y los hidrocarburos, además de la eliminación de la autonomía del Banco Central.

Como resultado, las divisas derivadas de la venta externa de materias primas le permitieron al gobierno ecuatoriano financiar un aumento considerable del gasto público en ese año. Estos hechos corroboran la definición de Gudynas en cuanto al neoextractivismo como un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la naturaleza, donde el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo (Gudynas 2009,188).

En 2009, Ecuador registró un crecimiento de apenas el 0.6%, junto con la cuenta corriente de la balanza de pagos que cerró con un saldo negativo por primera vez desde 2004, hechos que pusieron en evidencia el efecto negativo de la crisis internacional sobre la economía ecuatoriana (fig.3.5). En lo que respecta al crudo, se registró un descenso importante en la producción del mismo debido a la incertidumbre experimentada por las empresas privadas entorno a la ley de hidrocarburos y los contratos de concesión, factor que las condujo a disminuir de manera drástica sus inversiones (CEPAL 2010, 132).

Por otra parte, en este año el gobierno ecuatoriano decidió acogerse a la mora del pago de intereses de los Bonos Global 2012 y 2030. Esto con el fin de realizar una subasta holandesa modificada, donde los tenedores de los bonos presentaron ofertas para cambiar los títulos por efectivo. De esta manera se logró una reducción de más del 30% de la deuda pública externa del Ecuador, que pasó del 18.6% del PIB en 2008 al 14.2% en 2009 (CEPAL 2010, 128).

La situación mejoró en 2010, ya que la economía recuperó su trayectoria de crecimiento moderado, y en consecuencia, el PIB ascendió un 3.5%, en comparación con el 0.6% registrado en 2009 (fig.3.5). Cabe resaltar que la recuperación económica se produjo en casi la totalidad de los sectores productivos, con incrementos significativos en la producción, con excepción del sector de la agricultura y del petróleo, que en conjunto representaron solo el

9.8% del PIB (CEPAL 2011, 149). La producción de crudo sufrió una contracción ya que a pesar de que las empresas estatales incrementaron su producción en un 7%, las empresas privadas la redujeron en un 9.6%, debido a la demora en la firma y al rediseño de los nuevos contratos por parte del gobierno (CEPAL 2011, 149).

En 2011 la producción nacional de crudo aumentó en un 2.8%, donde resalta el hecho de que el 18.7% de esta cifra fue producida por empresas estatales que absorbieron los campos petrolíferos que algunas empresas privadas dejaron de operar, debido a la conversión de los contratos y la política establecida por el Estado de una mayor participación en el mercado de las empresas públicas (CEPAL 2012, 3). Tal situación, ilustra la tesis planteada por Falconí en cuanto a que los gobiernos progresistas, en ciertos casos, han logrado cambiar las condiciones injustas del extractivismo que se presentaban en el pasado a nivel rentista al hacer frente al capital transnacional y recuperar la renta extractiva para el Estado (Falconí 2014, 114).

En 2012, la producción petrolera nacional aumentó gracias al incremento del 2.4% de la producción de empresas estatales, mientras que la producción por parte de la empresa privada sufrió una contracción del 2.3% (CEPAL 2013, 6). Frente a este panorama, el gobierno emprendió un proceso de licitación sobre 13 bloques, con el fin de aumentar la producción petrolera con la participación de empresas públicas extranjeras.

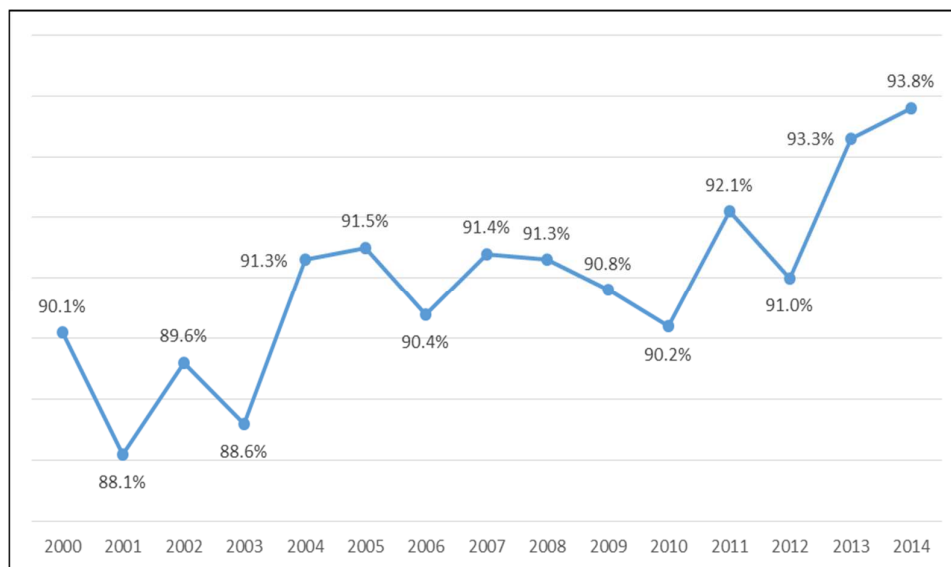
La producción de crudo creció en 2013 a una tasa del 4.2%, gracias -una vez más- al aumento de producción de las empresas públicas del 8.4%, y a la inherente reducción del 6.8% en la producción de las empresas privadas (CEPAL 2014, 5). No obstante, cabe recordar que en este año empieza a darse la caída en el precio internacional del petróleo.

Continuando con la desaceleración iniciada en 2011, el PIB creció a una tasa reducida del 3.7% en 2014 (fig.3.5). Si bien el volumen de las exportaciones creció en un 6.7% y su valor en un 3.6%, la exportación del petróleo presentó serias repercusiones debido a la caída del precio de petróleo a nivel internacional, ya que a pesar de incrementar su volumen exportado en un 7%, su valor se redujo en un 5.7% (CEPAL 2015, 4). Cabe resaltar que pese a la situación adversa en torno a los precios del petróleo, en este año, el sector petrolero recuperó dinamismo, y la producción nacional se incrementó en un 5.7%, gracias a un incremento notorio del 9% de la producción de las empresas públicas en detrimento de las empresas privadas (CEPAL 2015, 6).

Indiscutiblemente, el crudo se perfiló como el pilar principal de la economía ecuatoriana en el período comprendido entre el 2000 y 2014. A pesar de la reducción de la producción del petróleo, especialmente desde la segunda mitad de este período, el incremento del precio internacional del crudo, logró compensar el déficit productivo. Asimismo, otros productos primarios como el banano, el camarón, el cacao, el café y los minerales contribuyeron, si bien no en los mismos niveles que el petróleo, al incremento y la dinamización de la economía ecuatoriana en este espacio de tiempo.

Estos hechos dan cuenta de que pese a los esfuerzos y a las intenciones de su ejecutivo, Ecuador no ha dejado su arraigada dependencia en los commodities, los mismos que han venido a constituir entre el 88% y el 94% de sus exportaciones totales en la última década (fig.3.8). Esta situación demuestra que el país ha optado por la especialización de bienes primarios en lugar de la producción de bienes industrializados. Este sesgo, no es extraño, ya que se ha visto replicado en varias economías latinoamericanas, que incluso han tendido a desindustrializarse.

Figura 3.8. Participación de productos primarios en el total de las exportaciones ecuatorianas



Fuente: CEPALSTAT.

Además, a pesar de los cuantiosos ingresos por concepto de exportaciones, debemos recordar que éstas continúan siendo básicamente primarias, por lo que la diversificación de exportaciones aún es una tarea pendiente. Se debe observar que en el caso progresista, se ha argumentado que es necesario aprovechar el contexto de la elevada demanda y precio de las materias primas para acumular los recursos requeridos con el fin de realizar las inversiones

sociales, productivas y de infraestructura que permitan, en una fase posterior, superar el extractivismo (Lander 2015).

De acuerdo a una entrevista mantenida con Alberto Acosta, si bien en Ecuador se necesita de un tiempo de transición para poder salir del extractivismo y realizar una transformación productiva, hasta la fecha, no se ha podido observar un cambio en la matriz productiva². Según Acosta, existen varias razones para ello. Primero, no se ha afectado la lógica primario-exportadora, y se ha fortalecido la lógica primario-exportadora (Acosta 2016). Para Acosta, la idea de que superar el extractivismo es posible gracias a más extractivismo, como lo ha manifestado públicamente el gobierno ecuatoriano, es una enorme contradicción (Acosta 2016).

Segundo, y tal vez el problema más serio, es que el gobierno ecuatoriano ha despilfarrado los recursos económicos de este período (Acosta 2016). Según Acosta el gobierno progresista de Rafael Correa ha sido la administración que más tiempo ha estado en funciones, que más dinero ha tenido en toda la historia de la República, que contó con un marco jurídico constitucional propicio para el cambio, y que dispuso de un amplísimo respaldo popular; pero que a la postre, desperdició toda una década para instaurar una verdadera transformación productiva (Acosta 2016).

En un diálogo con César Carranza, éste coincide en que el cambio de matriz productiva es un proceso de mediano plazo para el que se requiere de esfuerzos muy importantes³. De acuerdo a este académico si bien se han construido algunas líneas de trabajo en ese sentido, los resultados han sido prácticamente nulos, ya que se torna imperativo generar más consensos e involucrar a otros actores sociales -públicos y privados- dentro de este proceso de transformación (Carranza 2016). Asimismo, afirma que ha existido una falta de acuerdo básico a nivel de temas endógenos del país y que la transformación productiva ha sido un elemento más bien discursivo (Carranza 2016). Carranza converge con Acosta en que el gobierno perdió la oportunidad del ciclo de precios altos para poder implementar medidas efectivas en la línea del cambio de matriz productiva (Carranza 2016).

² Alberto Acosta (economista, político y profesor investigador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 17 de junio de 2016.

³ César Carranza (economista y profesor investigador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 7 de junio de 2016.

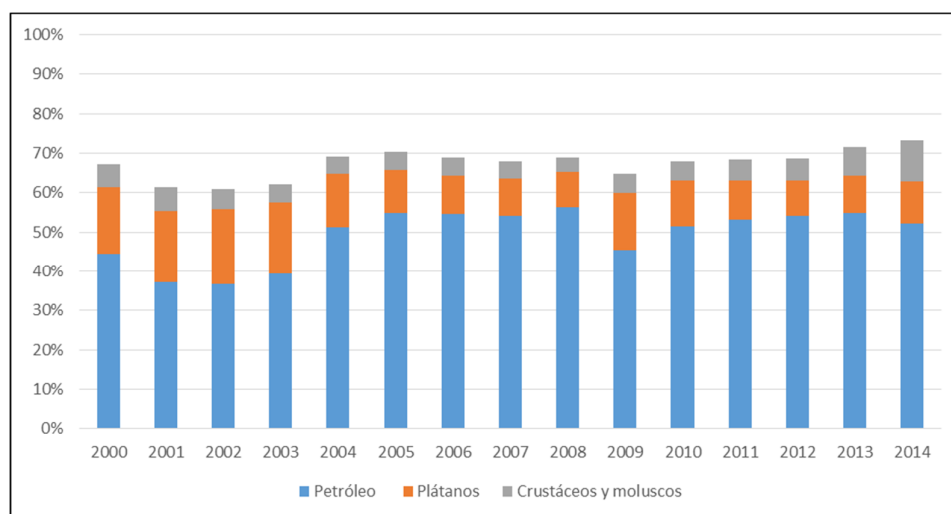
Por su parte, Fander Falconí, a través de una entrevista, destacó que para que exista un proceso de cambio de matriz productiva es fundamental la creación de industria de base como la petroquímica y la metalurgia⁴. Para este economista y académico a pesar de que aún no se han podido visualizar grandes cambios en la composición de la matriz productiva, primero porque son procesos estructurales de larga data, y segundo porque Ecuador no ha dejado el chip de reprimarización; considera un acierto del gobierno progresista de Rafael Correa, el haber diversificado fuentes de energía, a través de la construcción de una serie de hidroeléctricas, cambiando así la matriz de producción netamente fósil (Falconí 2016).

3.2. Canasta exportadora ecuatoriana

La canasta exportadora ecuatoriana se encuentra sujeta, esencialmente, a la evolución de la producción y el precio de un grupo de productos básicos conformados principalmente por el petróleo, el banano y, los crustáceos y moluscos (fig.3.9). En el período comprendido entre 2000 y 2014, estos tres productos primarios constituyeron hasta el 70% de las exportaciones de commodities. Este hecho denota la marcada dependencia de la economía del país en la exportación de bienes primarios, y la medida en que factores como el auge de las materias primas de la última década, han contribuido a asentar esta tendencia. Asimismo, se ha podido constatar la falta de reacción productiva cuando se producen incrementos significativos en los precios de los commodities a nivel mundial, ya que las altas rentas que nutrieron el crecimiento económico ecuatoriano de este período, estuvieron apoyadas en los altos precios internacionales más que en un incremento real en la producción.

⁴ Fander Falconí (economista, político y profesor investigador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 16 de junio de 2016.

Figura 3.9. Participación de los principales productos en las exportaciones ecuatorianas



Fuente: CEPALSTAT.

También, es importante resaltar que los precios de las materias primas tienden a ser volátiles, lo cual genera inestabilidad e incertidumbre para los países altamente dependientes de este tipo de bienes como en el caso de Ecuador. Además, este rasgo de los precios de los bienes primarios afecta a la actividad productiva entera del país. En Ecuador, la volatilidad de los precios de las materias primas tiene un fuerte impacto en su economía debido a la intensidad de su dependencia en la exportación de materias primas y a la concentración de sus ventas externas en un número reducido de ellas, particularmente, el petróleo. Es así como en Ecuador, el modelo progresista aún no ha logrado romper algunos de los elementos que ampliamente se le criticaba al paradigma neoliberal como la basta dependencia exportadora de materias primas y su papel como economía de enclave (Gudynas 2009, 188-189).

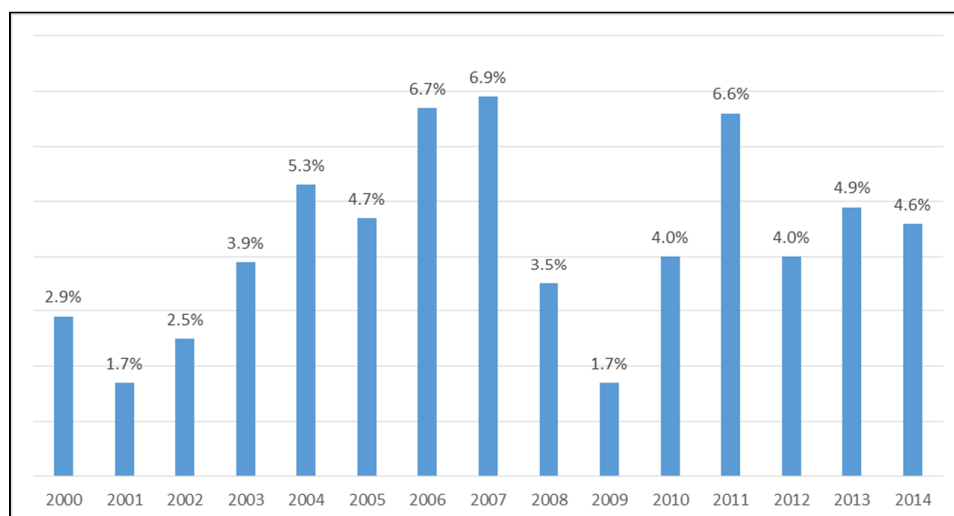
4. Colombia

4.1. Evolución de la economía colombiana: período 2000-2014

Entre el 2000 y el 2014, la economía colombiana estuvo marcada, por factores tanto internos como externos. Además del boom de los commodities, variables como la inestabilidad de la banda cambiara, el énfasis en la seguridad más que en el factor económico, el papel de Estados Unidos como su principal socio comercial y la crisis financiera internacional de 2008 incidieron de manera significativa en las fluctuaciones económicas que Colombia experimentó en el transcurso de los últimos 15 años. Como resultado, la tasa de crecimiento promedio del PIB en este lapso de tiempo fue del 4.3% (fig.3.10). Cabe resaltar que en este

período, la economía colombiana llegó a alcanzar una tasa de crecimiento de hasta el 6.9% anual.

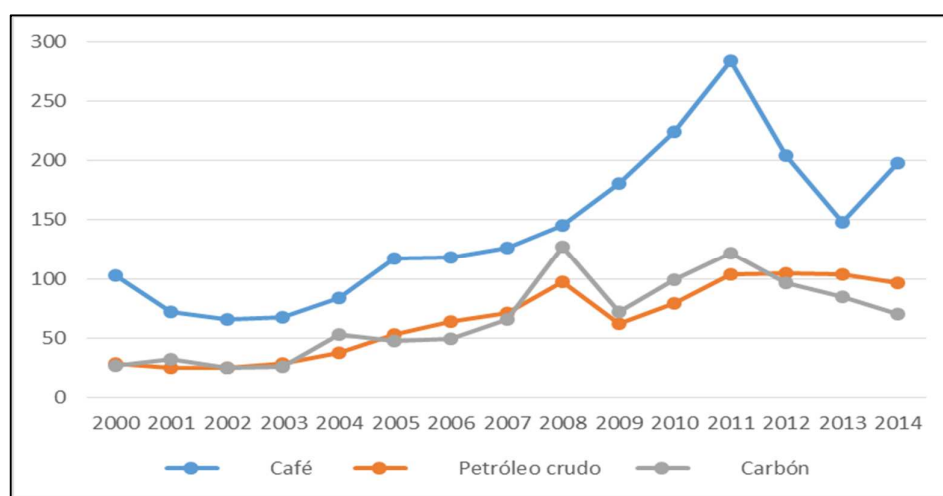
Figura 3.10. Crecimiento porcentual del PIB anual colombiano



Fuente: World Bank Database.

Durante este período, la economía colombiana ha sido altamente dependiente de la exportación de productos primarios, hecho que la ha dejado sujeta a los vaivenes de los precios de este tipo de bienes en los mercados internacionales. Como se puede apreciar en la fig.3.11, los precios de los principales productos de primarios exportación colombianos -café, petróleo y carbón- presentaron caídas y recuperaciones súbitas a lo largo de este espacio de tiempo, con fuertes efectos en la actividad económica general.

Figura 3.11. Precios de los principales productos básicos de exportación colombianos

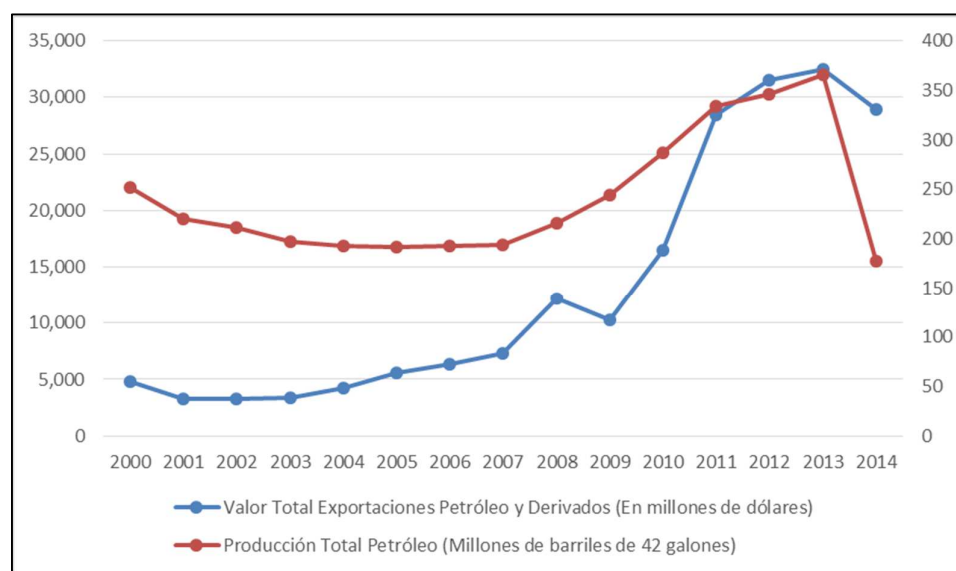


Fuente: CEPAL.

En 1999, al igual que otros países de la región, Colombia sufrió una profunda recesión producto de la crisis financiera internacional que dejó al descubierto el desequilibrio externo y fiscal que este país venía arrastrando desde hace una década atrás. No obstante, en el 2000 esta situación de crisis empezó a aliviarse con la implementación de ajustes para corregir estos desequilibrios, como la estabilidad en la banda cambiaria de la moneda nacional, la reactivación de la actividad económica y un incremento considerable en las exportaciones.

En este año, el PIB de Colombia registró una recuperación moderada del 2.9%. Gracias a los altos precios del petróleo en este año, el valor de las exportaciones por este concepto se incrementó en un 22%, aunque su volumen se contrajo en una cuarta parte (CEPAL 2001, 150). A lo largo del período 2000-2014, la producción y el valor de las exportaciones petroleras (fig.3.12) se encontraron condicionadas a condiciones tales como: sabotajes de la guerrilla y el agotamiento de los pozos, hechos que causaron que tanto su producción como explotación se tornaran complejas.

Figura 3.12. Comportamiento de la producción y exportaciones petroleras colombianas



Fuente: CEPAL.

En 2002, Álvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia, y a pesar del clima económico desfavorable en el que el país se encontraba sumido, catalogó al conflicto interno como el principal problema del país. Por su parte, el crecimiento económico se vio afectado por factores tanto externos como internos como la caída de la demanda externa y el aumento en el gasto doméstico (CEPAL 2003, 190).

Las exportaciones se vieron altamente favorecidas en 2003 por la recuperación económica de Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, y por el aumento internacional de los precios de las materias primas derivado del fuerte dinamismo que empezaban a cobrar las economías emergentes como China. En consecuencia, las exportaciones aumentaron a una tasa del 10%, gracias al aumento de las exportaciones de carbón y al alza de los precios del petróleo, que a pesar de haber experimentado una disminución en su producción, permitió que se obtengan importantes ingresos derivados de este bien (CEPAL 2004, 173).

En 2004 y 2005, la inversión privada, pero especialmente, las exportaciones, fueron los principales motores de crecimiento económico en este año. Las exportaciones advirtieron un crecimiento del 26% debido a la creciente demanda internacional y al alza de los precios internacionales de los bienes primarios (CEPAL 2005, 179). Es así como a pesar de una disminución de los volúmenes exportados de productos primarios como el petróleo, el carbón y el café; el valor de las ventas externas registró un importante crecimiento.

El 2006 fue un año que sobrepasó las expectativas en torno al crecimiento del PIB colombiano tanto de las autoridades como de los analistas. El PIB presentó un crecimiento del 6.7% en este año (CEPAL 2007, 139). Asimismo, las exportaciones continuaron con su dinamismo y se expandieron un 15.1% gracias al boom internacional de los commodities; no obstante, este crecimiento sufrió una contracción respecto a los años pasados debido al deterioro de los términos de intercambio y a disminución de la demanda de Estados Unidos (CEPAL 2007, 145). También, el dinamismo de productos como el petróleo y el carbón contribuyeron en gran medida al crecimiento de las exportaciones.

El ritmo de expansión de los últimos cinco años, se detuvo de manera abrupta en 2008 con un crecimiento del PIB de tan solo el 3.5%. No obstante, las exportaciones crecieron un 25.5% gracias a las mayores ventas de petróleo y sus derivados (CEPAL 2009, 140). Cabe resaltar que los efectos de la crisis financiera internacional y, especialmente, de la inherente reducción de la demanda mundial comenzaron a manifestarse recién hacia finales de este año donde se registró una menor cotización del petróleo, el carbón y el café.

Siguiendo la tendencia a la baja de 2008, el PIB en 2009 creció apenas un 1.7%. Los sectores que registraron la mayor contracción durante este año fueron la industria, el comercio y la agricultura como consecuencia de la crisis financiera internacional. Por primera vez, el valor de las exportaciones presentó una caída del -11,7%, como consecuencia del deterioro de los precios internacionales, la contracción de las economías de los principales socios comerciales y un menor dinamismo de los flujos comerciales (CEPAL 2010, 125).

En 2010, el presidente electo Juan Manuel Santos, asumió el poder y emprendió una estrategia económica basada en el impulso de cinco sectores líderes: innovación, agricultura, infraestructura de transporte, minería y vivienda, designados como las “locomotoras” del crecimiento económico.

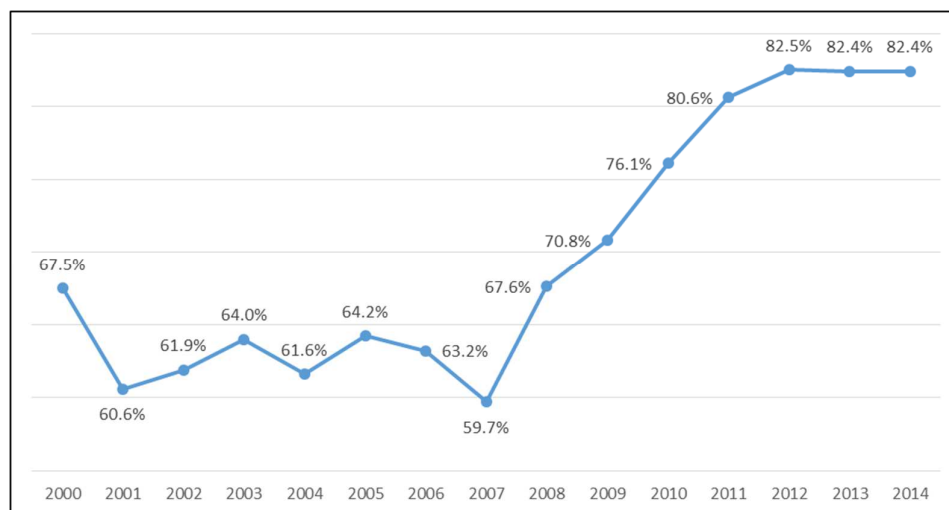
En 2013 el valor de las exportaciones decreció al 2.2% a causa de una disminución de los precios internacionales de los principales productos primarios colombianos de exportación (CEPAL 2014, 4). Mientras que la participación del petróleo dentro de las exportaciones alcanzó un 55.2%, la misma tendencia que años anteriores; la participación del carbón sufrió un retroceso del -1.6%, debido a los vacíos regulatorios entorno a los problemas ambientales desencadenados por la extracción y carga de este bien (CEPAL 2014, 4).

Un conjunto de factores, como la desaceleración de ciertos sectores, la apreciación del dólar y la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo, mermaron la posibilidad de un crecimiento económico sostenido en Colombia en 2014. El valor de las exportaciones se contrajo en un 5.5% mientras que el de las importaciones sobrepasó este valor con un aumento del 7.8% (CEPAL 2015, 4). Esta contracción en el valor de las exportaciones fue producto de una reducción de los precios de los principales productos primarios de venta externa, como el petróleo con un descenso en sus precios del 12% en 2014 (CEPAL 2015, 4). A pesar del incremento de la venta externa de productos como el café y el carbón, con 31.3% y 1.8% respectivamente, su valor no alcanzó para contrarrestar la caída del valor de las exportaciones del petróleo, principal producto de exportación colombiano (CEPAL 2015, 4).

Sin lugar a duda, el petróleo fue el producto estrella y mayor proveedor de ingresos de la economía colombiana durante el período 2000-2014. Si bien Colombia, ha sido un país relativamente industrializado, la tendencia en este espacio de tiempo ha sido revertir la industrialización e incrementar la exportación de productos primarios, patrón que se ha vuelto más marcado a partir de 2008 (fig.3.13). Esta situación ilustra la tesis de Svampa, en cuanto a

que la demanda estimulada por los commodities ha dado como resultado, “un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas con escaso valor agregado” (Svampa 2013, 32).

Figura 3.13. Participación de productos primarios en el total de las exportaciones colombianas



Fuente: CEPALSTAT.

En gran medida, esta inclinación hacia la exportación de materias primas en los últimos años se ha derivado del incremento de los precios de este tipo de bienes ya que los valores de la venta externa de las materias primas llegaron a quintuplicarse en el 2014, respecto a los valores registrados en los primeros años del 2000. No obstante, en una entrevista con César Corredor, este economista manifestó que durante la etapa de alto crecimiento de sectores primarios como el petrolero y el energético en Colombia, la revaluación del peso también jugó un papel importante para este fenómeno de desindustrialización y reprimarización, puesto que restó competitividad a la industria y a la agricultura, lo cual mermó el crecimiento de estos sectores⁵. En la actualidad, de acuerdo a este académico, nos encontramos en un momento donde la situación se revirtió: los ingresos petroleros y del sector minero-energético cayeron y con la apreciación del dólar, el peso se ha devaluado; por lo tanto, los sectores que perdieron competitividad durante la revaluación, en este momento tendrían espacio para crecer a través de mayores exportaciones y una menor competencia en las importaciones (Corredor 2016).

⁵ César Corredor (economista y académico), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 14 de junio de 2016.

La ex secretaria de inclusión social, Consuelo Ahumada, afirmó a través de un diálogo que la reprimarización y desindustrialización en Colombia han sido consecuencia también del quiebre de sectores productivos, como el agrícola e industrial, a causa del conflicto interno, así como de los tratados comerciales que el país ha celebrado con Estados Unidos, la Unión Europea y otros que vienen en camino, los mismo que han impedido que el sector productivo pueda desarrollarse⁶. Según Ahumada, las políticas del Estado neoliberal colombiano lejos de apoyar a los sectores productivos, se han direccionado al fortalecimiento de las políticas de los organismos internacionales que se orientan a consolidar la inversión extranjera (Ahumada 2016). Este hecho reafirma la tesis de Svampa respecto a que el discurso neoliberal latinoamericano continúa sosteniendo -con el énfasis de siempre- la idea de un Estado subordinado al mercado y, especialmente a las organizaciones de regulación supranacionales (Svampa 2012).

Por su parte, Álvaro Lemus a través de una entrevista, aseguró que desde 2004 en Colombia existe un programa de transformación productiva que se enfoca en el desarrollo de sectores de talla mundial que tengan impacto tanto en el sector interno como en el sector externo⁷. Para Lemus, el proceso de transformación productiva es un tema que implica liderazgo del gobierno, pero también del sector privado, ya que para el desarrollo de ciertos sectores se requiere de un trabajo en conjunto (Lemus 2016). Si bien, al igual que en el caso de Ecuador, aún no se ha logrado visualizar cambios significativos en la transformación productiva, según Lemus la agricultura es un sector que tiene mucha potencialidad pero que presenta problemas estructurales desde hace muchos años que no han permitido que se desarrolle de mejor forma. Varios de estos problemas han consistido en la presencia de la guerrilla y la actitud latifundista donde ha primado el ganado y no la agricultura (Lemus 2016). No obstante, resaltó que en Colombia el sector de tecnologías de la información ha presentado un desarrollo significativo en los últimos años (Lemus 2016).

4.2. Canasta exportadora colombiana

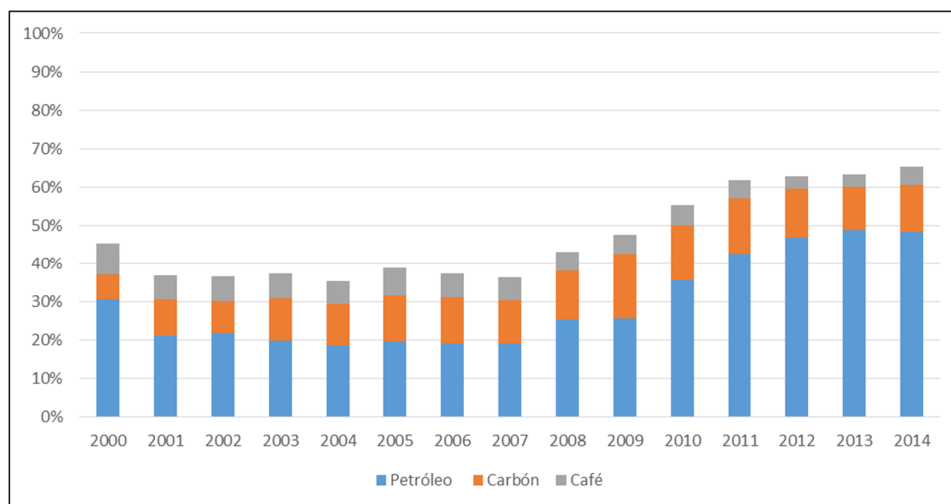
La canasta exportadora colombiana se encuentra compuesta, en su mayor parte, por productos primarios o con un bajo valor agregado. En el período 2000-2014, la canasta estuvo concentrada en tres productos principales: el crudo, el carbón y el café (fig.3.14). Este grupo de tres productos constituyó hasta el 60% de las ventas externas de commodities en este

⁶ Consuelo Ahumada (política y académica), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 14 de junio de 2016.

⁷ Álvaro Lemus (ministro consejero de la Embajada de Colombia en Ecuador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 17 de junio de 2016.

espacio de tiempo. La tendencia a la especialización en la exportación de estos tres productos básicos en Colombia, ha sido bastante marcada desde 2008 con un crecimiento promedio del 19%.

Figura 3.14. Participación de los principales productos en las exportaciones colombianas



Fuente: CEPALSTAT.

Cabe resaltar que el nulo o bajo valor agregado de los productos exportados, produce efectos negativos en el crecimiento económico de un país, especialmente en épocas de recesión. Por tal razón, la alta concentración de productos primarios en la canasta exportadora, expone a la economía colombiana a la volatilidad del precio de los commodities, por lo cual la confianza en la exportación de este tipo de bienes constituye una estrategia de desarrollo a corto plazo.

Es por esta razón que de acuerdo a Acosta, las economías que dependen para su financiamiento de la labor extractivista y de la exportación de bienes primarios, se encontrarían predispuestas al subdesarrollo, especialmente si éstas son capitalizadas por recursos primarios como el petróleo y los minerales (Acosta 2012, 83). Obviamente, un alza significativa de los precios de los commodities, como la registrada en la última década, promueve a que los países ricos en recursos naturales se especialicen en este tipo de bienes; no obstante, se debe recordar que estos incrementos en los precios son transitorios.

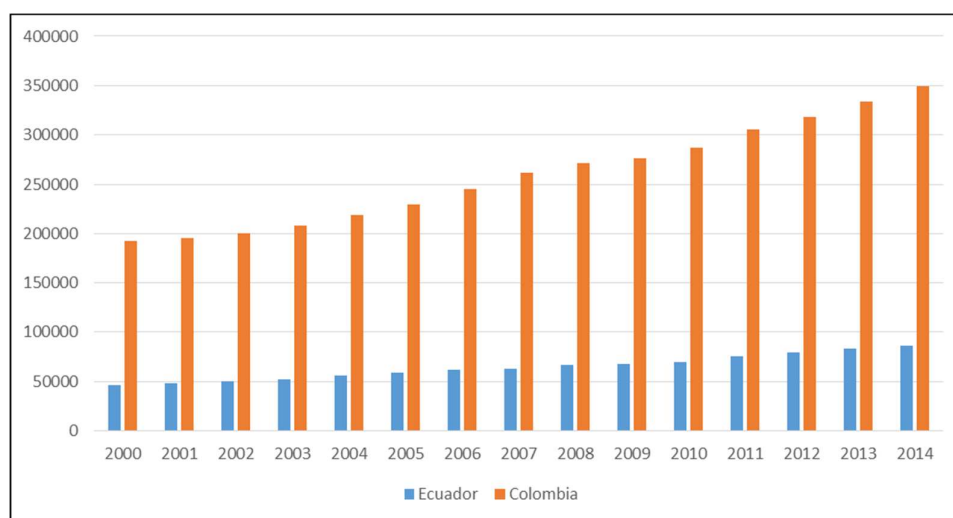
Lamentablemente, Colombia se encuentra consolidando, desde los últimos años, como un país exportador de materias primas y no de bienes elaborados o servicios. El aumento de los precios internacionales y el incremento en la producción de crudo redujeron sustancialmente la participación de las ventas externas con valor agregado. El problema principal de los

exportadores de materias primas, y especialmente en el caso de exportadores de energía y metales, que en Colombia vienen a ser el petróleo y el carbón, es que la economía de estos países en concreto, presenta un mayor grado de vulnerabilidad ante una desaceleración mundial.

5. Análisis comparativo

A lo largo del período 2000-2014, el desempeño económico de Ecuador y Colombia, ha sufrido altibajos, derivados de diversos factores. A pesar de la diferencia del tamaño de sus economías, ambos países, presentaron una tasa de crecimiento promedio de su PIB del 4.3% en este período, e incluso llegaron casi a duplicar en 2014 los valores de su PIB en dólares registrados en el 2000 (fig.3.15). Asimismo, el producto principal de exportación, en los dos casos, fue el crudo, del cual obtuvieron grandes réditos gracias al incremento en los precios internacionales de este bien, particularmente, a partir de la segunda mitad de este ciclo.

Figura 3.15. PIB total anual a precios constantes en millones de dólares

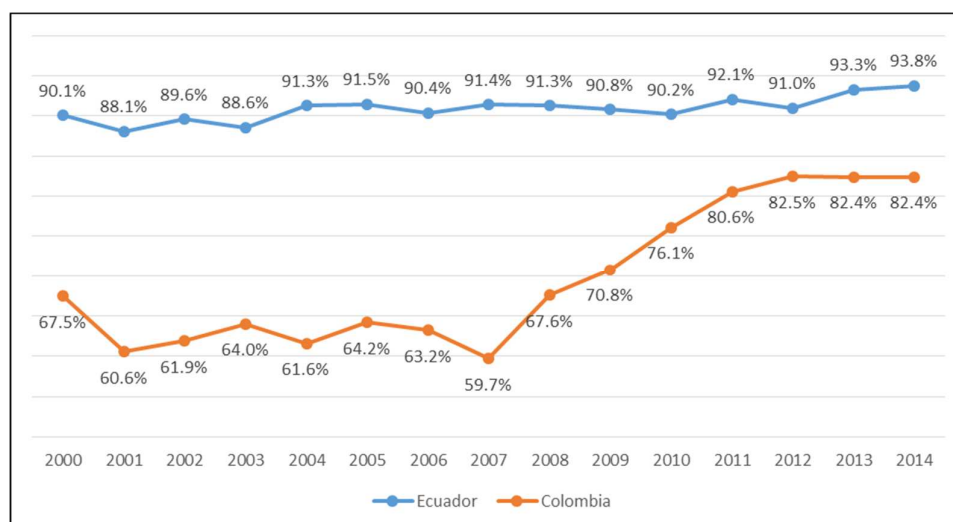


Fuente: CEPALSTAT.

Si bien, las exportaciones de ambos países dependen en buena parte de la venta externa de materias primas, al igual que varios países latinoamericanos, en el caso ecuatoriano, se puede apreciar que esta tendencia se encuentra mucho más marcada que en Colombia (fig.3.16). En el primero, los commodities comprendieron desde el 88% hasta el 94% de sus exportaciones totales. A partir de estos porcentajes se puede corroborar que la dependencia en las materias primas de Ecuador se ha mantenido constante y que la variación porcentual ha sido moderada, con una leve tendencia al alza. No obstante, en el caso de Colombia la dependencia en las

materias primas, en lugar de decrecer o incluso sostenerse, se ha profundizado. Esta tendencia se mantuvo constante hasta 2007, en un rango entre el 59% y el 67%, y vino a acentuarse a partir de 2008 con un incremento de hasta el 82.4% en 2014.

Figura 3.16. Participación de productos primarios en el total de las exportaciones



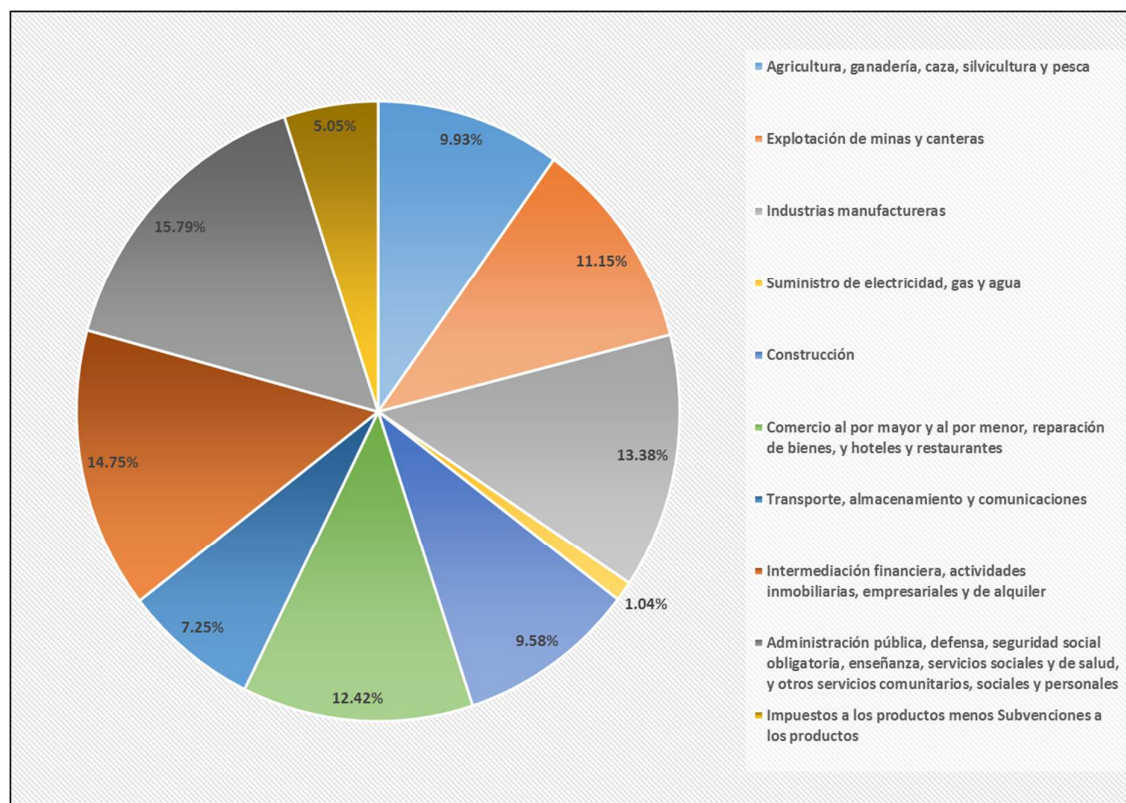
Fuente: CEPALSTAT.

Este fenómeno se torna, particularmente grave para Colombia, ya que deja a relucir un problema de desindustrialización y reprimarización, como en otros países de la región que habían logrado cierto grado de industrialización. Incluso, la creciente desindustrialización en Colombia lleva a replantear su apelativo como economía emergente. Este hecho, en gran parte, ha sido producto del dinamismo que ha venido cobrando el sector de la minería y los hidrocarburos en Colombia en los últimos años. Como consecuencia, el valor de las exportaciones del sector de hidrocarburos y minas se ha cuadruplicado en los últimos siete años. Por otro lado, el fenómeno de reprimarización en Colombia se ha consolidado dado el bajo nivel de sofisticación de otros productos exportados, y a que los bienes fuera de esta categoría se han orientado en su mayoría hacia los mercados regionales.

Al examinar la composición del PIB ecuatoriano, podemos observar que el mayor porcentaje lo ha constituido la administración pública con el 15.79% (fig.3.17). Este hecho no sorprende, puesto que en los últimos siete años, el peso del sector público en la economía ha crecido de manera substancial, lo que cual ha debilitado la sostenibilidad fiscal, y a la vez, ha mermado las posibilidades de desarrollo y crecimiento económicos del país. También, la deuda pública ha llegado a representar un porcentaje más alto que las asignaciones a servicios como educación y salud. Cabe resaltar que este fenómeno coincide con el ascenso del presidente

progresista Rafael Correa en 2007 y la serie de reformas estructurales y económicas que vino a implementar en el país.

Figura 3.17. PIB anual por actividad económica Ecuador 2000-2014



Fuente: CEPALSTAT.

No obstante, si sumamos la participación de sectores primarios como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 9.83%, y la explotación de minas y canteras con el 11.15%; ambos sectores vienen a constituir el 21.08% del PIB, incluso sobrepasando al porcentaje correspondiente a la administración pública. Esto viene a reflejar, una vez más, el alto grado de dependencia que tiene el país en los bienes primarios.

No cabe duda de que la década cúlspide de crecimiento económico que experimentó Ecuador fue producto de su marcada dependencia en la exportación de commodities y al aumento de los términos de intercambio durante este período, que estuvo impulsado por el incremento sostenido de los precios de las materias primas a nivel mundial. En la actualidad, la caída internacional del precio del petróleo y la falta de diversificación han repercutido en el crecimiento sostenido que venía presentado el país, lo cual a la vez ha reducido de manera significativa las exportaciones, los ingresos fiscales y las expectativas del sector privado.

Lamentablemente, el gobierno no logró establecer mecanismos de ahorro de los ingresos petroleros extraordinarios, lo cual hubiese permitido afrontar de mejor manera la crisis que está comenzado. Además, la situación económica ecuatoriana se ve agravada por la falta de una política monetaria y cambiaria. La apreciación del dólar encarece las exportaciones ecuatorianas y les resta competitividad, frente a otros países como Colombia, donde la composición de su canasta exportadora es similar a la ecuatoriana.

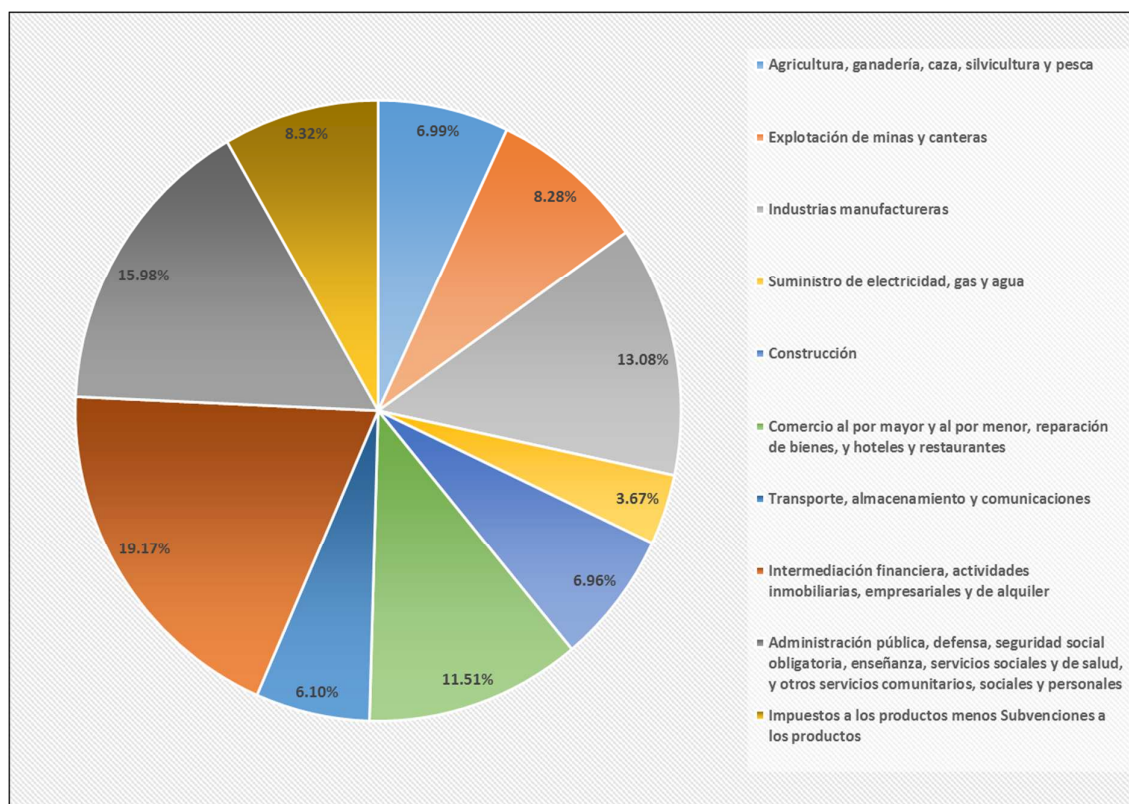
En cuanto a Colombia, el sector que compuso la mayor parte de su PIB, durante este período, fue el correspondiente a la intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 19.17% (fig.3.18). Esto demuestra que Colombia se ha venido desarrollando durante este período como un país oferente de servicios. El aporte del sector servicios ha ayudado a la canalización del ahorro e inversión en el país. Caber señalar que la posición de este sector dentro del PIB, ha contribuido a que en la actualidad, la economía colombiana sea un poco más resistente ante la desaceleración económica mundial.

El crecimiento sostenido de este sector ha sido producto del dinamismo del sistema financiero colombiano, que logró sortear la crisis financiera internacional de 2007 gracias a las políticas de la Superintendencia Financiera y del Banco de la República. Se debe observar que dentro de este sector, la rama con más ponderación es el referente a los servicios financieros. Una de las razones de la fortaleza de las instituciones financieras es el peso significativo que ha tenido el consumo en este espacio de tiempo, lo cual ha impulsado a estas entidades a expandir su oferta de crédito y servicios.

Sin embargo, se ha llegado a cuestionar la verdadera participación de este sector dentro del PIB, ya que el incremento del dinero plástico, el cobro de comisiones, libretas de ahorro retiros y otros gravámenes, el desarrollo del mercado de bonos públicos, y el manejo privado de los fondos de pensiones, todas ellas operaciones que conllevan importantes márgenes de intermediación, han contribuido a la importante expansión del sector financiero en los últimos años. Por su parte, de acuerdo a Corredor, se torna preocupante que la mayor proporción del PIB colombiano, sea precisamente en un área como el sector servicios que es menos generador de empleo y que su crecimiento depende en gran medida de factores externos, lo que produciría que la economía nacional, de alguna manera, quede condicionada al vaivén de la economía internacional (Corredor 2016).

También, dentro de esta coyuntura, en Colombia se produjo el cambio presidencial entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ambos ejecutivos de tendencia neoliberal. Álvaro Uribe asumió la presidencia en 2002, dentro de una situación económica marcada por la crisis de 1999 y con pronósticos desalentadores entorno al crecimiento económico. En su mandato empezó a consolidarse un estancamiento y pérdida de peso de sectores como el agropecuario y el industrial, con el fin de favorecer a otros sectores como servicios, financiero, minería, hidrocarburos, infraestructura y transporte (Cubilledo 2013, 99). Uribe persiguió una política económica que profundizara el consenso neoliberal de la década precedente, afianzando de esta manera la reprimarización y la financiación de la economía colombiana. El ascenso de Santos al poder, no significó una transición económica abrupta, puesto que este último también ha emprendido un modelo económico neoliberal basado en un enclave primario exportador, especialmente en lo que corresponde al sector minero (Cubilledo 2013, 113).

Figura 3.18. PIB anual por actividad económica Colombia 2000-2014



Fuente: CEPALSTAT.

En cuanto a la participación de los sectores primarios, éstos comprendieron el 15.27% del PIB, entre los sectores de explotación de minas y canteras y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con el 8.28% y el 6.99%, respectivamente. Si bien este porcentaje no sobrepasa al registrado por el sector de servicios, sí viene a señalar la persistente dependencia colombiana en las materias primas, aunque en un menor grado que en el caso ecuatoriano. Sin embargo, el actual descenso del precio del petróleo plantea un desafío para la economía colombiana, dada la proporción que este bien representa dentro de sus exportaciones.

Sin lugar a duda, el fenomenal desempeño de la economía colombiana durante la última década estuvo apoyado en el boom del petróleo y la minería, la inversión extranjera directa en la área de bienes primarios, y la inversión en general. También, a diferencia de Ecuador, los tratados bilaterales de libre comercio y las medidas unilaterales que la política económica colombiana ha consolidado durante este período, han contribuido de manera importante a la reducción de las barreras al comercio y a la inversión. De igual manera, las mejoras en el campo de la seguridad, también, han jugado un papel importante en el crecimiento económico de este país.

Conclusiones

Se puede concluir que la exportación de commodities ha tenido una participación importante para el crecimiento económico que experimentaron tanto Ecuador como Colombia en el período 2000-2014. Sin lugar a duda, la última década fue una coyuntura favorable para los países con modelos económicos fundamentalmente extractivistas. Asimismo, se ha hecho evidente que este crecimiento económico ha seguido el comportamiento de las ganancias derivadas de las exportaciones de este tipo de productos. No obstante, a pesar del enorme éxito exportador de estos dos países, las economías de ambos son muy vulnerables ya que la composición de sus exportaciones es mayoritariamente primaria, es decir, de productos cuyas condiciones de producción son inestables y cuyos precios son muy volátiles en los mercados internacionales.

Al analizar la evolución de las exportaciones de ambos países se puede observar que a partir del 2000, las condiciones externas les resultaron favorables, dado el incremento de la demanda externa de productos primarios. Entre estos productos se destacan para Ecuador, el petróleo, el banano y los crustáceos y moluscos; mientras que para Colombia, el crudo, el carbón y el café. Si bien Ecuador ha mantenido estable el porcentaje de productos básicos que

componen sus exportaciones, que de por sí es bastante alto; en el caso de Colombia, este porcentaje ha venido a aumentar de manera exponencial en los últimos años. Esta situación en particular se torna preocupante puesto que denota un retroceso en la industria colombiana y una tendencia a la reprimarización y desindustrialización. Este hecho, además demuestra cómo el boom de las materias primas ha resultado en “un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas con escaso valor agregado” (Svampa 2013, 32).

Un rasgo compartido por ambas economías es que cuentan con estructuras productivas débiles, poco articuladas y altamente dependientes de un solo bien exportable: el petróleo. Este hecho los perjudica de manera significativa en épocas de recesión, además de que merma sus posibilidades de crecimiento a largo plazo puesto que la marcada dependencia y confianza en un solo producto, y que además es un bien primario, produce problemas en los demás sectores económicos. Las grandes ganancias derivadas del momento de auge del precio del petróleo no se pueden traducir en una mayor fortaleza productiva ni en un sistema económico dinámico, por lo cual estos países son altamente vulnerables tanto en su estructura productiva como en el sector externo.

Es por tal razón que ninguno de los dos países ha logrado desarrollar un cambio en su matriz productiva durante este período. La necesidad de una transformación productiva ha sido un tema de vital importancia, indiferentemente de la inclinación política e ideológica, ya sea de corte progresista o neoliberal, dentro de todos los países de la región. Entre las razones principales para que no se haya producido este cambio se encuentra el fortalecimiento de la lógica primario-exportadora en sus modelos económicos. En el caso de Ecuador, el gobierno progresista de Rafael Correa ha sido el gobierno que más tiempo ha estado en funciones, que más dinero ha percibido en toda la historia del país, que contó con un marco jurídico constitucional propicio para el cambio, y que ostentó un amplio respaldo popular; pero que, sin embargo, desperdició toda una década para implementar medidas efectivas que dieran como resultado una verdadera transformación productiva (Acosta 2016).

Por su parte, en Colombia, se puede apreciar un acelerado proceso de desindustrialización y reprimarización en el período reciente. Svampa manifiesta que el discurso neoliberal latinoamericano continúa sosteniendo la idea de un Estado sometido al mercado y a las organizaciones de regulación supranacionales (Svampa 2012). Prueba de ello es que las políticas del Estado colombiano lejos de apoyar e impulsar a los sectores productivos, se han

encaminado a la promoción de las políticas de los organismos internacionales, a los que tradicionalmente se ha subordinado, medidas que se encuentran direccionadas a fortalecer la inversión extranjera en sectores primarios o extractivos. Asimismo, la estrategia que han perseguido los gobiernos colombianos neoliberales presentes en este período de celebrar una serie de tratados bilaterales o acuerdos comerciales, como por ejemplo con Estados Unidos y la Unión Europea, han mermado las posibilidades de desarrollo de varios de los sectores productivos colombianos (Ahumada 2016).

Ecuador y Colombia, así como toda América Latina, fueron altamente beneficiados de la escalada de precios de las materias primas de la última década. Sin embargo, para preservar los logros alcanzados en materia económica se tornaba imperativo adoptar -mientras persistía este ambiente favorable- un conjunto de políticas adecuadas que permitiesen hacer frente a un posible shock externo, como el de la actualidad. Esta recomendación era particularmente importante en el caso de los países exportadores de energía y metales, como Ecuador y Colombia, ya que los países que se especializan en la exportación de este tipo de bienes se encuentran sujetos en mayor medida a las consecuencias negativas de una desaceleración económica mundial.

Actualmente, la caída de los precios del petróleo ha sido un factor determinante para el debilitamiento de ambas economías. El desplome del precio de este bien ha sido resultado del exceso de oferta, una demanda débil inherente a la desaceleración de las economías emergentes, la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener la producción de 30 millones de barriles diarios, factores geopolíticos y la apreciación del dólar. Este factor ha impactado fuertemente en las economías de los países productores de hidrocarburos, y en el caso de Ecuador, la situación se vuelve mucho más adversa debido a la falta de una política monetaria y cambiaria, que junto a la apreciación del dólar, encarece sus exportaciones.

Como resultado, Ecuador ha incurrido a la implementación de salvaguardias arancelarias, que si bien pueden constituir una de sus únicas opciones para mermar el impacto económico en su balanza comercial; esta medida ha sido aplicada de manera no planificada y sin una estrategia clara para favorecer su industria. Frente a este panorama, Colombia, que a diferencia de Ecuador si cuenta con una política monetaria y cambiaria, ha buscado recuperar competitividad en los mercados internacionales, mediante la devaluación de su moneda, llegándola a devaluar hasta en un 60%.

A pesar de que la región en su conjunto se verá afectada, los países que han perseguido una eficiente política económica, ahorrando parte de los recursos obtenidos durante el boom de los commodities, se encontrarán en una mejor posición para sostener su economía durante esta parte del ciclo. Esto debido a que aquellos países que fueron más cautelosos durante la fase de auge, evitando el deterioro de la posición fiscal y de la posición externa, lograrán un mejor desempeño económico durante la caída. En el caso de Ecuador y Colombia, sus gobiernos no establecieron mecanismos efectivos de ahorro de los ingresos derivados de las exportaciones petroleras, por lo cual la crisis tendrá un impacto significativo en sus economías.

Por otro lado, se puede apreciar que en materia económica, tanto el gobierno progresista de Ecuador como el neoliberal de Colombia no difieren mucho. Si bien en Ecuador, el Estado ha logrado consolidar una participación más activa dentro del campo económico, recuperando parte de la renta extractiva de las manos de los entes transnacionales, el progresismo no ha perseguido un verdadero dinamismo de la actividad económica. Sino que al contrario, ha continuado con la dependencia primario-exportadora, presente en épocas neoliberales del cual es un ferviente detractor. Esto denota, como varios de los gobiernos progresistas de la región, como en el caso de Ecuador, se han alejado del espíritu de la izquierda clásica con sus estrategias de desarrollo, particularmente con el empleo y profundización de prácticas como el neoextractivismo, al mantener estructuras productivas primarizadas, asentadas sobre enclaves de exportación subordinadas al comercio y la inversión internacional (Gudynas 2010, 155).

No obstante, en la actualidad lo más preocupante, quizás, es el rubro del PIB que viene a representar la administración pública y el inherente crecimiento del sector público, lo cual ha restringido las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico a largo plazo, dejando al país en condiciones nada favorables para afrontar la crisis.

Por su parte, en Colombia, a pesar de venir perfilándose como una economía emergente, la dependencia en las materias primas ha venido a acentuarse de manera significativa en los últimos años. Este hecho ha enclavado su economía nuevamente en un régimen primario exportador, menoscabando de esta manera sus logros en el sector industrial. Lo cual nos demuestra como la reprimarización de las industrias latinoamericanas se ha producido - incluso- en países con economías emergentes, donde la reprimarización podría traer consigo serias consecuencias como una desindustrialización temprana (Lander 2014, 6).

Sin embargo, en lo que respecta la recesión actual, la fuerza que el sector servicios ha venido cobrando en los últimos años podría ayudar a que Colombia cuente con un mejor apalancamiento y proyección ante la crisis, si logra sortear los factores externos que tienen incidencia en este sector.

Tras haber examinado la participación real que han tenido los commodities en las exportaciones y en el crecimiento económico que experimentaron Ecuador y Colombia en el período 2000-2014 gracias a la implantación del neoextractivismo, así como su alto grado de dependencia en la exportación de materias primas, principal eje de su actividad económica; en el siguiente capítulo se pretende analizar los efectos de estos ingresos en el ámbito social.

Con este propósito, el capítulo consecutivo examinará la política social actual, los programas sociales, particularmente los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), y la evolución del gasto público de indicadores sociales para el desarrollo como salud, educación y desigualdad. Además, este capítulo confrontará las transformaciones que ambos países han experimentado en los indicadores sociales que componen el Índice de Desarrollo Humano (IDH): salud, educación, y estándar o nivel de vida, tras el reciente crecimiento económico, y culminará con una síntesis de las semejanzas y diferencias de un régimen con políticas progresistas, como en el caso de Ecuador, y un régimen con políticas neoliberales, como Colombia y su relación con el desarrollo social.

Capítulo 4

El crecimiento económico y su efecto en el ámbito social de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014

Un crecimiento económico sin inversión en desarrollo humano es insostenible –y falta de ética.

-Amartya Sen

Introducción

Una vez expuesta la participación real de las materias primas en las exportaciones y en el crecimiento económico, sin precedentes, experimentado por Ecuador y Colombia en el período comprendido entre el 2000 y 2014, resulta interesante estudiar el peso y los efectos de dichas rentas y crecimiento en el ámbito social de ambos países. Con este fin, el presente capítulo busca analizar y comparar la transformación que han experimentado los indicadores sociales que componen el Índice de Desarrollo Humano (IDH): salud, educación, y estándar o nivel de vida, tras el reciente crecimiento económico de Ecuador y Colombia, tras la implantación del neoextractivismo, principal fuente generadora de recursos en la última década. De la misma manera, a través de este análisis se pretende develar las semejanzas y diferencias que supondría un régimen con políticas progresistas, como en el caso de Ecuador, y un régimen con políticas neoliberales, como Colombia; así como su relación -ya sea positiva o negativa- con el bienestar social.

A manera de contexto, este capítulo comienza revisando los cambios y el estado de la política social en América Latina como región a lo largo de esta década. Este último período ha sido de vital importancia para Latinoamérica, considerada como la región más desigual del mundo, ya que ha podido experimentar transformaciones importantes en cuanto a su política social, derivadas de factores tanto económicos como políticos. Del lado de las variables económicas, se encuentra la bonanza económica producto del ciclo de precios altos de los commodities, el mismo que benefició de sobremanera a América Latina, considerando que se trata - primordialmente- de una región primario-exportadora. Mientras que por el lado de los factores políticos, se observa el fracaso del paradigma neoliberal, junto con la masiva protesta y descontento social que alentaron el surgimiento y el ascenso de regímenes de una “nueva izquierda” en varios países latinoamericanos, así como el restablecimiento de la democracia en la región.

Dentro del nuevo énfasis o preocupación por la política social en América Latina, destaca el número creciente de Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) que han empezado a operar en forma progresiva a lo largo de toda la región. Si bien muchos de estos programas comenzaron a implementarse desde la segunda mitad de los noventa dentro del modelo neoliberal, en la actualidad, continúan teniendo un papel protagónico como mecanismo estrella de la política social latinoamericana. No obstante, a pesar de que la focalización de este tipo de programas se encuentra en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, este instrumento de la política social constituiría un paliativo, más no la solución definitiva para la pobreza y la desigualdad.

Entrando en materia de los casos de estudio: Ecuador y Colombia, se torna sustancial estudiar la política social presente en estos dos países, tomando en cuenta que el primero atravesó una transformación política e ideológica con el ascenso de un gobierno progresista en la mitad de este período, y que además, contó con la mayor bonanza económica que este país haya registrado en su historia para respaldar su proyecto político. Por otro lado, contrario a la tendencia de los regímenes de izquierda en la mayor parte de la región, Colombia ha experimentado -en el transcurso de este período- la profundización del paradigma neoliberal, hecho que junto con el conflicto interno, ha impactado de manera significativa la política social y el gasto público social en este país.

La primera sección del capítulo plantea, a manera de contexto, el panorama de la política social en América Latina y los cambios que -de una manera u otra- han contribuido a que ésta ocupe un lugar primordial dentro de la agenda desarrollista de los países de la región, entre ellos Ecuador y Colombia, en los últimos años. Posteriormente, en la segunda y la tercera sección se examinan los estudios de caso, Ecuador y Colombia respectivamente, con base en su política social actual, sus programas sociales, con énfasis en los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), y la evolución en el gasto público de indicadores y variables sociales indispensables para el desarrollo como salud, educación y desigualdad. Cabe señalar que estos indicadores sociales han sido trabajados respecto al gasto público en salud y educación como porcentaje del PIB, ya que se busca develar la prioridad que el Estado ha asignado a la atención de estas áreas sociales así como el peso que han tenido las rentas extractivas en el financiamiento de estos sectores. En la cuarta sección, se realiza un análisis comparativo entre los dos casos de estudio, Ecuador y Colombia, apoyado en las

transformaciones sociales, observadas en ambos países en la última década y su efecto en los indicadores de desarrollo humano. Finalmente, en la quinta y última sección se exponen las conclusiones del capítulo.

1. La transformación de la política social en América Latina

América Latina se distingue como una región de marcados contrastes. Por varias décadas, ha sido catalogada como la región con mayores índices de desigualdad en el mundo. No obstante, esta caracterización se ha visto de alguna manera revertida en los últimos años, donde a pesar de los crecientes niveles de desigualdad en el mundo, América Latina, ha conseguido de alguna manera mermar la brecha existente entre ricos y pobres. En la última década, la desigualdad experimentó un retroceso en países con crecimiento alto como Chile y Colombia, en países con un crecimiento menor como Brasil y México; asimismo, disminuyó en países con regímenes de izquierda como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela y en países con gobiernos de centro o centroderecha como México y Perú (Lustig 2015, 14). Esta disminución de la desigualdad, a partir de la década del 2000, parecería estar impulsada por factores como una flexibilización del mercado laboral y una distribución más progresiva del gasto público, particularmente, a través de transferencias monetarias (Gasparini y Lustig 2011, 3).

No obstante, la desigualdad persiste como una de las características distintivas de América Latina como región, ya que a pesar de haber disminuido, continúa siendo la mayor del mundo, incluso cuando se la compara con lugares con un menor nivel de desarrollo económico o con mayores proporciones de población en condiciones de pobreza. La desigualdad en Latinoamérica no radica únicamente en la disparidad en los ingresos, sino también en otras áreas como el acceso a bienes básicos como salud y educación. Dentro del debate, entorno a la persistencia histórica de la alta inequidad en América Latina, algunos argumentan que la desigualdad es un rasgo que se ha encontrado presente en las sociedades latinoamericanas desde la conquista, tanto en términos absolutos como en relación con el resto del mundo, lo cual sugeriría que la desigualdad es una característica estructural arraigada desde hace siglos atrás (Gasparini y Lustig 2011, 7). Mientras que para otros, los niveles de desigualdad en la región no habrían sido particularmente altos, o distintos a los de otras regiones, sino hasta la llegada del período de desarrollo que la región empezó a experimentar hacia finales del siglo XIX, por lo cual se muestran más optimistas en cuanto a la reversión de esta característica (Gasparini y Lustig 2011, 7).

Apoyando el segundo argumento, el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo en América Latina desde finales de los ochenta, y la posterior implementación del Consenso de Washington en los noventa, redujeron de manera sustancial las posibilidades tanto económicas como políticas para que los países de la región pudieran sostener o implementar políticas de bienestar social. El Consenso de Washington, una reforma socioeconómica pro-mercado, fue impulsada bajo la consigna política de construir una alternativa eficiente para corregir los factores estructurales que obstaculizaban un crecimiento regular, así como la introducción de un nuevo patrón de distribución económica en la región (Midaglia 2012, 80). Cabe recordar que cada modelo de desarrollo conlleva, ya sea de manera implícita o explícita, una concepción sobre cómo debe ser canalizada la política social.

En la década de los noventa, con la implementación del modelo neoliberal en América Latina, la desigualdad se vio incrementada de manera significativa en la región en su conjunto y, con algunas excepciones, en varios de sus países, se revirtió la tendencia que se había registrado hasta inicios de la década de 1980 (Vilas 2007, 11). En este espacio de tiempo, el incremento de la pobreza y el ahondamiento de las desigualdades sociales fueron simultáneas a la recuperación y al crecimiento de la economía, que superó el 30% como total de la región (Vilas 2007, 11). Así, la hipótesis neoliberal del “derrame de los frutos del crecimiento” se vio deslegitimada, y junto con ella, la reforma política que causaba estos resultados desfavorecedores. Asimismo, se debe resaltar que el modelo neoliberal en la región apostaba al extractivismo como generador de crecimiento económico, al mismo tiempo de que se minimizaban, negaban o reprimían las protestas ciudadanas por los impactos sociales y ambientales ligados a la explotación (Lerman Alperstein 2014, 128).

Como respuesta al fracaso del modelo neoliberal en el sector social y al alto índice de desigualdad, a partir del 2000, empiezan a surgir regímenes de izquierda con una nueva agenda en varios países latinoamericanos. Para el 2009, diez países y alrededor de dos tercios de la población de la región, se encontraban gobernados por regímenes que pueden ser clasificados como de izquierda: Argentina (2003), Bolivia (2006), Brasil (2003), Chile (2000), Ecuador (2007), El Salvador (2009), Nicaragua (2007), Paraguay (2008), Uruguay (2005) y Venezuela (1999) (Lustig 2009, 5). Sin embargo, debido a que dos de los países latinoamericanos más fuertes, México y Colombia, son gobernados por fuerzas de derecha, en el marco de procesos de privatización en el primer caso, y de securitización y regionalización de los conflictos militares en el segundo, no se podría aseverar la existencia de una oleada de izquierda en toda la región (Ramírez 2008, 48).

Complementariamente, dentro del grupo de países con regímenes políticos de izquierda se puede realizar dos distinciones: regímenes de izquierda populista en países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela; y regímenes de izquierda socialdemócrata como en Brasil, Chile y Uruguay (Lustig 2009, 5). No obstante, ambas vertientes de izquierda comparten elementos en común como la crítica a las reformas económicas neoliberales impulsadas en la región en los años ochenta y noventa; y, el apoyo al papel del Estado como regulador de los mercados y garante del bienestar social (Cuestas 2014, 26).

El contexto internacional también contribuyó a la promoción de la agenda de la nueva izquierda en los países de la región. El boom de las materias primas a nivel mundial en la última década, no solo significó para América Latina un período inédito de bonanza económica gracias al incremento en los precios de los principales commodities que exporta la región, sino que también, dio paso a que estos regímenes políticos de izquierda se consolidaran en varios países (Hidalgo y Hurtado 2016, 7). Esta tendencia política, ha sabido aprovechar el incremento de los ingresos fiscales -ya sea debido a que los principales productos de exportación se encuentran bajo el control del Estado o por una mayor recaudación tributaria- para implementar su modelo económico y social basado en un mayor intervencionismo en el sector productivo y en un incremento considerable en el gasto público (Hidalgo y Hurtado 2016, 7).

Las políticas gubernamentales de estos gobiernos, en el ámbito social, han presentado una ruptura con las políticas impulsadas por el modelo de ajuste estructural de años atrás. La prosperidad económica y el impulso al bienestar social derivados de este contexto, han permitido que los ejecutivos de izquierda de la región, gocen de altos niveles de aprobación, y que incluso, a través de reformas constitucionales, prolonguen sus mandatos. Estos hechos se ven reafirmados en la tesis de Gudynas que advierte que en este tipo de gobiernos el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, así como su discurso que justifica las actividades extractivas con el fin de financiar programas sociales y contribuir así a la mitigación de la pobreza (Gudynas 2009, 188-203).

Asimismo, el renovado interés social en la región se ha visto apoyado en diversos factores. Por una parte, las nuevas perspectivas económicas, así como los movimientos globales hacia una mayor inversión en políticas sociales, han devenido estímulos para que América Latina vuelque su mirada hacia el aspecto social (Bonvecchi, Johannsen y Scartascini 2015, 2). También, la región ha sido testigo de cambios en los procesos políticos, originados por el descontento social con los resultados económicos y sociales de la década de los noventa, y como antes fue descrito, han propiciado un movimiento ideológico hacia la izquierda que ha buscado la reivindicación del bienestar social dentro de las agendas de Estado (Bonvecchi, Johannsen y Scartascini 2015, 2).

Además, el restablecimiento de la democracia en la gran mayoría de los países de la región, junto con un fuerte proceso de descentralización, habrían viabilizado el aumento en los fondos asignados hacia las políticas sociales (Bonvecchi, Johannsen y Scartascini 2015, 2). Estas condiciones vendrían a plasmar la relación que existe entre la variación de las políticas sociales de acuerdo a los distintos momentos históricos y a los modelos de desarrollo impulsados durante los mismos (Sánchez 2012, 2).

Sin embargo, para algunos la tesis de la democracia como catalizadora de bienestar social, no sería veraz puesto que la promesa de la teoría de la transición: “cuanto más democrático es un país, más justo será, y cuanto más justo, más democrático” aún no se ha cristalizado (Burchardt 2008, 84). Esto debido a que de acuerdo a ciertas posturas, las tres últimas décadas de democracia no han conseguido reducir las desigualdades sociales extremas, sino que más bien, en algunos casos, esta característica se ha incrementado de manera simultánea con el proceso de democratización (Burchardt 2008, 84).

Por otra parte, como bien se conoce, con el paradigma neoliberal, el gasto social devino la variable de ajuste en muchos países de la región. No obstante, a mediados de los noventa, surge en América Latina uno de los principales instrumentos o mecanismos de la política social contemporánea empleado por la gran mayoría de países latinoamericanos, los denominados: Programas de Transferencias Condicionadas (PTC). Dentro de este grupo, el programa pionero fue Progresá en México en 1997, conocido posteriormente como Oportunidades y actualmente como Prospera; a este le siguieron iniciativas similares como Bolsa Familia en Brasil y Familias en Acción en Colombia, entre muchos otros que han surgido en varios países de la región (Bonvecchi, Johannsen y Scartascini 2015, 2). Un Programa de Transferencias Condicionadas:

[...] consiste en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de que estas cumplan con ciertas conductas asociadas al mejoramiento de sus capacidades humanas. En algunos programas, se contempla la entrega de beneficios a otras categorías de personas, como adultos sin empleo, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que permite incorporar familias sin hijos menores de edad (Cecchini y Madariaga 2011, 13).

Este tipo de programas presentan una serie de ventajas. Primero, han sido eficaces para ayudar a disminuir el número de personas que viven en situación de pobreza a través de la transferencia de ingresos. Se estima que alrededor de 100 millones de latinoamericanos reciben alguna clase de transferencia, así como una mayor eficiencia de la inversión social (Gaitán 2014, 26). También, tienen un efecto sobre el consumo debido a que lo reciben personas que tienen una alta propensión al gasto y baja capacidad de ahorro (Gaitán 2014, 26). Por tal razón, estos programas tendrían efectos positivos en la distribución del ingreso (Ponce 2011). En consecuencia, los ingresos de los hogares y los niveles de escolaridad y salud aumentan.

No obstante, no se puede considerar a los PTC como un mecanismo efectivo para la eliminación de la pobreza y las desigualdades, ya que tan solo contribuyen a aliviarlas. Además, varios detractores de este tipo de políticas, consideran a los PTC como programas asistencialistas que generan dependencia en los beneficiarios, y que además son insostenibles en el tiempo (Cecchini y Madariaga 2011, 167). Asimismo, los PTC han sido catalogados como instrumentos del clientelismo que pueden ser manipulados por distintos actores políticos y sectores que -históricamente- han gozado de autonomía y de un alto poder de negociación (Cecchini y Madariaga 2011, 167).

No cabe duda de que la reciente extensión de esta clase de programas asistenciales en varios países de América Latina, tanto en número como en cobertura, se ha dado gracias al incremento del ingreso procedente del boom exportador de las materias primas, así como a la emergencia de nuevos regímenes políticos producto del fuerte descontento social. Este hecho ha dado paso a una tregua social transitoria que ha sido aprovechada tanto por las nuevas élites dirigentes de izquierda de origen popular, así como también, por los nuevos gobiernos neoliberales de la región (Dupas 2008, 77).

Actualmente, con el fin del boom de los commodities y de sus onerosas rentas, además de la fuerte desaceleración económica en América Latina, el futuro de este tipo de programas sociales junto con la sostenibilidad y proyección de los logros alcanzados en materia de bienestar social, se torna incierto. Tal situación deriva de las debilidades estructurales de la región, que asentadas -principalmente- en su estructura productiva y comercial, constituyen un escenario de fuerte vulnerabilidad, donde la desaceleración del crecimiento y la caída de los términos de intercambio tienen el efecto de producir repercusiones negativas en las cuentas públicas, y en consecuencia, en el gasto público social.

2. Ecuador

2.1. El modelo progresista ecuatoriano y la política social

La política social en Ecuador ha presentado grandes transformaciones, particularmente en los últimos años. Ecuador fue uno de los países donde el deterioro social de la década de los noventa, encadenado a los crecientes niveles de pobreza y profundización de la desigualdad, potenció la radicalización de la protesta y descrédito al modelo neoliberal. Esto debido a que la combinación de las políticas de ajuste y formatos focalizados de políticas sociales no condujo necesariamente a una mejora de los indicadores sociales, sino que, en algunos casos logró revertir los avances anteriores (Gaitán 2014, 17). En el caso de Ecuador puede afirmarse -de manera indiscutible- que la introducción de políticas de estabilización neoliberal condujo a una fuerte reducción del gasto público social (Avritzer 2009, 177).

Dentro de esta coyuntura de fuerte descontento social, se dio el triunfo electoral en Ecuador, al igual que en varios países de la región, de un gobierno con tendencia nacionalista y populista, apoyado por los movimientos sociales. La agenda de este gobierno proponía priorizar el pago de la deuda social y así dar un revés a la política del paradigma neoliberal que privilegiaba el libre mercado, la disminución del papel del Estado, el pago de la deuda externa, la estabilidad macroeconómica y monetaria, las privatizaciones y la incorporación sin mayores restricciones a la economía mundial (Hernández 2006, 18).

Otro factor trascendental, además del fracaso del neoliberalismo, para la victoria progresista, fue la crisis del sistema de representación, como resultado del desgaste político de los partidos tradicionales y la exclusión de varios sectores ciudadanos del ejercicio del poder (Hernández 2006, 20). Esta condición favoreció el triunfo de Rafael Correa, puesto que su posición de

“outsider”¹ en la arena política del país garantizó su victoria electoral, inherente a una notable debilidad y fragmentación relativa de las fuerzas de izquierda organizadas en ese momento (Ramírez 2008, 49). Cabe resaltar que Correa era un personaje relativamente desconocido hasta poco tiempo antes de la presentación de su candidatura. Sin embargo, el apoyo electoral a favor de Correa aumentó en contados meses desde un umbral de alrededor del 5%, hasta alcanzar el 57% de los votos válidos, sustentado en un discurso contestatario al status quo y con un claro matiz ideológico hacia la izquierda (Ramírez 2008, 49).

Desde su posesión, Correa anunció una revolución de la política social como uno de los principales pilares de su agenda de gobierno, poniendo de esta manera énfasis en el capital humano y en el aspecto social. Este hecho lo corrobora César Carranza, puesto que más allá de las críticas que se pueden verter sobre la calidad y la eficiencia del gasto, ha existido una orientación de políticas más sociales con el gobierno de los últimos períodos². La política social del gobierno de Correa ha girado alrededor del establecimiento de una política direccionada a crear ciudadanía bajo un enfoque de derechos. Con este fin, se ha buscado reconocer y promover en los beneficiarios su condición de sujetos de derecho, así como incentivar su ejercicio a través de una inclusión proactiva de los mismos en las soluciones de sus problemas (Minteguiaga 2007, 57).

También, la política social progresista ha perseguido articular lo social con lo económico, revirtiendo de esta manera la disociación de estos dos aspectos presente en el modelo neoliberal. Complementariamente, la política social reciente ha involucrado un fuerte contenido asistencial, que incorpora -al mismo tiempo- elementos de una estrategia de inclusión mucho más compleja, a través de una serie de programas y subprogramas.

Además, con el objetivo de articular políticas y estrategias se establecieron las instancias, que en la actualidad, se conocen como ministerios coordinadores en Ecuador. Es así, como el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) fue creado con el fin de concertar acciones a favor del desarrollo junto con otras carteras de estado como: Economía, Inclusión

¹ En política este término hace referencia a una persona que se encuentra fuera del sistema de representación política, o bien, que es externo a las normas y tradiciones de la cultura política y decide ingresar a un proceso electoral en particular. Se trata de alguien “nuevo” en la política; aunque no todos los nuevos son outsiders, ya que en algunos casos su discurso es similar al del sistema o también puede ser parte de la renovación del capital político de un partido. En general, son personajes que han tenido éxito en una actividad que tiene relevancia ya sea en el espacio público, en el mundo mediático, o través del aprovechamiento de un momento de crisis, como un intento de golpe de estado o un manejo económico complejo (Carrión 2012).

² César Carranza (antropólogo y profesor investigador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 7 de junio de 2016.

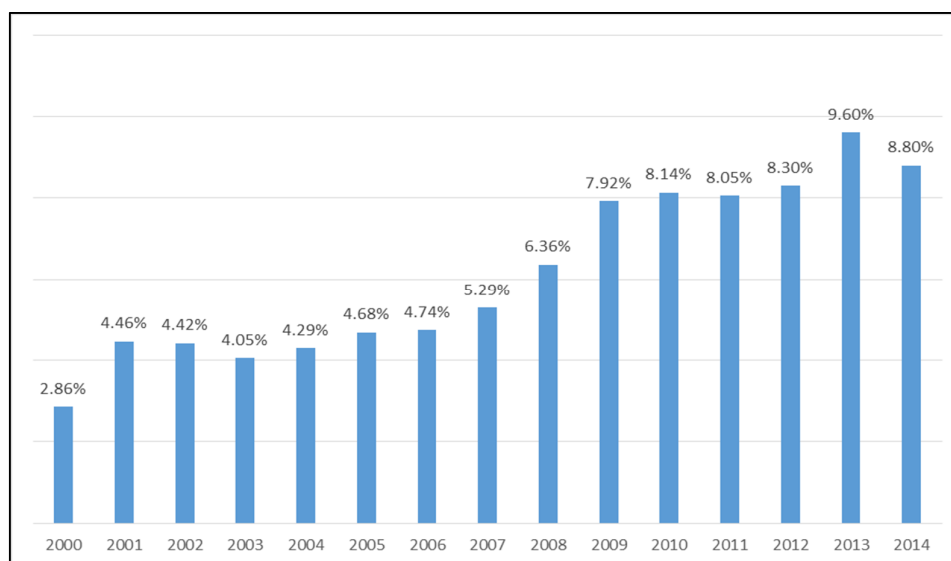
Económica y Social, Salud Pública, Educación, Trabajo y Empleo, y Desarrollo Urbano y Vivienda (Minteguiaga 2007, 58). Adicionalmente, con este nuevo modelo se ha venido elaborando la Agenda de Desarrollo Social, como herramienta central para la planificación y gestión bianual de la política social. La Agenda de Desarrollo Social:

[...] como guía que refleja las transformaciones requeridas para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos, pone metas y énfasis concretos de la política social por cada bienio, a fin de hacer un adecuado seguimiento y ajuste a una política social dinámica, que constantemente busca mejorar y responder, tanto a los desafíos estructurales, como a los desafíos que imponen los nuevos momentos, en un contexto de cambios, no sólo nacionales sino globales (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 2012, 4).

En suma, en Ecuador la política social del período reciente, ha sido acompañada por esfuerzos significativos de reorganización y rediseño institucional.

Derivado de la política social se encuentra el gasto público social, el mismo que dentro de este espacio de tiempo ha presentado un importante repunte, inclusive, cuadruplicando en el 2014 el porcentaje del PIB destinado para este concepto registrado en el 2000 (fig.4.1). Sin embargo, el crecimiento sostenido que el gasto público social había venido presentando en la última década ha comenzado a presentar contracciones en los últimos años como se puede apreciar en el 2014.

Figura 4.1. Gasto público social total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
Ecuador



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social.

Cabe recordar que en los siete primeros años de la década del 2000, es decir entre 2000 y 2006, donde el gasto público social comprendía alrededor del 4.21% del PIB, el país se encontraba sujeto a regímenes neoliberales comprometidos con políticas de ajuste estructural promovidas por organismos internacionales como el FMI. De igual manera, no se debe olvidar que dentro de esta coyuntura, Ecuador acababa de atravesar una grave crisis económica y comenzaba con el proceso de dolarización.

Por su parte, el ciclo de los precios altos de los commodities de esta década, coincidió con el cambio del modelo neoliberal al progresista, cuyos flujos favorecieron al importante incremento del gasto público social registrado a partir del 2007. No obstante, para Carranza, si bien bajo el paradigma progresista se ha dado un aumento en el gasto público social derivado en mejoras en ciertos indicadores sociales, el ritmo de los logros no se compadece con el flujo de recursos que el país percibió con el súper ciclo de precios de las materias primas (Carranza 2016). De la misma manera, de acuerdo a una conversación con Alberto Acosta, a pesar de que con el modelo progresista el gasto público social, particularmente en educación y salud, ha sido mucho más alto que en la época neoliberal; aún ha faltado mucho por hacer³.

2.2. Programas Sociales de Transferencias Condicionadas

Los años noventa constituyeron para el Ecuador un período en el que se aplicaron diversos programas de ajuste estructural que tuvieron efectos negativos en la inversión pública y en el gasto social. En la actualidad, bajo el régimen progresista se han conservado esquemas sociales de transferencias condicionadas de la época neoliberal. El PTC conocido como Bono de Desarrollo Humano (BDH), anteriormente Bono Solidario, es una herencia del paradigma neoliberal, creado en 1998 durante el mandato presidencial de Jamil Mahuad (tab.4.1). Una vez en el poder, la administración de Correa decretó la duplicación del BDH de 15 USD a 30 USD, un incremento del 38% en la asignación del bono a adultos mayores y la amplificación en cobertura a personas con más del 40% de discapacidad, que anteriormente, se extendía únicamente a las personas con más del 70% de discapacidad, cumpliendo de esta manera una de sus promesas de campaña (Recalde 2007, 1). En la actualidad, esta transferencia comprende un monto de 50 USD.

³ Alberto Acosta (economista, político y profesor investigador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 17 de junio de 2016.

Tabla 4.1. Programa de Transferencias Condicionadas en Ecuador

Programa	Poblacion Objetivo	Transferencia	Criterios de Elegibilidad	Condicionalidades	Receptor
Bono de Desarrollo Humano	Familias en situación de pobreza	BDH	Hijos e hijas menores de 16 años	Educación: niños y niñas de entre 5 y 17 años deben estar matriculados en la escuela y tener una asistencia del 75%.	Madre
		Pensión para personas con discapacidad	Personas con un 40% o más de discapacidad	Salud: niños y niñas menores de 1 año deben asistir al menos a un control preventivo de salud cada dos meses; niños y niñas de entre 1 y 5 años deben asistir al menos a un control preventivo de salud cada seis meses.	Destinatario directo
		Pensión para adultos mayores	Adultos mayores de 65 años sin seguridad social		Destinatario directo

Fuente: CEPAL.

De acuerdo a José Mieles, a pesar de que el BDH fue una medida implementada por el modelo neoliberal, el actual régimen lo ha mantenido porque ha dado resultados en el campo de la pobreza y desigualdad⁴. No obstante, uno de los mayores problemas de este programa es que exige mucho control en cuanto al cumplimiento de la condicionalidad, así como en su cobertura (Mieles 2016). Es por esta razón que para Carranza, el BDH se trataría más bien de un programa de trasferencias prácticamente directas dado que la condicionalidad se monitorea muy poco y no existe un seguimiento adecuado del cumplimiento de la misma (Carranza 2016).

Entonces, si bien, este programa ha cumplido objetivos en cuanto a que un mayor número de niños son enviados a la escuela y que asisten a centros de salud de manera periódica, debe existir un mayor control para que las personas que reciben esta transferencia sean quienes en verdad lo necesitan, y que además cumplan con las condiciones estipuladas (Mieles 2016). Es por esta razón que en palabras de Mieles a pesar de que el BDH puede ser una buena política social, tiene que existir control detrás de la política (Mieles 2016). Asimismo, cabe resaltar que el BDH es una política progresiva y que su nivel de progresividad ha aumentado a partir del año 2000 (Ponce 2011).

Con el nuevo paradigma progresista, como señala Carranza, este programa ha presentado una transformación al pasar de ser un programa concebido como un apoyo a situación de pobreza a ser un programa que ha tomado la forma de una pensión dirigida a grupos vulnerables, especialmente adultos mayores que se encuentran fuera de la seguridad social o personas con discapacidad (Carranza 2016). Complementariamente, de acuerdo a Fander Falconí el BDH ha dejado de ser un bono asistencialista y se ha convertido en un bono que garantiza derechos

⁴ José Mieles (economista investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 2 de junio de 2016.

debido a sus condicionalidades en cuanto al acceso a educación y salud, y como tal forma parte de un piso de protección social⁵.

Por su parte, Acosta afirma que este tipo de programas tienen el efecto de reducir la pobreza, mas no en una forma sustentable y sostenible, además de que consistirían en políticas clientelares puntuales, que no han tenido la capacidad de transformarse en una herramienta productiva (Acosta 2016). Si bien, al igual que Acosta, muchos plantean a estos programas como clientelares, para Carranza no necesariamente deben encerrar este aspecto, ya que en el caso de Ecuador, el número de beneficiarios del BDH ha venido disminuyendo en los últimos años (Carranza 2016).

Asimismo, durante este período se han implementado una serie de programas sociales fundados en la rectoría y coordinación sectorial, la eliminación de barreras de acceso y mejora de la calidad de la educación pública, la inversión en ciencia y tecnología, la ampliación y mejoramiento de la calidad de la atención en salud, la atención oportuna de emergencias y las reformas a la Seguridad Social (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 2012). Estos programas, que a la vez cuentan con subprogramas, cubren sectores de la política pública como: educación, salud, hábitat, protección social, inclusión económica y social y promoción del empleo, y migración (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 2012).

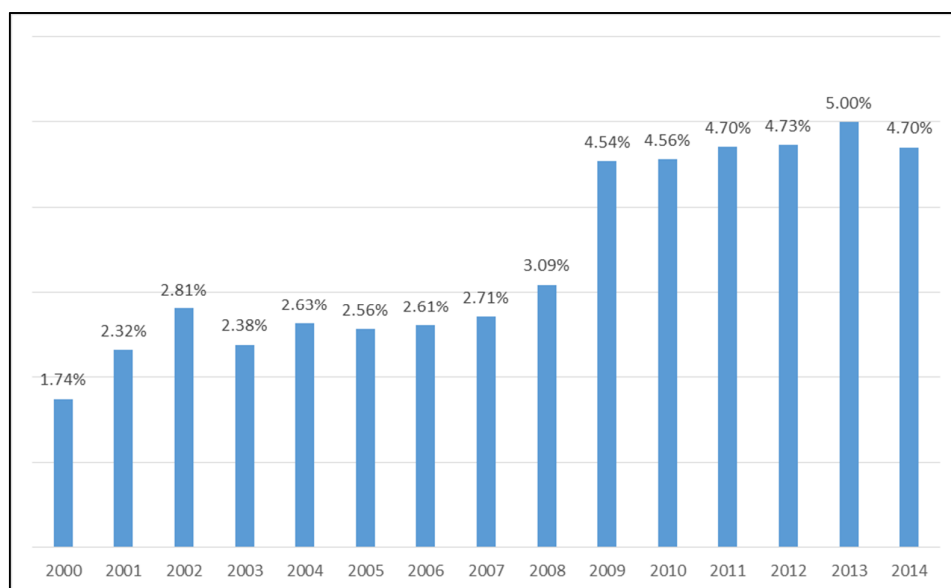
2.3. Indicadores sociales

2.3.1. Educación

El sistema educativo en Ecuador, desde siempre ha presentado grandes deficiencias. Este hecho resulta alarmante puesto que una educación de calidad es uno de los elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social de un país. La calidad de la educación, especialmente de la pública, se ha visto comprometida debido a problemas como la falta de infraestructura, la centralización del sistema, salarios bajos del personal docente, junto a la poca o incipiente preparación del mismo (Briones, y otros 2011). Como se puede observar en el gráfico (fig.4.2), si bien el gasto público social asignado al sector educativo como porcentaje del PIB ha presentado grandes avances en la última década, particularmente a partir de 2008, con el ascenso de un gobierno cuya agenda tiene especial énfasis en el gasto público social; la calidad, no solo de la educación sino del gasto, persiste como un grave problema para alcanzar la eficiencia en esta área (Briones, y otros 2011).

⁵ Fander Falconí (economista, político y profesor investigador), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 16 de junio de 2016.

Figura 4.2. Gasto público social en Educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en Ecuador



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social.

Para Carranza, a pesar de que el gasto en el sector educación ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, este gasto se ha direccionado para cubrir el gran déficit registrado en años anteriores, donde varios de los servicios públicos, entre ellos educación, se encontraban desmantelados (Carranza 2016). En la actualidad, este gasto ha llegado a solventar, particularmente, temas de cobertura mas no de calidad de esos servicios (Carranza 2016).

Cabe resaltar que en todos estos años, el gasto público en educación no ha llegado a cumplir el mínimo establecido en la transitoria decimoctava de la Constitución de 2008:

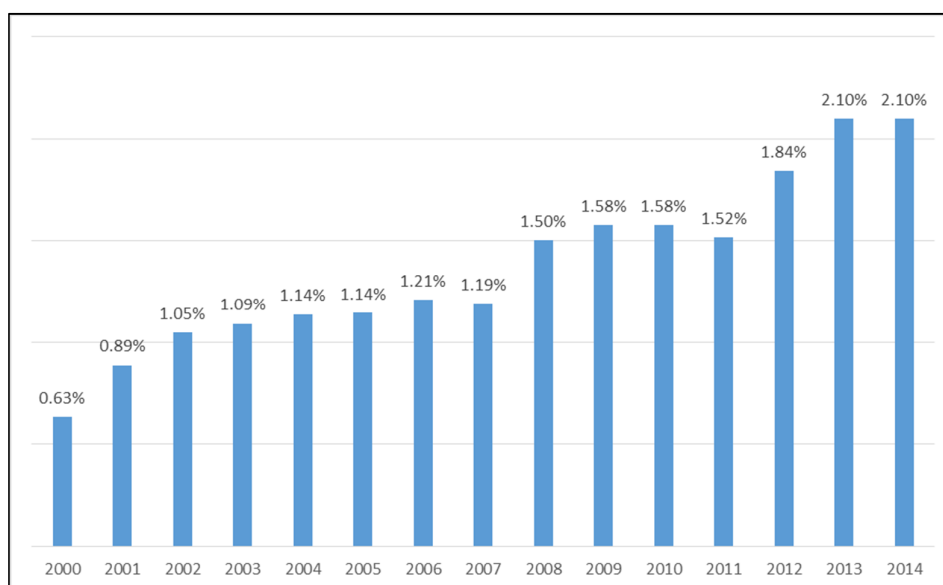
El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto (Constitución del Ecuador 2008, 201).

Por lo cual, en palabras de Acosta, si bien ha existido más inversión en este sector, aun todavía falta, y sobre todo en lo que respecta a calidades (Acosta 2016). De acuerdo a este académico, en el ámbito de las calidades, en el sector educación se ha priorizado la educación tecnocrática y no una educación que apunte a la construcción del buen vivir, por ejemplo (Acosta 2016).

2.3.2. Salud

En Ecuador, el sistema de salud, se ha visto siempre caracterizado por la fragmentación, derivada de procesos centralizados y desarticulados en la provisión de servicios de salud preventivos y de calidad, ocasionando así, la congestión de las unidades hospitalarias e imposibilitando a la población el tratamiento oportuno (Egas 2013, 5). Hecho que es corroborado por Acosta en cuanto a que en el Ecuador se ha priorizado la salud curativa y no la salud preventiva (Acosta 2016). A pesar de que a partir del año 2000, el gasto público social en salud ha ido incrementándose -aunque de manera reducida-, no sería hasta el año 2008, que este porcentaje empezaría a aumentar de forma sostenida (fig.4.3).

Figura 4.3. Gasto público social en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Ecuador



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social.

Asimismo, en este año se realizó una reforma constitucional en torno al acceso universal y equitativo a bienes y servicios de salud, garantizando así la salud como política de Estado (Giedion, Villar y Ávila 2010, 160). Los principales avances en materia de salud durante este período han consistido en mejoras de la infraestructura existente y construcción de nuevas instalaciones hospitalarias, adquisición de equipo médico para brindar atención a un sin número de patologías, mayor eficiencia en la atención médica pública con personal calificado, así como la extensión de la cobertura y la gratuidad en la entrega de medicamentos para niños, niñas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes (Egas 2013, 10). Sin embargo, Acosta señala que pese al importante incremento de gasto público en el sector salud, este

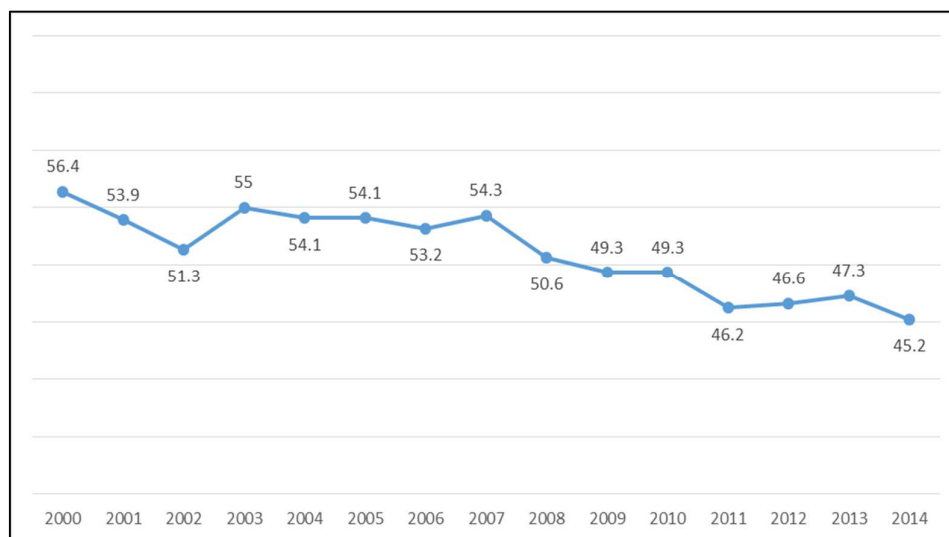
hecho nos confronta con una lamentable realidad, ya que el grueso de los recursos ha terminado en los grupos económicos que controlan el sector de la salud como clínicas, hospitales, centro médicos y farmacéuticas privadas (Acosta 2016).

A pesar de los esfuerzos de los últimos años, promovidos por el gobierno actual en el campo de salud pública, no se ha logrado compensar décadas de sub-inversión en esta área, y varios expertos aseguran que la “universalización de la salud” que el régimen propone, demandaría entre el 6 y el 7% del PIB (Carriel 2012, 55). Evidentemente, esta meta estaría lejos de ser alcanzada, considerando que pese a que los flujos destinados a salud pública han aumentado a partir de 2008, no lo han hecho de una manera significativa, ya que no han sobrepasado el 2.10% del PIB. Asimismo, se debe considerar que -hasta la fecha- el gasto público en salud no ha llegado a alcanzar, mucho menos a sobrepasar, el 4% del PIB, mínimo fijado en la transitoria vigesimosegunda de la Constitución de 2008 (Carriel 2012, 59).

2.3.3. Desigualdad

Si bien el discurso progresista, durante la última década, ha girado en torno a cómo este nuevo paradigma ha contribuido a la disminución de la pobreza y la desigualdad; lo cierto es que en cuanto a esta última, no solo no ha disminuido, sino que ha tendido a crecer, aunque de forma menos pronunciada que en períodos anteriores (Zibechi 2015). La desigualdad es un fenómeno, que al igual que en otras partes del mundo, ha afectado a Ecuador de sobre manera. No obstante, desde el 2007, esta característica ha comenzado a disminuir en el país, presentado un decremento de alrededor de 9 puntos porcentuales (fig.4.4).

Figura 4.4. Evolución del Índice de Gini en Ecuador



Fuente: CEPALSTAT y Banco Mundial.

Cabe destacar, que en el caso ecuatoriano, parte de este descenso en la desigualdad se ha visto apoyado en la serie de programas sociales que el paradigma progresista ha desplegado en la última década. Este hecho se ve sustentado, como bien expone Gudynas, en que los programas sociales implementados por los gobiernos progresistas de la región, en general, han sido muy exitosos en reducir la pobreza, y en algunos casos incluso la desigualdad (Gudynas 2010, 157). Aunque si bien, el discurso progresista ha condenado la desigualdad social, también dentro del mismo han reaparecido las viejas ideas de un desarrollo entendido como un progreso continuo sustentado en la explotación de los recursos naturales (Gudynas 2010, 157).

3. Colombia

3.1. El modelo neoliberal colombiano y la política social

En Colombia, los dos ejecutivos que han presidido el país en este período -Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos- presentaron una clara orientación neoliberal en sus respectivos gobiernos. Dicha postura se expresó en un política social basada en la mercantilización de la salud y la educación, así como en su empeño en ahondar en el modelo de acumulación basado en la extracción de las materias primas, principalmente minerales, y la promoción a la inversión por parte de las multinacionales (Cruz 2014, 237).

Al igual que en varios países de la región, a inicios de la década del 2000, Colombia se encontraba sumida en un panorama caótico producto de la incapacidad de los gobiernos anteriores para encontrar una resolución al conflicto armado, la debilidad tradicional de los partidos políticos colombianos y la recesión económica de 1999, resultado de la implementación de medidas de corte neoliberal a comienzos de los noventa (Galindo 2007, 148). Dentro de esta coyuntura, al igual que en el caso de Rafael Correa, Álvaro Uribe, un candidato “outsider”, sin mayores posibilidades de triunfo, se logró posicionar y terminó ganando en primera vuelta las elecciones presidenciales colombianas del año 2002. Dentro de su programa de gobierno, su declarada lucha contra el “terrorismo” le otorgó altos índices de popularidad que no solo contribuyeron a esta primera victoria electoral, sino que también, ayudaron a su posterior reelección (Quintero 2013, 83).

Las opiniones valorativas en torno al mandato neoliberal de ocho años de Álvaro Uribe, se han visto divididas. Mientras algunos consideran que fue el mejor gobierno de la historia colombiana, sobre todo por sus logros económicos y con las FARC; otros consideran lo contrario. A pesar de los logros en materia económica alcanzados dentro de su gobierno con la apertura hacia los mercados internacionales, estos resultados fueron alcanzados bajo un modelo de desarrollo extractivo que trajo consigo graves consecuencias para el sector social al agudizar la pobreza y la desigualdad (CINEP 2010, 1). Este hecho corrobora la premisa de Svampa respecto a cómo el neoliberalismo latinoamericano continúa sosteniendo la idea de un Estado subordinado al mercado y, que al mismo tiempo, cataloga a la naturaleza y a los recursos naturales -más allá de la fuerte crítica social- como un recurso o como un capital inagotable para el crecimiento económico (Svampa 2012).

Durante su mandato, Uribe implementó una política de cohesión social con la finalidad de eliminar la pobreza y trabajar por la igualdad de oportunidades a través de siete herramientas: la revolución educativa, el impulso a la economía solidaria, el manejo social de los servicios públicos, la calidad de vida urbana, la promoción y expansión de la seguridad social, el manejo social del campo y el país de propietarios (CINEP 2010, 1). No obstante, siguiendo lineamientos propios del neoliberalismo, sectores sociales como: educación, salud, vivienda, seguridad social, saneamiento básico, energía, agua y medio ambiente, fueron privatizados durante la presidencia de Uribe. El mercado reemplazó al enfoque de derechos que toda política social debe amparar, ya que la prestación de servicios en el período de Uribe, se vio desvanecida por un supuesto sistema de “aseguramiento” de estos servicios que pasaron a manos del sector privado (CINEP 2010, 1).

Además, cabe recordar que durante el mandato de Uribe, la securitización, constituyó el eje principal de su agenda política, dejando relegados aspectos trascendentes como el bienestar social (Vergara 2012,151). Las exigencias propias de la implementación y mantenimiento de una iniciativa como la “seguridad democrática”⁶, obligaron a que esta administración destinara cuantiosos recursos, que bien podrían haber sido direccionados al gasto público social, a la intensificación de la guerra contra el terrorismo (Galindo 2007, 160).

Es así, como varios indicadores sociales durante su mandato sufrieron impactos negativos: la pobreza absoluta aumentó, la tasa de desempleo disminuyó de manera leve, se registró una crisis importante en el sector salud, la calidad de la educación sufrió un deterioro a expensas de la ampliación de cobertura, los presupuestos para cultura, ciencia y tecnología disminuyeron, y la política universitaria presentó un abandono casi total (Uribe 2004, 11). Este hecho es afirmado por César Corredor, ya que Uribe se habría preocupado por la cobertura de servicios sociales, es decir por atender un mayor número de población, quedándose corto en temas de calidad, porque todo su objetivo era mostrar y aumentar cantidades⁷. En suma, para la administración de Uribe, la política social era considerada como un aspecto marginal, cuya suerte dependía del éxito de la política de defensa y seguridad democrática.

Por su parte, Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como Ministro de Defensa durante el segundo período presidencial de Uribe, una vez que la Corte Constitucional imposibilitó la reelección por tercera vez de este último, inició su campaña prometiendo continuar el trabajo iniciado por su antecesor (Rodríguez 2014,92). En parte, Santos ha continuado con el modelo extractivista, el mismo que ha producido un enorme daño ambiental, confiere al Estado una baja participación de las rentas extractivas y ha sumido a la economía colombiana en un enclave de exportación subordinado al comercio internacional (Rodríguez 2014,96). El fortalecimiento de este modelo extractivista, ha sido el responsable -en buena parte- de la dificultad que ha presentado Colombia para implementar medidas que permitan convertir los excedentes de las actividades minero-energéticas en desarrollo y bienestar social.

⁶ La seguridad democrática es una política implementada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe. El objetivo de esta política es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia 2003).

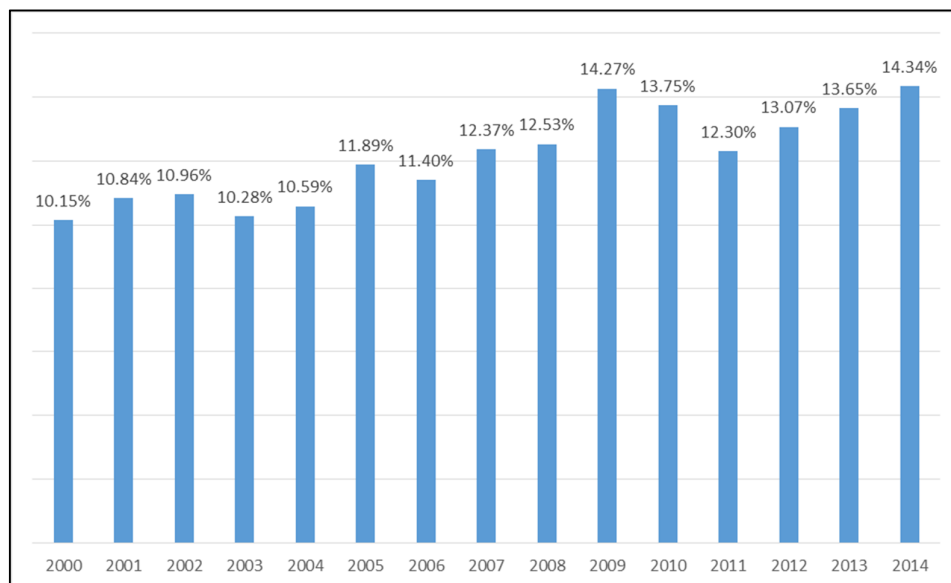
⁷ César Corredor (economista y académico), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 14 de junio de 2016.

Respecto al ámbito social, Santos, quien se encuentra en el poder desde el año 2010 hasta la fecha, al iniciar su cargo expresó el interés gubernamental de ahondar en una política social, basada en la redistribución parcial de la renta y la restitución de tierras (Pastrana y Vera 2012, 66). No obstante, la protesta social se ha convertido en la protagonista principal durante el gobierno Santos. Varias de estas protestas han cuestionado la orientación neoliberal del gobierno, la misma que se ha puesto de manifiesto en la mercantilización de sectores como salud y educación, así como su voluntad de profundizar el modelo de acumulación basado en la extracción de bienes primarios, principalmente de minerales, y el impulso a la inversión por parte de las multinacionales (Cruz 2014, 237).

Actualmente, Colombia se encuentra en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para que Colombia pueda convertirse en miembro pleno de esta organización, además de mejorar sus indicadores económicos, luchar contra la corrupción, trabajar por una mayor transparencia de sus instituciones, y colaborar en materia fiscal; debe demostrar mejoras sustanciales en aspectos sociales como desigualdad, educación y cobertura en salud (Montilla 2014, 114). Para muchos, el ingreso de Colombia a la OCDE, abre la posibilidad de construir e implementar una política social más sólida en el país (Montilla 2014, 114). Es así como para Álvaro Lemus, el hecho de que Colombia este dentro del mapa de la OCDE, le brinda al país la capacidad de captar una mayor cantidad de recursos de la cooperación para el gasto público social (Lemus 2016). Por su parte, según Corredor si bien los países de la OCDE se caracterizan por tener prácticas gubernamentales con mayor transparencia y eficiencia, queda la duda de que éstas puedan contribuir en gran medida a la reducción de la pobreza y el avance de lo social en Colombia (Corredor 2016).

Por su parte, durante este período, la política social colombiana ha girado en torno a la capacidad redistributiva del ingreso que se asume tendría el gasto público social (Cardona 2011, 3). Ahora, si bien el gasto público social total, registrado en Colombia durante este período se ha incrementado, con excepción de coyunturas de crisis de la actividad económica, no lo ha hecho en la misma medida que en el caso ecuatoriano. La tendencia general ha hecho que en el transcurso de estos 15 años, el gasto público social pase del 10.15% del PIB en el 2000 al 14.34% en el 2014, un incremento del 4.19%, que se traduce a la vez en un crecimiento promedio de 0.3% anual (fig.4.5).

Figura 4.5. Gasto público social total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
Colombia



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social.

Cabe destacar que uno de los componentes del gasto público social total, que más se ha incrementado durante este espacio de tiempo, ha sido el correspondiente a transferencias monetarias (Cardona 2011, 9). Asimismo, es importante señalar que -en cuanto a las aspiraciones que tiene Colombia sobre su ingreso a la OCDE- los países miembros de este organismo presentan niveles de participación del gasto público que oscilan entre el 25 y 30% de su PIB, niveles de los cuales Colombia aún se encuentra demasiado lejos (Rodríguez 2014, 8).

3.2. Programas Sociales de Transferencias Condicionadas

Familias en Acción es un PTC, financiado con recursos de crédito de la banca multilateral, creado en el año 2000 e inspirado en la experiencia del PTC Progresá en México, cuyo fin es contribuir a la reducción de la pobreza otorgando un ingreso monetario para igualar condiciones, ayudando de esta manera al desarrollo humano y a la mejora de la calidad de vida de las personas pobres y vulnerables (Prosperidad Social 2016). Durante el gobierno de Uribe, este programa fue el componente social de su estrategia de guerra contra el “terrorismo”, y fue manejado discrecionalmente con fines proselitistas (Rodríguez 2014, 91).

Corredor remarca que con Uribe el programa “Familias en Acción” tenía una tendencia más hacia el asistencialismo puesto que consistía en una estrategia que le brindaba un énfasis distinto a un gobierno que era tildado por muchos sectores de encontrarse muy enfocado en la parte de seguridad y en el tema de acabar con la guerrilla (Corredor 2016). Asimismo, para este académico muchas de las críticas que se vierten en este tipo de programas “asistencialistas” se sustentan en que algunos estudios que han demostrado que si bien en el corto plazo pueden funcionar, en el largo plazo se quedan cortos a la hora de reducir la pobreza y de generar mayor oportunidades para la población (Corredor 2016).

Entre 2012 y 2013, bajo la administración de Santos, este programa sufrió un rediseño para afinar su estrategia y contribuir a la disminución de las disparidades regionales, por lo que su nombre fue modificado a Más Familias en Acción (tab.4.2) (Medellín y Sánchez 2015, 5). En la actualidad, el monto de transferencia de este programa oscila entre 50 y 100 USD acorde a las condicionalidades.

Tabla 4.2. Programas de Transferencias Condicionadas en Colombia

Programa	Poblacion Objetivo	Transferencia	Criterios de Elegibilidad	Condicionalidades	Receptor
Más Familias en Acción	Familias en situación de extrema pobreza, en condición de desplazamiento o indígenas	Bono de nutrición	Hijos e hijas menores de 11 años	Educación: asistencia escolar mínima del 80%. Salud: asistencia del 100% de los menores del grupo familiar a las citas caso de tres incumplimientos de control de crecimiento y desarrollo programadas por la entidad de salud continuos o cuatro discontinuos a la que están afiliados.	Madre
		Bono de educación	Hijos e hijas de entre 11 y 18 años	Capacidades básicas: asistencia de madres titulares y miembros de las familias a los espacios de encuentro y capacitación, así como a las jornadas de atención programadas por el municipio.	Madre

Fuente: CEPAL.

De acuerdo a algunos entendidos, subsidios, como los provistos por el programa -Más Familias en Acción- implican algunas consecuencias negativas ya que, por ejemplo, desestimulan la participación de sus beneficiarios dentro del mercado laboral (Medina 2016). Esto debido a que una de las condiciones para ser beneficiario de este programa es no contar con un trabajo estable, así como no recibir otros beneficios (Corredor 2016) De la misma manera, estos programas serían una estrategia mucho más barata para los gobiernos a la hora de atender problemas sociales como la pobreza, dejando de lado, problemas de fondo, como la cobertura universal en educación y una salud de calidad (Medina 2016).

No obstante, para Consuelo Ahumada el programa “Más Familias en Acción” ha contribuido a que los recursos que percibe el Estado puedan canalizarse hacia las familias más necesitadas del país a través de proyectos productivos, como programas de la granja sostenible, donde la empresa privada también se ha involucrado⁸. En cuanto al tema de asistencialismo, según Ahumada, a pesar de que este programa cuenta con esta característica, ha logrado que muchas familias puedan obtener ayuda para generar proyectos productivos que de otra manera no sería posible (Ahumada 2016).

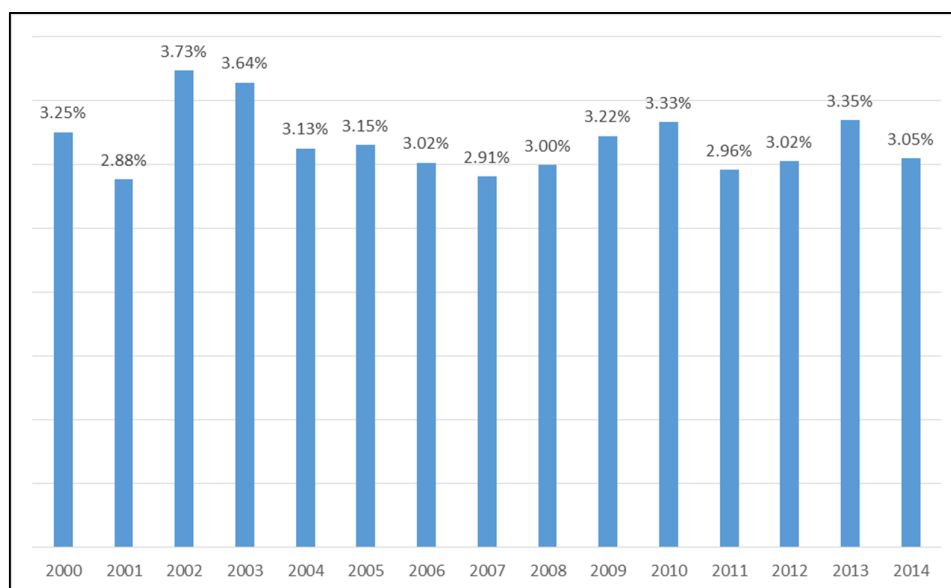
3.3. Indicadores sociales

3.3.1. Educación

En la década de los noventa, los problemas relacionados a la institucionalidad de Colombia, los bajos niveles de coordinación y la diferenciación entre las funciones de los diferentes niveles que se fragmentaban del centralismo administrativo, fueron los factores que condujeron a los escasos resultados en el campo de la educación (Mejía 2012, 158). En la actualidad, la cobertura universal de la educación primaria aún no se ha alcanzado; no obstante, se ha avanzado en la expansión masiva de la educación secundaria y la mejora de la calidad en los niveles terciarios de educación (Mejía 2012, 158). En Colombia, el gasto público en educación ha presentado una tendencia fluctuante a lo largo de la década –incluso- llegando a decaer en los últimos años (fig.4.6).

⁸ Consuelo Ahumada (política y académica), entrevista por Fátima Belén Aguirre Franco, 14 de junio de 2016.

Figura 4.6. Gasto público social en Educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Colombia



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social.

A pesar de que en este período el área de la educación de Colombia ha presentado algunas mejoras, aún persisten desafíos en este campo. En los últimos años, la matriculación preescolar, secundaria y terciaria han presentado incrementos; sin embargo, son pocos los estudiantes que asisten al colegio antes de los 6 años y muchos los que lo abandonan después de los 15 (OCDE 2015, 23). Asimismo, solo cerca de la mitad de los egresados de secundaria entre 17 y 19 años prosiguen estudios en el nivel terciario (OCDE 2015, 23).

En cuanto a la calidad de la educación, un hecho alarmante fue develado en 2012 a través de las pruebas del Programa Internacional de la Evaluación (PISA)⁹ que realiza la OCDE, donde Colombia se situó en el último lugar de la tabla de los países evaluados (El Nuevo Día 2014). Es por esta razón, que mejorar la calidad de la educación y asegurar que todos los estudiantes, particularmente los de sectores vulnerables, adquieran niveles básicos de educación es un reto que subyace a pesar de los avances logrados en cobertura (OCDE 2015, 23). Cabe destacar que en Colombia, la deuda histórica con el sector educativo continua siendo considerable, pese a que, en las últimas tres administraciones -comprendidas entre el 2000 y el 2014- el

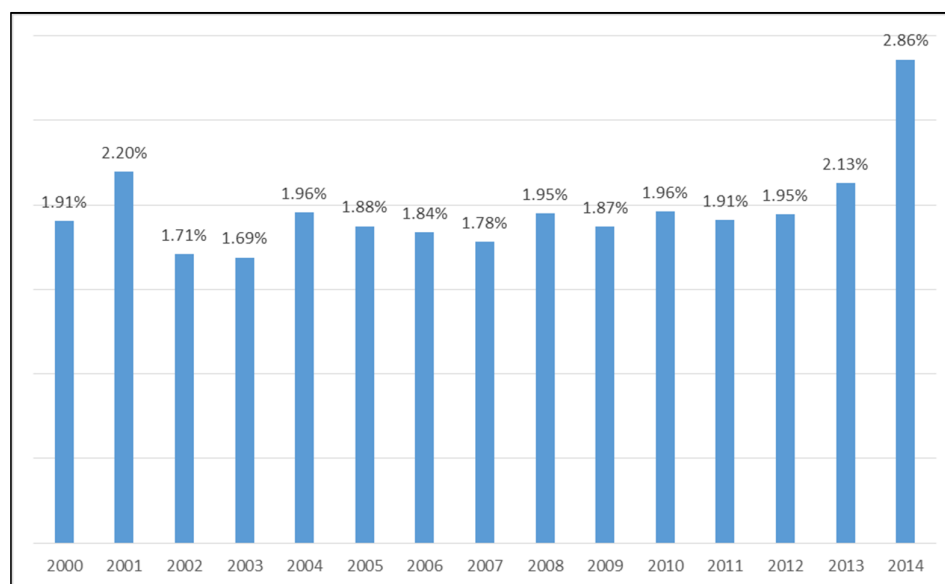
⁹ Estas evaluaciones tienen el objeto de evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para una participación plena en la sociedad. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas para otros países (OCDE 2016).

flujo de recursos destinados al sector se ha incrementado, particularmente en lo que corresponde a educación superior (Vergara 2015).

3.3.2. Salud

A lo largo de este período el gasto público destinado a salud en Colombia, ha fluctuado entre el 1.69 y el 2.86% del PIB (fig.4.7). Este hecho denota el papel secundario -que por años- se le ha asignado al sector salud dentro de la agenda del estado colombiano. Hasta la actualidad, en Colombia existen dificultades para alcanzar la universalidad y la eficiencia dentro de la salud pública (Castro 2012, 26). Se estima que este sector tiene un retraso de casi de una década, atribuido a insuficiencia de recursos financieros que se ha destinado a este concepto (Castro 2012, 26).

Figura 4.7. Gasto público social en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) Colombia



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social.

Se debe resaltar que la salud pública en Colombia, también ha sido sometida a los lineamientos neoliberales. Prueba de ello es la ley 100 de 1993, una de las reformas más significativas por las que ha atravesado este sector en la historia reciente. Esta ley abrió espacio al sector privado para la provisión de servicios sanitarios y de aseguramiento en el sistema de seguridad social de salud (Giedion, Villar y Ávila 2010, 124).

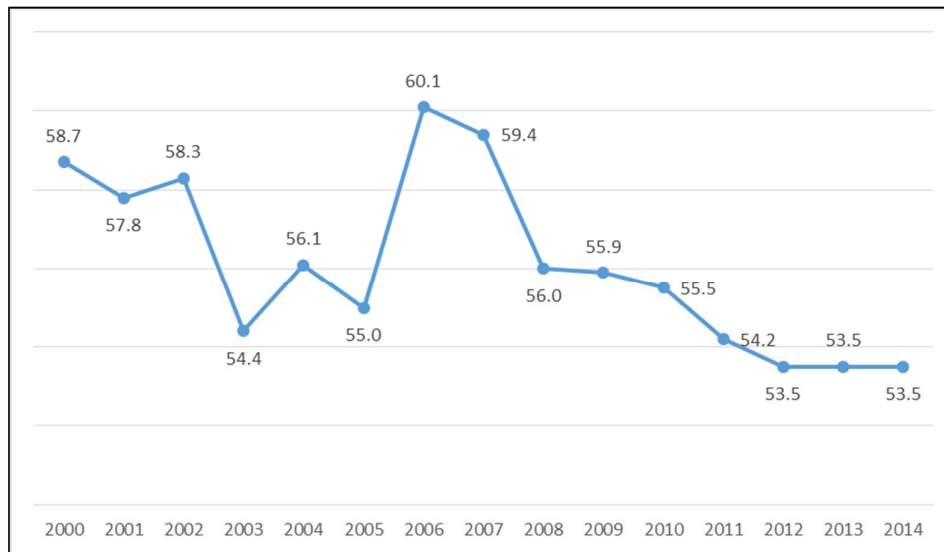
De acuerdo a Corredor, en el sector salud ha habido una mejora importante en cobertura en los últimos años, ya que los planes asistenciales en buena parte han ayudado a integrar al sistema de salud a las familias más pobres del país, que en muchos casos no tenían un empleo y que quedaban desamparadas (Corredor 2016). Es así como de alguna manera se ha corregido el déficit en cobertura, ya que en la actualidad, prácticamente toda la población tiene acceso a servicios de salud.

No obstante, este académico, encuentra dos problemas persistentes en el sector salud. Primero, la sostenibilidad del sistema, debido a que no ha logrado autofinanciarse o ser auto sostenible para atender a un número elevado de personas (Corredor 2016). Mientras que un segundo problema sería la desigualdad en la calidad de los servicios de salud, ya que los prestados por sistemas privados continúan siendo ostensiblemente mejores que los servicios proporcionados por el sistema público, a los que accede la mayor parte de la población (Corredor 2016). Es por esta razón que se han creado al mismo tiempo dos tipos de servicios de salud: uno privado al que acceden las personas que tienen la capacidad económica para hacerlo, y uno público para las personas de menores recursos, los cuales no cumplen con estándares de calidad y no logran cubrir de manera eficiente todas las enfermedades (Corredor 2016).

3.3.3. Desigualdad

Entre los países latinoamericanos de ingresos medios y altos, Colombia se encuentra en primer lugar en niveles de desigualdad (Justo 2016). Como se puede observar en el gráfico (fig.4.8), la desigualdad en este país se ha mantenido constante, llegando a presentar incrementos en ciertos períodos como en 2002 y 2006. En la dimensión económico-social, en Colombia, el 10% más rico de la población se queda con la mitad del PIB; mientras que el 10% más pobre se reparte el 0.6% (Revista Semana 2011).

Figura 4.8. Evolución del Índice de Gini en Colombia



Fuente: CEPALSTAT y Banco Mundial.

Lo preocupante de la desigualdad es la manera en este fenómeno se ha llegado a extender en todo el tejido económico-social colombiano (Justo 2016). Se debe señalar que factores como la educación y la salud, así como las condiciones de acceso y la calidad de estos servicios tiene un impacto importante en los niveles de desigualdad. Para algunos, la respuesta de los altos niveles de desigualdad en Colombia, estaría en la visión ortodoxa de que el crecimiento económico se encarga de resolver el problema de la pobreza y la desigualdad, tesis sobre la cual los indicadores han demostrado lo contrario (Revista Semana 2011).

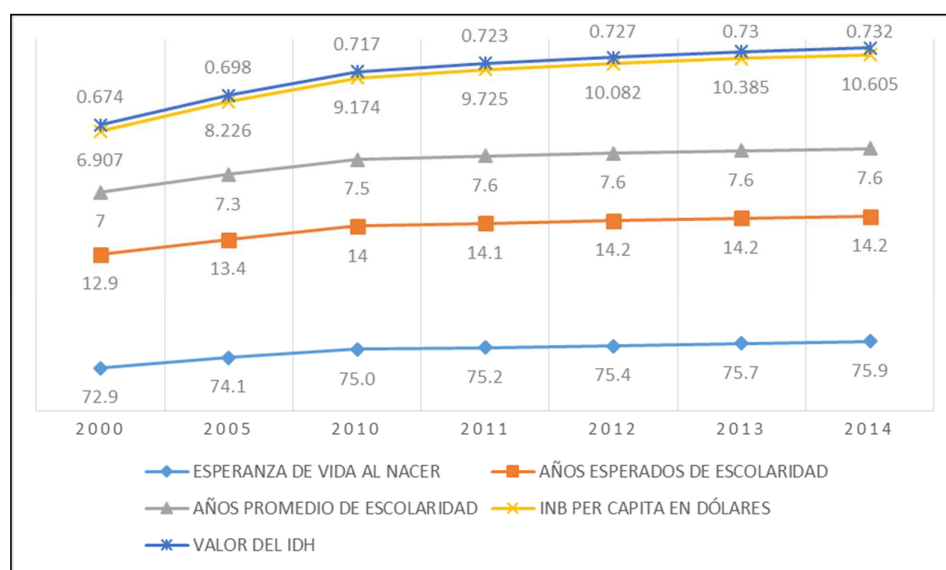
En palabras de Corredor, a pesar de que Colombia sigue siendo unos de los países más desiguales de América Latina, en los últimos años ha habido avances en este sentido derivados de una serie de elementos. Primero, el crecimiento económico, que aunque lentamente, ha alcanzado a permear a capas de la población con menos recursos (Corredor 2016). Segundo, sobre todo en el gobierno de Santos, ha habido un esfuerzo importante por la generación de empleo, ya que se ha procurado que el crecimiento económico no yaciera simplemente como mayores ingresos o utilidades para las empresas, sino que se vertiera o se viera reflejado en generación de empleo que produjera mayores ingresos para las familias (Corredor 2016). Y el tercer elemento radica en lo que muchos analistas presentan, y es que los programas asistencialistas han tenido -de todos modos- efectos positivos en la capacidad de ingreso de las familias, lo cual de alguna manera ha ayudado a amortiguar la desigualdad (Corredor 2016).

4. Análisis comparativo

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que evalúa el bienestar social, desde una perspectiva que no se limita solo a lo económico. Este indicador, que se viene aplicando desde hace 25 años, nació de la necesidad de demostrar la cara humana del desarrollo, así como también, desmitificar el hecho de que el crecimiento económico implica necesariamente desarrollo. En 2014, tanto Ecuador como Colombia, se encontraron dentro del grupo de 56 países con un desarrollo humano alto, ocupando el puesto 88 y 97 respectivamente. No obstante, ambos países se encuentran en el último tercio de los países de desarrollo humano alto, por debajo del promedio regional.

En el caso de Ecuador, un mayor acceso a salud y educación, así como el aumento de la inversión en estos sectores en los últimos años, ha permitido el crecimiento del IDH junto con la dotación de mejores condiciones de vida para la población. Se puede observar que la tasa de escolaridad así como el INB per cápita son los indicadores que más han contribuido para lograr estos avances en el IDH (fig.4.9). Asimismo, cabe resaltar que pese al alto impulso de los programas de inversión social de los últimos años -incluso mayor que en muchos países latinoamericanos- el IDH de 0,732 correspondiente a Ecuador en 2014 se encontró por debajo de la media de 0,744 perteneciente al grupo de países de desarrollo humano alto y por debajo de la media de 0,748 registrada por América Latina y el Caribe como región (PNUD 2015).

Figura 4.9. Tendencias del IDH en Ecuador 2000-2014



Fuente: PNUD.

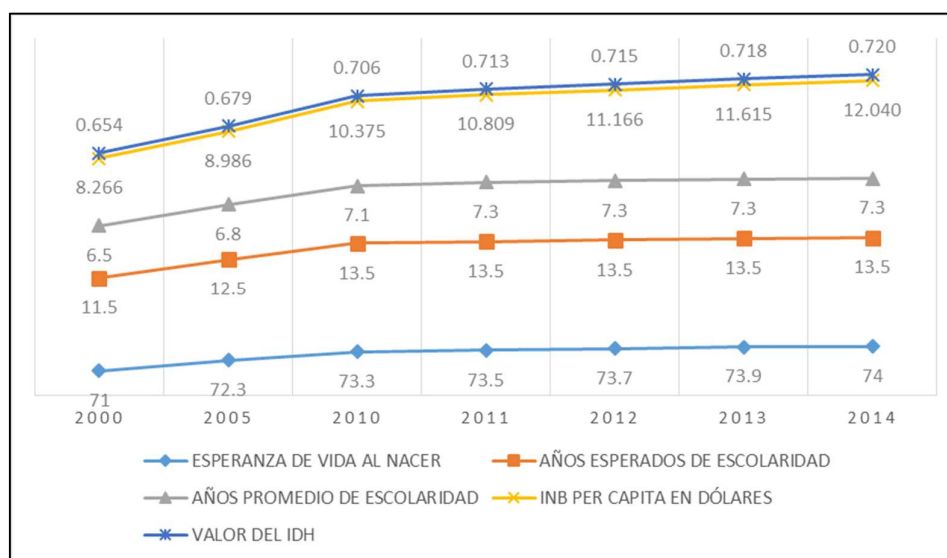
Examinando la situación más a fondo, a pesar de los últimos avances registrados en el IDH, el desarrollo humano en Ecuador sería más de corto que de largo plazo, considerando que éste estuvo sustentado en los flujos derivados del súper ciclo de los precios altos del petróleo, el mismo que desde 2011 se ha ido agotando. Para algunos, se torna crucial enfrentar la vulnerabilidad que trae consigo la crisis a través de políticas públicas que aseguren los logros y sostengan el progreso a largo plazo. Mientras que para otros, el problema de la sostenibilidad de los resultados en desarrollo radicaría en la dificultad para la ampliación de la cobertura, mas no en la garantía de servicios como salud y educación como se han venido dando en los últimos años. Esto debido a que como estipula la Constitución de 2008:

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes (Constitución del Ecuador 2008, 141).

No obstante, si los ingresos no permanentes, como las rentas del petróleo, no han contribuido a financiar el desarrollo social, ¿por qué desde 2014 con la coyuntura actual de recesión y del fin del boom de los commodities, el gasto público destinado al sector social no ha mostrado el ritmo de crecimiento de años anteriores, sino que más ha sufrido una contracción, pasando del 9.6% en 2013 al 8.8% en 2014 como porcentaje del PIB?

Por su parte, dentro de la región, Colombia es una de las naciones que presentan un menor IDH. El crecimiento de su IDH no ha presentado la misma velocidad que la tasa de crecimiento de Ecuador durante este período, siendo el INB per cápita el único componente que aventaja a este último, lo cual resulta lógico, si consideramos que la economía colombiana es cuatro veces más grande que la ecuatoriana (fig.4.10). Si bien, Colombia ha destinado un mayor porcentaje del PIB al gasto social entre el 2000 y el 2014, más del 10% anual, a diferencia de Ecuador que hasta la fecha no ha llegado a alcanzar o sobrepasar este porcentaje, los indicadores dan cuenta de que los flujos no están siendo utilizados de una manera efectiva. En este espacio de tiempo, la cobertura tanto en educación como en salud ha sido ampliada, no obstante el problema ha radicado en la calidad de estos servicios. Por tal razón, no se podría aseverar que Colombia no ha invertido recursos en su sector social, sino que el problema versaría en la calidad del gasto (Corredor 2016).

Figura 4.10. Tendencias del IDH en Colombia 2000-2014



Fuente: PNUD.

Los resultados de Colombia en el IDH, dan cuenta de que una política que disocia lo económico de lo social acarrea consigo graves consecuencias, por lo cual es imperativo un cambio radical en el enfoque y trascendencia que se le otorga a la política social. Asimismo, abordar el bienestar social, a través de subsidios dirigidos a un grupo de personas en situación de pobreza para sacarlo de esa condición, no altera la realidad en que viven millones de personas. En Colombia, el sector social no ha sido realmente una gran prioridad a lo largo de este período, un rasgo distintivo del modelo neoliberal. Lo más preocupante -quizás- es que si Colombia no trabaja por la reducción de las desigualdades, con cualquier acuerdo al que se llegue, la paz en este país no podrá ser sostenible.

También, el desempeño del crecimiento del IDH se encuentra acompañado por un creciente fenómeno de desigualdad en ambos países. Si el IDH de 2014 es ajustado por desigualdad, Ecuador pierde 4 posiciones, mientras que Colombia pierde 10 (PNUD 2015). Este factor es muy importante a considerar debido a que la desigualdad es una condición que reduce los avances en desarrollo humano, y que -incluso- puede llegar a detenerlo. En el caso de Colombia, a la desigualdad hay que sumarle el conflicto armado interno, que también -en buena parte- ha sido responsable de la baja tasa de progreso social. Varios de los flujos que bien podrían ser invertidos en sectores como salud y educación, son destinados al manejo del conflicto. Además, el conflicto en sí mismo produce altas tasas de pobreza, sobre todo, en las regiones donde se concentran los grupos armados, debido a la violencia y a la imposibilidad

que tiene el Estado para acceder a estas zonas y brindar servicios públicos como salud y educación.

En la actualidad, el reto en cuanto a la sostenibilidad y a una mayor y mejor proyección del IDH, no solo para Ecuador y Colombia, sino para América Latina en general, yace en la capacidad que tengan los gobiernos, ya sean progresistas o neoliberales, para sostener los resultados alcanzados a través de la institucionalidad de la política pública social. A pesar de que el boom de los commodities y sus generosas rentas haya llegado a su fin, particularmente para dos países con gran dependencia en el petróleo como Ecuador y Colombia, los avances en el sector social -en la medida en que se hayan dado- deben conservarse y apalancarse a través de la institucionalidad y un eficiente gasto público social.

Además, resulta inconcebible que la inversión en sectores tan trascendentales para el desarrollo, como salud y educación, se encuentren sujetos a externalidades del sistema y alberguen un carácter pro cíclico. Asimismo, sustentar el gasto social y el desarrollo con ingresos no permanentes como los derivados de la explotación de las materias primas, es una receta vetusta y que como la praxis ha demostrado, no arroja los resultados esperados. Lamentablemente, hasta el momento, ningún paradigma o modelo en Latinoamérica ha logrado alejarse o buscar realmente una alternativa o modelo diferente para alcanzar el desarrollo que no sea la práctica extractivista. Si algo resulta claro es, primero, que no podemos combatir el extractivismo con más extractivismo, y segundo que el extractivismo no es una receta que conlleve necesariamente al desarrollo y bienestar social.

Conclusiones

Resulta incuestionable el efecto que tuvo el boom de las materias primas en los niveles de bienestar social que tanto Ecuador como Colombia llegaron a alcanzar en el último período. Las rentas derivadas del súper ciclo de los commodities, que se tradujeron en un importante crecimiento económico no solo para estos dos países, sino para América Latina en su conjunto, han contribuido a las mejoras, sobre todo en tema de cobertura, de sectores vitales para el desarrollo como salud y educación. Asimismo, se ha podido observar como una mejor redistribución del ingreso, a través de programas como los PTC, han ayudado a aliviar un rasgo distintivo de estas sociedades: la desigualdad. No obstante, los avances y los montos del gasto público social de este período no llegaron a alcanzar los niveles que se podrían haber

esperado si se los compara con el flujo de recursos extraordinarios que estos países percibieron.

Por su parte, al examinar el sector social, de dos países con modelos de desarrollo supuestamente diferentes -el progresismo y el neoliberalismo- podemos advertir tanto semejanzas como diferencias. En cuanto a las semejanzas, encontramos como la renta extractiva viene a sustentar gran parte del gasto público social en ambos tipos de paradigmas. Si bien en el caso progresista, a través de su discurso, se legitima la explotación y depredación de la naturaleza con miras a mejorar el bienestar social, lo cierto es que termina causando los mismos problemas sociales y medioambientales que sus antecesores neoliberales. Tanto progresistas como neoliberales catalogan a la naturaleza como un bien transable, en donde las rentas -entre uno y otro- tienen fines similares.

Asimismo, se puede constatar como el progresismo a pesar de pronunciarse como un modelo rupturista con las posturas neoliberales, además de la extracción de recursos naturales, ha continuado con varias políticas de su contrario como es el caso de los PTC. Pese a las consideraciones en torno a lo beneficiosos que pueden resultar este tipo de programas en cuanto a la lucha de la pobreza, tanto el BDH como Más Familias en Acción, en Ecuador y Colombia respectivamente, necesitan estar mejor focalizados y aplicar metodologías para realizar un seguimiento apropiado con el fin de constatar si los beneficiarios de estas transferencias, las utilizan acorde al objetivo, así como brindar cobertura a todos los que las requieran.

Por otro lado, si bien entre 2000 y 2014 el gasto público como porcentaje del PIB de ambos países ha aumentado en sectores como salud y educación, la variación porcentual no ha sido significativa, además de que se tiende a cuestionar la calidad de este gasto. Esto se puede ver reflejado en el nivel de desigualdad que persiste en Ecuador y Colombia. En el primer caso, pese a que la desigualdad ha presentado una reducción significativa, aún continúa perfilándose como un fenómeno que aqueja a la sociedad en su conjunto. Mientras que en Colombia, la desigualdad constituye un problema mucho más serio, que aparte del conflicto interno, le resta posibilidades para una más rápida y mejor proyección para su desarrollo.

En cuanto a los contrastes, a diferencia de Colombia, Ecuador ha experimentado una mejoría en sectores como salud y educación a partir de la implantación del progresismo en 2007, si se lo compara con años anteriores cuando se encontraba gobernado bajo el modelo neoliberal. No obstante, es importante resaltar que el ascenso del progresismo coincidió de manera perfecta con el boom de las materias primas. Hecho que no es menor, debido a que el súper ciclo de los precios altos del petróleo, proveyeron al Estado progresista de cuantiosas rentas para sustentar su proyecto político. A pesar de que el gobierno progresista ecuatoriano ha contado con la mayor riqueza de la historia de este país, los avances en materia social no corresponden al nivel que podría haberse esperado, considerando la magnitud de esos flujos económicos.

Por su parte, Colombia bajo el mandato de Uribe y Santos ha sufrido una profundización del neoliberalismo. Tanto la vida pública como privada, ha girado alrededor de una particularidad, el conflicto interno. La política de la seguridad democrática ha sido la directriz de la agenda de los gobiernos neoliberales de este período, así como el fuerte énfasis en la apertura económica, deviniendo de esta manera el sector social como su variable de ajuste. Es por esta razón que el desempeño social de Colombia ha sido muy pobre durante esta coyuntura, además de que factores que imposibilitan el desarrollo como la desigualdad se han visto incrementados de sobre manera.

En suma, se puede constatar que no existe una verdadera ruptura entre el neoliberalismo y el progresismo latinoamericano, una de las pocas diferencias se ha encontrado en la parte discursiva, en el papel del Estado y en el prioridad que se le ha adjudicado al sector social, más en la praxis un modelo no dista mucho del otro. El paradigma progresista que se perfilaba como una contra propuesta al modelo neoliberal que sumió a la región en una crisis tanto económica como social, al igual que éste ha pasado a ser una fase más del sistema capitalista.

Únicamente, se puede hablar de ruptura, cuando un paradigma conlleva a una verdadera transformación política, económica y social. Es momento de que América Latina deje de lado su marcada dependencia en las materias primas, canalizada a través del extractivismo, para dar paso a procesos productivos que otorguen mejores niveles de bienestar social a su población, pero sobre todo, que sean anti cíclicos y que puedan ser sostenibles en el tiempo.

Capítulo 5

Conclusiones

El capitalismo vive a expensas de economías coloniales; vive, más exactamente de su ruina. Y si para acumular tiene absoluta necesidad de ellas, es porque éstas le ofrecen la tierra nutritiva a expensas de la cual se cumple la acumulación.

-Rosa Luxemburgo

Con el fin de alcanzar el objetivo central de esta investigación: analizar la relación existente entre la práctica neoextractivista y los indicadores socioeconómicos de Ecuador y Colombia en el período 2000-2014, esta investigación empleó los debates del neoextractivismo, los distintos modelos de desarrollo latinoamericanos emprendidos por las diferentes tendencias políticas-ideológicas y su vínculo con la política social, así como el contexto político y económico internacional, para poder comprender la intensificación y consolidación de la práctica extractivista en América Latina a partir de la última década.

Con la llegada del siglo XXI, en varios países latinoamericanos emergió una tendencia política para hacer contrapartida al neoliberalismo: el progresismo. Actualmente, ambos paradigmas coexisten en la región y han optado por el neoextractivismo como su principal fuente de ingresos y motor económico. A pesar de que se ha encontrado que los indicadores sociales, en varios países de la región, presentaron un importante repunte durante el pasado período de prosperidad económica derivadas de las generosas rentas producto de las actividades extractivas; desde 2014 la sostenibilidad de estos resultados se ha tornado incierta.

En América Latina, tanto los gobiernos progresistas como neoliberales ha empleado un mismo mecanismo para generar rentas que nutran sus presupuestos estatales, el neoextractivismo. La práctica neoextractivista, ampliamente consolidada a lo largo de la región, al margen de la tendencia política-ideológica y del modelo de desarrollo de los distintos gobiernos latinoamericanos, tomó un impulso especial en la última década gracias al súper ciclo del precio de los commodities a nivel mundial. Este hecho, no solo ha incentivado el extractivismo, sino que incluso lo ha profundizado. En esta investigación se ha ratificado que esta característica implantada en Latinoamérica hace más de 500 años con la conquista, nunca se ha visto desvanecida dentro de los distintos modelos latinoamericanos de desarrollo, a pesar de los esfuerzos y de la promoción de una serie de estrategias por parte de sus gobiernos.

A pesar de las problemáticas medioambientales y sociales que tal práctica conlleva, con el objetivo de legitimar y justificar el neoextractivismo, los gobiernos progresistas y neoliberales han empleado el discurso como una estrategia de articulación política y social para producir consenso popular entorno a esta práctica. Es así como ambos tipos de gobiernos han coincidido en que las rentas extractivas, y más en un contexto de revalorización de las materias primas, son indispensables para poder financiar su agenda de desarrollo y de esta manera aliviar la pobreza y las desigualdades (Dávalos 2013, 190). Si bien el extractivismo es una práctica antigua, lo novedoso de la misma estaría en que ha sido adoptada y profundizada precisamente por gobiernos que se han autodenominado de izquierda, como los gobiernos progresistas.

Cabe resaltar, que el discurso progresista ha tratado de diferenciarse del neoliberal, al afirmar que ahora el papel principal lo tiene el Estado, ya que éste ha logrado recobrar su soberanía, al recuperar las rentas extractivas de las manos de las empresas transnacionales. Por su parte, si bien la práctica extractivista siempre ha sido el eje primordial del modelo de desarrollo de los gobiernos neoliberales latinoamericanos, estos han empezado a moderar su discurso articulándolo con problemas de la agenda global, y utilizando conceptos como el de “desarrollo sostenible” (Svampa 2012). No obstante, el discurso neoliberal continua defendiendo la idea de un Estado subordinado al mercado y, especialmente, a las instancias de regulación supranacionales (Svampa 2012).

Con esta investigación se ha mostrado que el espectacular crecimiento económico que países como Ecuador y Colombia, experimentaron dentro del contexto de precios altos de materias primas, yace en la exportación de commodities como el petróleo. Por lo cual no resulta extraño, que este crecimiento económico haya seguido el comportamiento de las ganancias derivadas de las exportaciones de este tipo de bienes. Esto debido a que la última década fue una coyuntura favorable para los países con modelos económicos fundamentalmente extractivistas. Sin embargo, a pesar del significativo éxito exportador de estos países, se ha observado que sus economías se han tornado más vulnerables ya que la composición de sus exportaciones es mayoritariamente primaria, es decir, de productos cuyas condiciones de producción son inestables y cuyos precios son muy volátiles dentro de los mercados internacionales.

Asimismo, se ha identificado que una característica compartida por ambas economías es que cuentan con estructuras productivas débiles, poco articuladas y altamente dependientes de un solo bien exportable: el petróleo. Este hecho los perjudica de sobre manera ante shocks externos, además de que resta sus posibilidades de crecimiento a largo plazo ya que la marcada dependencia en un solo producto, y que además es un commodity, desencadena problemas en otros sectores económicos. Es por ellos, que las ganancias del auge de los altos precios del petróleo no se han podido traducir en una mayor fortaleza productiva ni en un sistema económico dinámico, por lo cual estos países son altamente vulnerables tanto en su estructura productiva como en el sector externo.

También se ha constatado que la evolución de las exportaciones de Ecuador y Colombia durante este período demuestra que las condiciones externas les resultaron favorables, dado el incremento de la demanda externa de materias primas. Si bien el porcentaje de productos básicos que componen las exportaciones ecuatorianas, se ha mantenido alto pero estable; en el caso de Colombia, este porcentaje ha aumentado de manera significativa a partir de la segunda mitad de este espacio de tiempo. Este hecho devela uno de los efectos más nocivos del neoextractivismo: un retroceso en la industria colombiana y una tendencia a la reprimarización y desindustrialización.

Es así como el extractivismo apoyado en el boom de los commodities ha resultado en “un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas con escaso valor agregado” (Svampa 2013, 32). Este hecho ratifica la marcada dependencia que ambos países mantienen en las exportaciones de productos primarios, y cuyas economías se encuentran subordinadas a los designios de grandes grupos económicos hegemónicos y de poderosas fuerzas imperialistas que rigen y configuran las pautas de la economía mundial (Dos Santos 2002, 5).

Asimismo, esta situación corrobora las premisas de Sunkel, Furtado y Cardoso en cuanto a que la dependencia consiste en la “desintegración nacional” en tanto que los “conglomerados transnacionales” se posicionan dentro de las economías nacionales repercutiendo en “patrones dependientes de consumo” y dando como resultado un “desarrollo dependiente asociado” (Kay 1991, 110-111). Se debe señalar que aunque los países opten por replantear las condiciones de las relaciones de intercambio, en tanto que sus salidas independientes

mantengan el modelo extractivista, vuelven a caer en la lógica destructiva de la dependencia (Prada 2014, 59).

Cabe resaltar que ninguno de los dos países ha logrado consolidar un cambio en su matriz productiva durante este período. Se ha determinado que indistintamente de la inclinación política-ideológica, ya sea de corte progresista o neoliberal, la necesidad de una transformación del sistema productivo ha sido un tópico de esencial importancia en todos los países de la región. No obstante, el fortalecimiento y enraizamiento de la lógica primario-exportadora dentro de los modelos económicos latinoamericanos ha sido una de las razones substanciales para que dicho cambio no se haya dado hasta el momento. El modelo extractivista como Prada lo señala: “forma parte integrante de la economía-mundo capitalista, de la división del trabajo internacional, de la articulación de flujos y stock en las redes de los mercados, en la articulación de un consumo productivo dado a escala mundial”, lo cual ha imposibilitado que los países exportadores de este tipo de bienes puedan arrancar un proyecto de industrialización de materias primas desde el modelo extractivista (Prada 2014, 57-59).

En el caso de Ecuador, el gobierno progresista de Rafael Correa ha sido el gobierno que más tiempo ha estado en funciones, que más dinero ha percibido en toda la historia del país, que contó con un marco jurídico constitucional propicio para el cambio, y que ostentó un amplio respaldo popular; pero que, sin embargo, desperdició toda una década para implementar medidas efectivas que dieran como resultado una verdadera transformación y dinamismo productivo.

En cuanto a Colombia y la transformación productiva, se puede observar, como anteriormente se señaló, un fuerte proceso de desindustrialización y reprimarización durante este período. Las políticas del Estado neoliberal colombiano lejos de apoyar e impulsar a los sectores productivos, se han direccionado a la promoción de las políticas de los organismos de regulación supranacionales, a los que tradicionalmente se ha visto subordinado. Cabe señalar que las políticas de este tipo de organismos se encuentran enfocadas en el fortalecimiento de la inversión extranjera en sectores primarios o extractivos. También, la estrategia colombiana de firmar una serie de acuerdos comerciales con potencias económicas como la Unión Europea y Estados Unidos, han perjudicado el desarrollo de varios de los sectores productivos colombianos.

Se ha confirmado, que al igual que América Latina en su conjunto, Ecuador y Colombia, se beneficiaron ampliamente del súper ciclo de los precios altos de los commodities. Empero, para resguardar los frutos derivados de este ambiente económico favorable, era indispensable la adopción de un conjunto de políticas y estrategias que permitieran un mejor margen de maniobra ante un posible shock externo, como la recesión por la cual actualmente estamos atravesando. Esta previsión era especialmente importante para los países exportadores de bienes minero-energéticos, como Ecuador y Colombia, ya que los países especializados en la exportación de estos productos se encuentran expuestos, en mayor medida, a las consecuencias negativas de una recesión económica mundial.

Si bien toda la región será afectada por la recesión, los países que han desarrollado una eficiente política económica, ahorrando parte de los recursos arrojados por el boom de los commodities, se encontrarán en una mejor posición para sostener su economía durante esta parte de declive del ciclo. Este hecho se sustenta en que los países que fueron más prudentes en la fase de auge, evitando el deterioro de su posición fiscal y externa, presentarán una mejor trayectoria económica durante la fase de caída. En el caso ecuatoriano y colombiano, la crisis tendrá un impacto significativo en sus economías, ya que sus gobiernos no lograron establecer mecanismos efectivos de ahorro de los ingresos extraordinarios de las exportaciones petroleras

Un factor determinante para el debilitamiento de ambas economías ha sido la reciente y pavorosa caída de los precios del petróleo. El desplome del precio de este commodity ha sido producto de una serie de variables como: el exceso de oferta, una demanda débil inherente a la desaceleración de las economías emergentes, la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener la producción de 30 millones de barriles diarios, factores geopolíticos y la apreciación del dólar (CEPAL 2015). Desde 2014, este hecho ha repercutido de sobre manera en las economías de los países exportadores de hidrocarburos.

Para Ecuador, la situación se vuelve mucho más adversa debido a la falta de una política monetaria y cambiaria, que junto a la apreciación del dólar, encarece sus exportaciones. En consecuencia, Ecuador se ha visto obligado a la implementación de salvaguardias arancelarias, que si bien pueden constituir una de sus únicas opciones para disminuir el impacto económico en su balanza comercial; esta medida ha sido adoptada de manera no planificada y sin una estrategia clara para favorecer su industria. Por su parte, Colombia, que

a diferencia de Ecuador, cuenta con una política monetaria y cambiaria, ha buscado recuperar competitividad dentro de los mercados internacionales, mediante la devaluación de su moneda, llegándola a devaluar hasta en un 60%.

En suma, en materia económica, tanto el gobierno progresista de Ecuador como el neoliberal de Colombia no han presentado grandes diferencias. A pesar de que en Ecuador, el Estado ha logrado una participación más activa dentro del campo económico, recuperando parte de la renta extractiva de las manos de los entes transnacionales, el progresismo no ha buscado un verdadero dinamismo económico. Sino que al contrario, ha continuado con la dependencia primario-exportadora, presente en épocas neoliberales del cual es un ferviente detractor. Esto viene a corroborar, como varios de los gobiernos progresistas de la región, como en el caso ecuatoriano, se han alejado del espíritu de la izquierda clásica con sus estrategias de desarrollo, particularmente con el empleo y profundización de prácticas como el neoextractivismo, al mantener estructuras productivas primarizadas, asentadas sobre enclaves de exportación subordinadas al comercio y la inversión internacional (Gudynas 2010, 155).

Por su parte, a pesar haber venir perfilándose como una economía emergente, se ha podido constatar que en Colombia, la dependencia en los bienes primarios se ha consolidado de manera significativa en los últimos años. Esta situación ha colocado a su economía nuevamente en un régimen primario exportador, quebrantando de esta manera sus logros en el sector industrial. Esto demuestra como la reprimarización de las industrias latinoamericanas se ha producido, inclusive, en países con economías emergentes, donde la reprimarización podría traer consigo serias consecuencias como una desindustrialización temprana (Lander 2014, 6).

En cuanto a la política social en América Latina, se puede observar que la política promovida por los gobiernos progresistas, al igual que su manejo económico, es similar a la empleada por los gobiernos neoliberales. Aunque comparten grandes similitudes en el aspecto social a nivel pragmático, ambos paradigmas, progresismo y neoliberalismo, también presentan algunas diferencias. No obstante, se debe destacar que en los países con ambos modelos han existido grandes avances en el sector social a través de la implementación de programas sociales como los PTC durante este período.

En los países con gobiernos progresistas, principalmente, el gasto público social ha crecido de manera sustancial, y en casos como el de Ecuador, se ha podido observar inclusive, una disminución de las desigualdades. Este hecho se ve sustentado, como bien expone Gudynas, en que los programas sociales implementados por los gobiernos progresistas de la región, en general, han sido muy exitosos en reducir la pobreza, y en algunos casos incluso la desigualdad (Gudynas 2010, 157). No obstante, no se puede olvidar el hecho de que varios de los programas sociales que ha implementado el progresismo, han consistido en una adecuación y prolongación de los programas sociales neoliberales precedentes. En la Colombia neoliberal actual, al igual que en los países progresistas, se ha dado un reacomodo y reconfiguración de los programas sociales anteriores de acuerdo a las nuevas exigencias y necesidades coyunturales.

Entre las similitudes entre ambos modelos (tab.5.1), tanto progresistas como neoliberales han catalogado a la naturaleza como un bien transable, donde las rentas extractivas juegan un papel importante dentro de su agenda social. En ambos paradigmas, las rentas extractivas han sido imprescindibles para sustentar gran parte del gasto público social. Aunque, si bien en el caso progresista, a través de su discurso, se legitima la explotación y depredación de la naturaleza con miras a mejorar el bienestar social, lo cierto es que termina causando los mismos problemas sociales y medioambientales que sus antecesores neoliberales.

También, a pesar de que el progresismo se pronuncie como un modelo rupturista con las nefastas posturas neoliberales, además de la extracción de bienes primarios, ha continuado con varias políticas promovidas por este modelo como es el caso de los PTC. Pese a las consideraciones en torno a lo beneficiosos que pueden resultar este tipo de programas para contrarrestar las desigualdades, tanto el BDH como Más Familias en Acción, en Ecuador y Colombia respectivamente, necesitan estar mejor focalizados y aplicar metodologías para realizar un seguimiento apropiado con el fin de constatar si los beneficiarios de estas transferencias, las utilizan acorde al objetivo, así como brindar cobertura a todos los que las requieren.

Por otro lado, si bien entre 2000 y 2014 el gasto público como porcentaje del PIB de ambos países, con paradigmas distintos, se ha incrementado en sectores como salud y educación, la variación porcentual no ha sido significativa, además de que se tiende a cuestionar la calidad de este gasto. Tal hecho se ve reflejado en el nivel de desigualdad que persiste en Ecuador y Colombia. En el primer caso, pese a que la desigualdad ha presentado una reducción

significativa, aún continúa perfilándose como un fenómeno que aqueja a la sociedad en su conjunto. Mientras que en Colombia, la desigualdad constituye un problema mucho más serio puesto que se encuentra dentro de los rankings más altos de América Latina. Esta característica, además del conflicto interno, le resta posibilidades para una más rápida y mejor proyección para su desarrollo.

Tabla 5.1. Similitudes en el área económica y social entre el paradigma neoliberal y progresista latinoamericano

Similitudes entre el Neoliberalismo y el Progresismo Latinoamericano	
Económico	Uso del discurso como una estrategia de articulación política y social para producir consenso popular entorno al extractivismo.
	Creencia de que las rentas extractivas, y más en un contexto de revalorización de las materias primas, son indispensables para poder financiar su agenda de desarrollo y de esta manera aliviar la pobreza y las desigualdades.
	Economías con estructuras productivas débiles y poco articuladas
	Las condiciones externas les resultaron favorables dado el incremento de la demanda externa de materias primas.
	Tendencia a la reprimerización y desindustrialización.
	No existe una transformación productiva.
	Fuerte dependencia primario-exportadora.
	Estructuras productivas asentadas sobre enclaves de exportación subordinadas al comercio y la inversión internacional.
Fases del sistema capitalista.	
Social	Importantes avances en el sector social durante este período.
	Implementación de programas sociales como los PTC.
	Reacomodo y reconfiguración de los programas sociales anteriores de acuerdo a las nuevas exigencias y necesidades coyunturales.
	Catalogación de la naturaleza como un bien transable donde las rentas extractivas juegan un papel importante dentro de su agenda social.
	Las rentas extractivas han sido imprescindibles para sustentar gran parte del gasto público social.
	Continuidad y profundización de problemas sociales y medioambientales.
	El gasto público como porcentaje del PIB de ambos países se ha incrementado en sectores como salud y educación en el transcurso de este período.
	Se cuestiona la calidad del gasto público social.
Los avances en materia social no han correspondido al nivel que podría haberse esperado dado los recursos derivados del auge de las materias primas.	

Respecto a las diferencias (tab.5.2), Ecuador ha experimentado una mejora en sectores como salud y educación a partir de la implantación del progresismo en 2007, si se lo compara con años anteriores cuando se encontraba gobernado bajo el modelo neoliberal. Sin embargo, es importante señalar que la emergencia del progresismo en este país coincidió de manera perfecta con el boom de los commodities. Un antecedente que no es de menor importancia, debido a que el súper ciclo de los precios altos del petróleo, proveyeron al Estado progresista de cuantiosas rentas para sustentar su proyecto político y social. No obstante, a pesar de que el gobierno progresista ecuatoriano ha contado con la mayor riqueza de la historia de este país, los avances en materia social no corresponden a la magnitud de los cuantiosos flujos económicos que recibió durante el boom.

Por su parte, Colombia bajo el mandato de Uribe y Santos ha sufrido una profundización del neoliberalismo. Tanto la vida pública y privada, han girado alrededor de una particularidad, el conflicto interno. La política de la seguridad democrática ha sido la directriz de la agenda de los gobiernos neoliberales de este período, así como el énfasis en la apertura de su economía, dejando de esta manera al sector social como su variable de ajuste. Por tal razón, las mejorías en el bienestar social colombiano han tenido un desempeño muy pobre durante esta coyuntura, además que factores que imposibilitan el desarrollo como la desigualdad se han visto incrementados de manera exponencial.

Tabla 5.2. Diferencias en el área económica y social entre el modelo neoliberal y progresista latinoamericano

	Neoliberalismo	Progresismo
Diferencias	Han empezado a moderar su discurso articulándolo con problemas de la agenda global y utilizando conceptos como el de “desarrollo sostenible”.	Fuerte discurso contestatario al status quo y al neoliberalismo.
	Su discurso continua defendiendo la idea de un Estado subordinado al mercado y, especialmente, a las instancias de regulación supranacionales.	El papel principal lo tiene el Estado, éste ha logrado recobrar su soberanía, al recuperar las rentas extractivas de las manos de las empresas trasnacionales.
	Promoción de las políticas de los organismos de regulación supranacionales.	Sus programas sociales, en general, han sido muy exitosos en reducir la pobreza, y en algunos casos incluso la desigualdad.
	Sector social como variable de ajuste.	Alto enfoque en el sector social.

Resumiendo, se puede constatar que no ha existido una verdadera ruptura entre el neoliberalismo y el progresismo latinoamericano. Entre las pocas diferencias de estos dos modelos se encuentra el discurso, el rol del Estado y la prioridad que se le ha adjudicado al sector social, más en la praxis un paradigma no dista mucho del otro. El progresismo, tendencia que se perfilaba como una contra propuesta al modelo neoliberal, que sumió a toda la región en una crisis tanto económica como social, al igual que éste ha pasado a ser una fase más del sistema capitalista, el mismo que no puede funcionar sino a expensas de la explotación extractiva de las economías periféricas. Sin extractivismo, no puede haber capitalismo.

Cabe recordar que únicamente se puede hablar de ruptura cuando un paradigma conlleva a una verdadera transformación política, económica y social. Es imprescindible que Latinoamérica supere su profunda dependencia en las materias primas, canalizada a través del extractivismo, para así poder desarrollar procesos productivos que otorguen mayores niveles de bienestar a su población, pero sobre todo, que sean anticíclicas y que puedan ser

sostenibles en el tiempo. Esto se torna imperativo puesto que en un escenario como el de la actualidad, donde una vez que el momento cíclico del auge ha llegado a su fin y comienzan a avizorarse los primeros signos de recesión en la región, la sostenibilidad de los resultados obtenidos en el pasado reciente en el campo económico y social, se torna incierta y con grandes posibilidades de sufrir retrocesos.

Apéndices o anexos

Entrevistas

Fecha: 2 de junio 2016

Entrevistado: José Mieles

1. ¿Qué diferencias encuentra entre el gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron en la década de los noventa en términos socioeconómicos?

Primero, en términos económicos se llama las dos décadas perdidas de los ochenta y los noventa. Se dieron crecimientos económicos moderados donde las materias primas tuvieron más bien una caída en su precio y si somos países que exportamos petróleo, básicamente no hubo tantos recursos como los que hubo en la década de los 2000. A parte de eso hubo devaluaciones, hubo una crisis financiera a finales de los noventa, y esa crisis financiera en el Ecuador coincidió con crisis en los países asiáticos a finales de los noventa y con crisis en otros países de la región. Entonces, la situación era más complicada no teníamos acceso a créditos internacionales como lo tenemos ahora, no teníamos el socio estratégico que tenemos ahora que es China, entonces si fue cambiando en términos económicos la situación que vivió Ecuador en los noventa con la situación que vivimos actualmente. Primero, al darse la dolarización en 2000 hubo una estabilidad de precios, hubo una estabilidad de salarios que al subir los precios, el salario real caía en décadas pasadas, hubo una mayor estabilidad en ese sentido. Aparte de eso, se vio una situación que no se había visto antes que fue el repunte del precio de los commodities que es lo que principalmente exportamos, y aparte de eso también se dio un fenómeno que se está revirtiendo ahora últimamente que es una devaluación del dólar. Entonces al devaluarse el dólar y no ser nuestra moneda nos beneficiaba porque éramos más competitivos que otros países para vender por ejemplo a Europa. Y ese es uno de nuestros problemas de los cuales ahora se queja el gobierno, que se aprecia el dólar, que perdemos competitividad y que caen las materias primas. Pero durante el 2000 y el 2014 tenemos una situación de bonanza se puede decir, tuvimos otro boom petrolero como se podría definir al boom petrolero de los setenta por ejemplo.

2. ¿Qué cambios en la política social de su país puede advertir en los últimos años?

En la parte de los indicadores sociales me parece que en la primera parte entre 2000 y 2007 cayeron un montón, o sea pobreza. Hubo una recuperación de indicadores sociales donde el gobierno actual también ha tenido varios programas que ha permitido mantener esto pero que por el problema que vivimos ahora, la recesión, se podrían ver afectados estos indicadores sociales porque todo lo que se ha avanzado estos años podría revertirse si es que el modelo no tiene resultados que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, si bien hemos avanzado a menor ritmo del que avanzamos en la primera década de los años 2000 en esta segunda década hemos avanzado a un ritmo menor, y se puede provocar que debido a la crisis económica que se sufre actualmente se pueda volver a las cifras que teníamos cuando empezó este gobierno 2006-2007.

3. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de Transferencias Condicionadas (BDH)?

El BDH no es una cosa que se inventó ahora, es una cosa que se inventó a raíz de la crisis del 99. Las transferencias condicionadas lo que buscan es que se cumpla la condición. Hay muchas personas, yo soy una de ellas, que defiende las transferencias condicionadas porque cumplen el objetivo para el cual están hechas. Creo que es una medida que se mantuvo del modelo neoliberal porque daba resultado. El problema es que exige mucho control, entonces el objetivo del BDH es darles a estas personas un incentivo para que sus hijos vayan a la escuela, para que los matriculen, para que suban las tasas de escolaridad, que si han subido. Pero a su vez en estas transferencias condicionadas, el número de personas que acceden a ellas tienen que salir y entrar otras, por lo cual el objetivo de que la base de personas que recibe el bono vaya cayendo, no ha sucedido. Entonces, si bien es una política que en papeles es buena porque cumple el objetivo de que la gente meta a sus hijos a la escuela y que aunque decían que ese dinero se gastaba en cualquier cosa, a la final no importa porque la condición que nosotros estamos poniendo para dar esas transferencias se estaba cumpliendo. Entonces subíamos las tasas de escolaridad, iban los niños a ponerse la vacunas eso reducía el monto que por ejemplo los gobiernos tienen que destinar a salud pública y demás. Pero si debe haber un mayor control para que primero las personas que reciben el bono sean las personas que en verdad lo necesitan, y segundo que las personas que lo reciben cumplan con las condiciones, porque si ya no cumplen con las condiciones están recibiendo plata a costa del Estado, y no se estaría cumpliendo ninguno de los dos objetivos. Si bien es una buena política, tiene que haber control detrás de la política.

4. ¿Considera que ha disminuido la brecha de las desigualdades sociales en la última década? ¿Qué factores han incidido?

Las brechas de pobreza se pueden reducir por varios factores. Primero, hubo estabilidad económica. Segundo hubo dinero, hubo un boom petrolero que nos benefició y hubo recursos para atender varias necesidades. En los primeros años de la década con un modelo diferente al que tenemos ahora igual hubo recursos, igual hubo estabilidad de precios e igual hubo estabilidad de salarios. Hay un estudio que dice que la clase media del Ecuador creció muchísimo más que en décadas pasadas por este boom de los commodities, entonces primeramente por eso. Y segundo, el nuevo modelo que vemos que ya está desgastado y que parece que no tuvo tan buenos resultados, donde el gobierno jugó un papel protagónico dentro de la economía, hubo mucha contratación pública y empresas privadas dependían también de lo público. Entonces se generaba esta dependencia tan solo a lo público. Entonces hubo recursos, hubo gente que tuvo trabajo por bastante tiempo, hubo empresas que dependían del sector público ya que hacían consultorías, asesorías, daban servicios, bienes al sector público entonces eso también ayudó a que haya un dinamismo en la economía impulsado por el sector público que generó riqueza. Aunque cabe recordar que si bien un país puede generar riqueza, ésta se puede distribuir mal. Esta riqueza ayudó a que los indicadores sociales también mejoren. Ayudó a que mucha gente pase a la clase media y que los de clase media también mejoren. El impacto fue sobre toda la

economía. Si hay bonanza, si hay recursos, todos los sectores económicos se van a ver beneficiados, todas las clases sociales, unas más que otras pero va haber beneficio, se cierran las brechas.

5. ¿Cree que la situación de los sectores más vulnerables ha mejorado substancialmente en la última década? ¿Ha existido un crecimiento pro pobre o pro rico?

Parece ser que el Ecuador que nos vendieron durante estos 10 últimos años sobre todo, ante shocks externos, ante caída del precio del petróleo, ante un desastre natural, estamos viendo que el modelo está desgastado y que los recursos que teníamos antes no los tenemos. Entonces por ejemplo lo interesante sería ver desde que comienza a caer el precio del petróleo como comienzan a ponerse en rojo las cuentas fiscales, ya no tenemos tanto crédito de China puedes ver cómo evolucionan varios indicadores. Por ejemplo, en los indicadores sociales, si bien no son estadísticamente significativas las diferencias en pobreza, ya no cae la pobreza. Entonces puede ser que el próximo trimestre suba la pobreza, ¿hasta que niveles va a subir? Hay que ver que niveles tenía en 2007 por ejemplo el desempleo, el subempleo, el empleo inadecuado. Los indicadores de empleo son la base fundamental para que la gente cierre las brechas de desigualdad social. Porque si no tienes empleo o si antes tenías un empleo adecuado y ahora estás subempleado, obviamente vas a tender a deteriorar tu situación económica y eso va hacer que las brechas tal vez regresen a los niveles de 2006 o tal vez regresen a niveles de años anteriores y entonces este modelo económico que se le llamó el milagro ecuatoriano no ha sido un milagro porque no fue sostenible en el tiempo. Entonces, yo creo que mediante este modelo económico cuando se quita la bomba que era los ingresos de los petrodólares y el gobierno se queda sin recursos, el sector privado también se acomodó, entonces ahora se pide que el sector privado sea más productivo pero siempre estuvo dependiendo del sector público. Entonces se generó esta situación de que el gasto público era el motor de la economía y cuando este comienza a contraerse, la economía va a tener este enfriamiento o esta recesión que estamos viviendo.

6. Con la crisis, además de la caída en los precios de los commodities como el petróleo ¿su gobierno tiene la capacidad de mantener los resultados obtenidos en el campo social en los últimos años?

Constitucionalmente el gobierno tiene que destinar cada año un porcentaje de su presupuesto. Se tiene que cumplir un porcentaje, por ejemplo el 5%, se tiene que destinar a salud. Eso es una norma que está pero que a la final va a cumplirse en medida de que el gobierno tenga recursos. Si es que por ejemplo se sigue apreciando el dólar, nuestras exportaciones siguen cayendo, sigue poniendo el gobierno trabas porque se suponía que por ejemplo las salvaguardias iban a tener la duración de un año y ahora tienen una duración más larga, esto también impide que el sector productivo privado surja, invierta más, tenga más dinamismo. Entonces obviamente va a haber menos recursos en la economía y los programas sociales no van a tener los mismos recursos que tuvieron en años de bonanza. Si en años de bonanza los resultados fueron

moderados, en años que no tenemos recursos los resultados van a empezar a deteriorarse.

7. Entonces, ¿cree que los avances en el campo social se encuentran intrínsecamente relacionados con el desempeño económico de su país?

Creo que si hay crecimiento económico esto no implica que los indicadores sociales mejoren, pero si es una condición necesaria para que se incrementen. Esto debido a que históricamente, Latinoamérica ha sido una región muy desigual y puede pasar como por ejemplo en China donde tuvieron crecimientos muy grandes pero que la distribución de la riqueza se la llevaron pocas personas. Pero si es una condición necesaria para que haya mejora en los indicadores sociales, que exista crecimiento económico.

8. ¿De qué otros medios si no son los flujos monetarios de los commodities, puede el gobierno de su país mantener los programas sociales promovidos y consolidar otros nuevos?

Yo creo que lo fundamental en los proyectos sociales es que haya institucionalidad. Si hay institucionalidad, aunque los recursos se vean reducidos, puede haber una mejor focalización y se puede manejar eficientemente esos recursos para que los programas sociales y los indicadores sociales tengan una tendencia a crecer. Entonces yo creo que la institucionalidad es importante, aparte de los recursos, para que se den estas reducciones en las brechas de pobreza.

9. Mucho se nos ha hablado de la necesidad de un cambio en la matriz productiva ¿Por qué ha sido tan difícil este cambio?

El gobierno nos vendió el código de la producción, un intento de cambiar la matriz productiva, de cambiar la matriz energética y demás y vemos que todo se quedó en papeles. Estado fue el que abarcó todo. El gobierno fue el motor de la economía y el momento en que se quedó sin plata, simplemente la economía cayó, que es lo que está pasando. Entonces no ha habido esfuerzos que realmente hayan dado resultados. Si bien quedo en papel, en la práctica no ha habido estos esfuerzos para que haya este tipo de alianzas público privadas, de que haya inversión extranjera, de que se trate de cambiar de una política extractivista a un país que brinde servicios, como por ejemplo turismo que tiene más valor agregado y demás. Entonces si se va o no a dar este cambio a mediano plazo depende de las políticas para ello, que hasta el final si vemos la oferta exportable del Ecuador, exportamos los mismos productos que exportábamos hace 10 o 20 años. Entonces siguen siendo los más representativos. Si bien exportamos muchos más productos que antes, si ha habido un cambio en algunos, industrializados por ejemplo como la línea blanca, algunas cosas con más valor agregado. Pero los más importantes siguen siendo los mismos que exportábamos hace 20 años como el petróleo, el banano, el atún, el cacao y el camarón que finalmente son productos primarios. Desde los ochenta hasta la fecha los bienes que exportamos no han cambiado mucho.

Fecha: 7 de junio de 2016

Entrevistado: César Carranza

1. ¿Qué diferencias encuentra entre el gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron en la década de los noventa en términos socioeconómicos?

La principal diferencia que yo encuentro es el tema monetario, los gobiernos de los años noventa tenían una moneda nacional y en este momento estamos en un proceso de dolarización. A nivel económico también encuentro que en estos años si ha importado más el tema de gasto social, de inversión social que en gobiernos de los años ochenta y noventa donde el interés estaba más para el tema de deuda pública y demás.

2. ¿Qué cambios en la política social de su país puede advertir en los últimos años?

En los últimos años a nivel personal las expectativas que se sentía de un cambio de políticas sociales no han sido muy fuerte, no veo extremados cambios. Lo que si veo es mayor inversión mayor gasto en temas de salud y educación, pero las políticas y orientaciones pueden seguir siendo las mismas ya que los programas, los proyectos, los programas de trasferencias se siguen manteniendo. Quizás lo que tú puedes observar en estos años es que con el mayor gasto el gobierno llegó a cubrir un gran déficit que hubo en los años anteriores donde se dismantelaron varios de los servicios públicos como salud y educación. Ahora se ha llegado a cubrir especialmente en temas de cobertura esos servicios. En temas de calidad todavía hay muchas interrogantes.

3. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de Transferencias Condicionadas (BDH)?

Los programas de trasferencias monetarias ya sean condicionadas o no condicionadas, son uno de los instrumentos de política pública más extendidos a nivel global. No solo se utiliza en nuestros países sino en todo lado. Estos programas son para mí de corte neoliberal, fundamentalmente porque lo que están tratando de brindar es un mínimo, un piso a aquellas personas o familias en situación de pobreza. El programa aquí en Ecuador surgió en el año 99, básicamente como un programa de compensación ante la eliminación del subsidio del gas. Luego el programa se fue transformando y en 2003 hubo una reforma para llamarlo Bono de Desarrollo Humano. Creo que el hecho más destacado en el país es que es un programa de trasferencias prácticamente directas dado que la condicionalidad se monitorea muy poco, ya que no hay un seguimiento adecuado de la condicionalidad. Lo que tú puedes observar aquí es que ha habido una especie de transformación del programa, a ser un programa de apoyo a situación de pobreza a ser un programa visto como una especie de pensión para grupos vulnerables, una pensión especialmente para adultos mayores que están fuera de la seguridad social o pensión para las personas con discapacidad. Ese es elemento que puedes destacar. Estos programas varían muchísimo de país en país, depende mucho del monto de la transferencia. En algunos lados las trasferencias llegan entre 200 y 250 USD, en función de que vayas acumulando ciertas acciones que te piden dentro del programa. En otros países donde tienes un tema de estado de bienestar, ese Estado tiene ciertos

mecanismos para que de una manera institucional se pueda asegurar estas situaciones complejas o crisis por las que se está atravesando. Se trata de desprestigiar estos programas planteándoles de que son clientelares. Tú vas a observar en realidad que lo que aquí ha habido es una reducción en el número de beneficiarios del BDH, ya no es el 1 200 000 personas que era antes ahora está alrededor de 800 000 personas. No necesariamente tienen un aspecto clientelar aunque si pueden prestarse para estos fines.

4. ¿Considera que ha disminuido la brecha de las desigualdades sociales en la última década? ¿Qué factores han incidido?

Ecuador si ha tenido aspectos significativos especialmente en el área de cobertura de servicios públicos, o sea en el acceso a educación, especialmente, educación de nivel medio, en estos años lo cual es un logro significativo. Este asenso es más significativo que el que ha existido en otros países. Asimismo, en aspectos de salud si hay una ampliación de cobertura. La gran pregunta aquí es el tema de las calidades, más en nivel de coberturas ha habido logros importantes. En temas de pobreza, por ejemplo, la reducción de este indicador en estos años ha sido menor que en períodos anteriores, como en los primeros 5 años de los años 2000, y hay segmentos donde la reducción sigue siendo poco significativa, especialmente en zonas rurales con población indígena.

5. ¿Cree que la situación de los sectores más vulnerables ha mejorado substancialmente en la última década? ¿Ha existido un crecimiento pro pobre o pro rico?

En estos años se han reducido temas de inequidad, ha habido una reducción del Coeficiente de Gini que ha sido reconocido y destacado a nivel general. Pero lo que si te puedo destacar es que el crecimiento de los últimos años se ha concentrado más en los sectores que tradicionalmente han estado mejor. En la clase rica. Esta bonanza de los precios altos de los commodities ayudo al país en general, pero a quien particularmente ayudo más es a quienes ya estaban bien.

6. Con la crisis, además de la caída en los precios de los commodities como el petróleo ¿su gobierno tiene la capacidad de mantener los resultados obtenidos en el campo social en los últimos años?

Ha habido una mejoría pero no al ritmo que se hubiese esperado para un flujo de recursos tan importante como el que provino en el momento de los precios altos. O sea el ritmo, la dinámica, el éxito de muchas de las políticas públicas implementadas no están de la mano con el flujo de recursos que aquí han venido. En este sentido me saltan varias dudas, y es que ciertos procesos pueden ser sostenidos aquí en el tiempo en que te estas desacelerando a nivel económico. Puedes haber tenido políticas de reducción de pobreza o mejoras en indicadores sociales pero el ritmo de los logros no se compadece con el flujo de recursos que hubo.

7. Entonces, ¿cree que los avances en el campo social se encuentran intrínsecamente relacionados con el desempeño económico de su país?

Hay una relación marcada que no podemos descartar, pero también muchos de estos avances están relacionados con las orientaciones de política que tengan los propios gobiernos. Más allá de las críticas que se puede hacer sobre la calidad y eficiencia del gasto, hay una orientación de políticas más sociales con el gobierno de los últimos períodos.

8. ¿De qué otros medios si no son los flujos monetarios de los commodities, puede el gobierno de su país mantener los programas sociales promovidos y consolidar otros nuevos?

A nivel impositivo creo que las principales reformas ya se han hecho. Ahora el incrementar el tema impositivo va a ser mucho más complejo y el crecimiento de recursos desde el lado impositivo va a ser cada vez menor. Esto te habla de la necesidad de construir pactos sociales y pactos fiscales dentro de los países. El hecho de que a través de concesos mucho más amplios, de discusiones mucho más democráticas se llegue a establecer mínimos de trabajo y de acción, de limitar un poco el tema de confrontaciones y generar elementos de un pacto fiscal, puede contribuir a la sostenibilidad de varios de los programas. Por ejemplo, una de las grandes deudas siempre ha sido el tema de la seguridad social. La reforma de la seguridad social no llega a pasar, sino reformas parciales a diferentes leyes. Pero una reforma dentro de la seguridad social, que era uno de los cuellos de botella anteriores, que te hablaría mucho de un régimen más bien de bienestar no se ha llegado a implementar y se dejó pasar el tema de los buenos precios.

9. Mucho se nos ha hablado de la necesidad de un cambio en la matriz productiva ¿Por qué ha sido tan difícil este cambio?

No hay segmento que no abogue por ese cambio de la matriz productiva. Derecha, izquierda, neoliberales y progresistas, todos hablan de la necesidad de tener una transformación productiva de la matriz productiva. Esos son procesos de más mediano plazo, de esfuerzos muy importantes. Creo que si se han dado algunos caminos, líneas de trabajo en ese sentido, pero los resultados son prácticamente nulos en este momento. Se demanda el hecho de generar más consensos, involucrar a otros actores sociales, privados, públicos dentro de un cuerpo mucho más amplio. Y el que no se lo haya hecho ha sido un error, por eso los resultados han sido demasiado pobres. Es una falta de un acuerdo básico a nivel de temas endógenos, del propio país. No hay un acuerdo ahí, no tienes sumados a todos en el mismo carril. Creo que hay diferentes actores fundamentales para ese cambio. Es un elemento más discursivo. Lo que se ha hecho es prácticamente nada. Lo que hizo el país fue perder ese ciclo de precios altos para poder tener medidas efectivas en esa línea.

Fecha: 14 de junio de 2016

Entrevistado: César Corredor

1. ¿Qué diferencias encuentra entre el gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron en la década de los noventa en términos socioeconómicos?

Uribe estuvo por supuesto muy concentrado en el tema de la seguridad. La mayor parte de la inversión pública durante esos años estuvo enfocada en ese aspecto y ciertamente uno puede decir que hubo logros en algunas áreas. Digamos que se redujeron algunos indicadores negativos que existían en términos de secuestros y de tomas de poblaciones por parte de la guerrilla. Ese tipo de cosas mejoraron, y digamos que en algunos puntos de la política social alcanzó a trabajar, eso hay que reconocérselo de algún modo, aunque yo creo que el gran problema que tuvo fue que se enfocó más en la atención por número que en la atención por calidad. Me explicó, doy el caso por ejemplo de la educación. El gobierno de Uribe se preocupó muchísimo por la cobertura, por atender un mayor número de estudiantes y de ahí digamos que hubo algunos logros que funcionaron. Pero se quedó muy corto en temas de calidad, porque todo el objetivo era aumentar en números, mostrar cantidad. Yo diría que el gobierno de Santos ha tenido un enfoque distinto en aquellos puntos en los que trabajó Uribe. En términos de calidad, Santos se ha puesto este objetivo. En educación es clarísimo. También ha agregado un elemento que es la infraestructura tanto en términos de carreteras digamos de mejoras en puertos y carreteras, como en términos de vivienda. Ha habido una preocupación muy fuerte por el déficit de vivienda que tenía Colombia, sobre todo en los estratos bajos, y ahí ha habido un avance importante. Entonces me parece que cada gobierno le ha puesto un énfasis distinto en su política de inversión pública, mas no ha su política económica como tal. Es decir aquí no ha habido un cambio de modelo. Aquí los tres últimos gobiernos, desde Pastrana, han sido muy similares en su política macroeconómica que efectivamente tú la puedes ubicar en políticas neoliberales que básicamente están enfocadas a darle mucho peso a la inversión privada, al sector privado, en apertura de mercados, una baja participación del sector público, en general, en el manejo de la economía. Que yo creo que son como los tres pilares de las políticas neoliberales y que aquí definitivamente se han desarrollado de esa manera. Efectivamente, en Colombia tenemos una participación del sector público que es muchísimo más baja que la de países como Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil que tienen un porcentaje de participación más alta en el sector público. Aquí eso es mucho más bajo. Quizás, el único elemento de participación en inversión pública son los que acabo de mencionar y uno que me faltó mencionar en el caso de Uribe y que se ha mantenido con Santos, es algún grado de asistencialismo. Aquí hay varios programas como Familias en Acción y el tema del SISBEN que es el sistema de cobertura de seguridad social para las familias más pobres. Estos programas han hecho parte del eje de políticas públicas con inversiones relativamente altas pero con una tendencia más hacia el asistencialismo. Esto arrancó desde el gobierno de Uribe. La lectura que yo le doy es que estos programas sirvieron para darle un énfasis distinto a un gobierno que era tildado por muchos sectores de ser muy enfocado a la parte de seguridad y al tema de acabar con la guerrilla. Eso no deja de tener algunos detractores. Resumiría la respuesta en dos elementos. Primero, que los últimos gobiernos de Colombia han

mantenido unas políticas neoliberales de baja participación del sector público, de mucha apertura económica hacia afuera y de una alta participación de los mercados. Y segundo, que cada gobierno le ha puesto un énfasis distinto a la inversión pública que se realizó con tres momentos. Uno de modernización institucional en el gobierno de Pastrana, uno de asistencialismo y de inversión en cobertura de servicios en el gobierno de Uribe, y uno de inversión en infraestructura y mayor énfasis en la calidad en el gobierno de Santos.

2. ¿Considera que ha disminuido la brecha de las desigualdades sociales en la última década? ¿Qué factores han incidido?

Es cierto que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, pero también es cierto que en los últimos años ha habido avances en ese sentido. Es decir, nuestro Índice de Gini que en algún momento llegó a estar en niveles de 0,58, es decir mucha desigualdad, ha ido bajando. Sigue siendo alto, mucho más alto que en muchos países de la región, pero ha disminuido y se ha ubicado en niveles de 0,53, es decir, hay un poco menos de desigualdad frente a lo que teníamos antes. ¿Qué ha ocurrido? Yo diría que hay varios aspectos. Primero, crecimiento económico que aunque lentamente, ha alcanzado a permear a capas de menos recursos de la población. Eso uno lo ve sobre todo en el desarrollo tecnológico que ha tenido el campo. Si uno va a una región pobre en Colombia, a una zona rural con alto índice de pobreza uno nota que ha habido algunos avances. Se puede observar que hay familias con mayor capacidad de ingreso que tienen acceso hoy en día a mejores tecnologías: ya tienen un celular y un computador. En eso ha habido mejoras importantes que son resultado del crecimiento económico. Y lo segundo es que, sobre todo en el gobierno de Santos, ha habido un esfuerzo importante y una preocupación muy fuerte por la generación de empleo. Que el crecimiento económico no se quedara simplemente en unos mayores ingresos o utilidades para las empresas, sino que efectivamente se viera o se viera reflejado en la generación de empleo, que en últimas instancias, obviamente, redundan en mayores ingresos para las familias. Un tercer elemento que muchas veces los analistas presentan es que los programas asistencialistas han tenido de todos modos, efectos en la capacidad de ingreso de las familias y que eso de alguna manera ha ayudado a amortiguar un poco la desigualdad. No sé qué tanto. A mí me parece que esos programas pudieron tener su efecto en el corto plazo, hace algunos años. No sé si lo han mantenido, me parece que ha sido más importante el tema de generación de empleo que ha habido. Incluso en este gobierno como resultado del énfasis en la política de inversión pública en infraestructura y en vivienda, pues se han generado muchísimo empleos en ese tipo de sectores. Sectores que generan muchísimos puestos de trabajo, pero que además es trabajo no calificado y eso termina reduciendo la brecha entre los trabajadores altamente capacitados que ya venían bien desde antes y los trabajadores de menor capacitación que han logrado mejorar sus ingresos y tener trabajos más estables. Yo pensaría que si ha habido una mejora aun teniendo un país que todavía es muy desigual, que es más desigual que la mayoría de países de América Latina, quizás con las excepciones de Brasil y de Haití. Pero creo que frente al resto nos va bastante regular en términos de equidad.

3. ¿Cómo observa Ud. los avances recientes en el sector salud?

En salud ha habido un poco el mismo proceso que en el caso de educación. En salud ha habido una mejora importante en cobertura. Los planes asistenciales en buena parte han ayudado a eso. El SISBEN ha sido precisamente la manera de integrar al sistema de salud a las familias más pobres del país, que en muchos casos no tenían un empleo y que quedaban desamparadas por esa característica de desempleados. Entonces, el SISBEN de alguna manera ha logrado atender a un mayor número de personas.

¿Dónde están los problemas de la salud? Están en dos aspectos. Primero, en la sostenibilidad del sistema. El sistema no ha logrado autofinanciarse o ser auto sostenible para atender a tanta gente. Un segundo problema que tiene es la desigualdad en cuanto a calidad, porque los servicios que se presta por sistemas privados siguen siendo, por supuesto, muchísimo mejores, ostensiblemente mejores, que los servicios que se presta a través del sistema público al que accede la mayoría de la población. Aquí de alguna manera se corrigió el problema de cobertura, prácticamente ya toda la población tiene servicio de salud, o por lo menos tiene acceso a servicios de salud. Pero se crearon al mismo tiempo dos tipos de servicios. Uno privado al que accedemos las personas que tenemos la capacidad de hacerlo, la capacidad económica, y uno para las personas de menores recursos que no cumplen con los estándares de calidad y no logran cubrir de manera eficiente todas las enfermedades. Todavía hay muchos inconvenientes en la atención a la mayoría de la población en cierto tipo de servicios específicos. Es decir con un médico general, no se tiene inconvenientes, se puede conseguir buena calidad casi que en cualquier sitio. El problema tiene que ver con los servicios ya especializados. Y ahí hay muchas críticas al sistema porque ha habido muchos problemas. Por ejemplo, en Colombia buena parte de la población tiene que recurrir a tutelas y a instrumentos jurídicos para solicitar atención a sus problemas de salud, lo cual no debería ser de esa manera. Simplemente el sistema debería estar capacitado para atender un porcentaje importante de las necesidades que tienen las personas que acceden al servicio de salud. Por lo menos aquí, no está ocurriendo de esa manera, entonces mucha gente lo que hace es recurrir al sistema jurídico, a las tutelas a los derechos de petición, a las demandas, eso es lo que ha venido ocurriendo. Algo se ha corregido durante este gobierno, algo ha mejorado, pero yo creo que todavía no tenemos un sistema lo suficientemente eficiente en ese sentido.

4. ¿Cree que la situación de los sectores más vulnerables ha mejorado substancialmente en la última década? ¿Ha existido un crecimiento pro pobre o pro rico?

El crecimiento ha sido pro rico, pero eso no significa que los más pobres no estén mejor. Yo sí creo que los más pobres están en una mejor situación, pero ciertamente los más ricos han sido los grandes beneficiados de estos años de crecimiento. Para mí la estructura económica colombiana todavía no permite que el crecimiento que tuvieron sectores como el petrolero, energético, la minería, el financiero, logran bajar del todo, ya que esas ganancias se quedaron en las grandes ciudades y en los grandes capitales. Pero dentro de ese esquema muy desigual de repartición de esas ganancias algo alcanzó a llegarle a los más pobres, y esa persona más pobre seguramente esta mejor hoy en día de lo que estaba hace 10 o 15 años. En eso las

cifras son bastantes elocuentes, la pobreza en Colombia bajo de niveles de entre el 47 y 48% en el año 2001, a niveles del 25 y 28% en los últimos años. Entonces yo creería que si ha habido un avance en el sentido de que hay menos gente en la línea de pobreza, pero eso no descarta o le resta fuerza a otro elemento, y es que efectivamente fue un crecimiento que favoreció muchísimo a los más ricos. Es decir la desigualdad aumentó, no porque los más ricos hayan crecido y los más pobres hayan decrecido. Todos crecieron, pero crecieron mucho más los ricos y en menor proporción los más pobres.

5. Con la crisis, además de la caída en los precios de los commodities como el petróleo ¿su gobierno tiene la capacidad de mantener los resultados obtenidos en el campo social en los últimos años?

Esto tiene dos aristas. Una tiene que ver con una de las grandes preocupaciones y de los grandes retos que enfrenta la economía colombiana este momento que es lograr que los sectores que no tuvieron un buen crecimiento antes, pero que son generadores de empleo como la industria y la agricultura empiecen a aprovechar este momento. ¿Qué les pasó a esos sectores? Durante la etapa de mucho crecimiento del sector petrolero y del sector energético, la revaluación del peso les quitó competitividad y eso los afectó en su crecimiento, pero además en la capacidad de generar empleo. ¿Qué ocurre ahora? Estamos en un momento donde la situación se revirtió, ahora estamos en una situación en la que cayeron los ingresos petroleros y del sector minero-energético y eso ha hecho que el precio del dólar se incremente, es decir que nuestra moneda se devalúe. Y por lo tanto esos sectores que estaban muy mal y que perdieron competitividad durante la revaluación, en este momento tendrían espacio para crecer a través de unas mayores exportaciones y una menor competencia de las importaciones. Digamos, una menor entrada de importaciones que se convierten en competencia para ellos. Eso les da algún margen para aumentar su crecimiento. ¿Qué ocurre? Yo diría que si logramos que el crecimiento de esos sectores efectivamente tenga vuelo, logren salir adelante -industria y agricultura- esos resultados en términos sociales si se van a poder mantener, pero el reto es más económico que social. Yo creería que las estructuras sociales y de inversión pública se han ido construyendo y en eso hemos ido mejorando. Pero si los sectores que esperaba uno que se vean beneficiados de este nuevo momento económico que tiene el país, no logran crecer y aprovechar el nuevo contexto, la nueva situación en la que nos encontramos pues no va a servir de nada porque no vamos a generar los recursos para poder avanzar totalmente. Entonces depende mucho de lo que ocurra en términos económicos y de estructura económica. Si logramos eso mi respuesta sería positiva, creo que Colombia va a poder mantener esos buenos resultados en términos sociales que alcanzaron a darse con algunos inconvenientes. Si esos sectores no logran alcanzar, estamos en problemas, no solo para el crecimiento en términos sociales sino en términos de crecimiento económico.

6. Entonces, ¿cree que los avances en el campo social se encuentran intrínsecamente relacionados con el desempeño económico de su país?

En Colombia hay un ejemplo de un caso en el cual el avance social fue resultado del crecimiento económico y de la generación de empleo. Si nosotros tuviéramos un modelo económico que fuera más agresivo en términos sociales con seguridad hubiésemos podido avanzar más. Pero a pesar de eso logramos con el crecimiento económico que tuvimos obtener avances sociales importantes. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que no tenemos la estructura gubernamental y el modelo económico que nos permitiera tener más avances sociales, logramos tener algo a punta de crecimiento económico.

7. ¿Cómo ve Ud. el interés de Colombia de ingresar a la OCDE?

Eso tiene algunas ventajas. La primera es tener buenas prácticas gubernamentales. Los países de la OCDE se caracterizan por tener unas políticas públicas con mayor transparencia, mayor eficiencia y eso es positivo. Ahora que si eso nos va a llevar a un estilo de gobierno o a unas prácticas gubernamentales que faciliten la reducción de la pobreza y el avance de lo social, yo ahí lo dudo. Nos puede servir para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Y la esperanza es que en la medida en que manejemos mejor esos recursos públicos pues podamos invertir esos excedentes y esas ganancias que tendríamos con la eficiencia en la atención a los sectores más pobres. Pero eso es muy difícil de asegurar. No me parece que haya algo que me permita garantizar que eso efectivamente vaya a ocurrir de esa manera.

8. ¿Cuáles son los efectos del conflicto armado en desarrollo social?

Para mí el principal efecto del conflicto es que en aquellas zonas más afectadas por la presencia de guerrilla y de paramilitarismo hay un grado de desinstitucionalización muy fuerte. Entonces, el Estado pierde fuerza y poder en esas zonas. Bien sea porque hay un grupo guerrillero que de alguna manera ocupa ese espacio, y obviamente lo utiliza a su favor, no para toda la población, no para hacer desarrollos a nivel social. Sino para utilizarlo en su idea de avanzar políticamente. Entonces claro eso hace que haya una desviación de recursos, mayor desconfianza por parte de la población hacia las instancias gubernamentales y mayor desigualdad, lo cual lleva a que el avance social no haya sido el esperado. Como un elemento a considerar, Colombia tiene un conflicto que no es nuevo ya que lleva más de 50 años, y a pesar de eso ha logrado tener avances sociales no solamente en la época más reciente, sino desde hace ya varias décadas Colombia ha demostrado un comportamiento económico muy estable. Colombia es quizás una de las economías, junto con la economía chilena, más estables de América Latina. En los años ochenta, el único país de Suramérica que no tuvo crecimiento negativo fue Colombia. Todos los demás países tuvieron al menos un año de crecimiento negativo. Colombia no tuvo ni un solo año de crecimiento negativo y fue junto a Chile la segunda economía con mayor crecimiento en promedio de esa década. Esa tradición de estabilidad económica, no la ha perdido Colombia y el conflicto no ha sido un aspecto que haya generado alguna fragilidad en términos económicos para el país. En términos sociales, sobre todo, a nivel urbano ha habido

muchos avances en el país. ¿Dónde está el principal inconveniente, lo que no se ha podido cerrar? Ahí el conflicto tiene muchísimo impacto, en la distancia que hay entre lo rural y lo urbano. Las zonas rurales siguen siendo zonas donde hay muchísima pobreza, una desigualdad que es machismo más fuerte, y donde el desarrollo económico no logra tener impacto, no logra generar frutos. Se hacen muchos proyectos que no logran germinar porque el mismo conflicto no lo permite. Entonces creo que ahí es donde el conflicto ha tenido un mayor impacto y es precisamente en las zonas rurales donde el desarrollo no logra tener prosperar, echar raíces realmente.

9. ¿Cómo observa la evolución del PIB colombiano y la importancia que ha presentado el sector servicios en el mismo?

Lo primero es que el hecho de no depender tanto del sector público le da a nuestra economía mayor estabilidad, mayor capacidad de crecimiento y eso es positivo. Me preocupa que sea precisamente en un sector como es el sector de servicios que es menos generador de empleo y que su crecimiento depende muchísimo de factores externos, lo que hace que tengamos una economía que de alguna manera se afecta mucho por el vaivén de la economía internacional. Además de que es un sector en el cual hay una mayor propensión a generar desigualdad, porque los empleos que se requieren de mayor grado de capacitación. Entonces digamos que las personas que son contratadas por el sector de servicios no son en su mayoría las personas que están en mayor situación de pobreza. Yo tendría dos visiones. Por un lado, una mayor dependencia del sector privado que me parece positiva, pero por otro la dependencia en un sector que no es el más indicado para generar empleo estable y para reducir la pobreza. En parte, la expansión del sector financiero ha sido uno de los elementos que han generado crecimiento no solamente en el sector de servicios en Colombia, ya que también hubo un boom en el sector de la vivienda. Las viviendas se encarecieron muchísimo. Tuvimos una situación en la cual el precio del metro cuadrado en algunas zonas de Bogotá era igual al precio en Manhattan, así de costoso. Entonces eso también genera desigualdad porque termina segregando a la población urbana, ya que obviamente una persona de menores recursos le toca colocarse en los cinturones de pobreza de las ciudades, y eso termina generando más segregación. Ese fue otro aspecto que marcó en su momento el crecimiento económico. Hoy en día como cambió la situación, los precios de la vivienda se están normalizando nuevamente. Yo creo que eso es positivo porque también reduce las ganancias que tenían los dueños de la tierra y de las grandes propiedades.

10. ¿Cuál es su opinión sobre el Programa Mas Familias en Acción?

Es el nombre que le dio Santos. Los beneficiarios tienen que llevar a los niños al colegio. Si el niño asiste, la familia recibe el subsidio, si no lo hace pierden la posibilidad de tener subsidios. Tienen la condición de no estar en un trabajo estable donde no estén recibiendo otros beneficios. Otra que tiene que ver con aspectos de salud. El gobierno hace algunas verificaciones en cuanto al cumplimiento de las condiciones que efectivamente demuestren que son familias que ameritan recibir el subsidio. En algunas ciudades la gente se ha acostumbrado a recibir los subsidios y a

no salir a buscar trabajo, entonces esa es una de las críticas. Hay gente que termina engañando al Estado con tal de recibir los subsidios.

Fecha: 14 de junio de 2016

Entrevistada: Consuelo Ahumada

1. ¿Qué diferencias encuentra entre el gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron en la década de los noventa en términos socioeconómicos?

En la década de los noventa en Colombia y en otros países se imponen las políticas del Consenso de Washington y se dan las condiciones para la apertura económica. En la década del 2000, toma mucho más auge el modelo extractivista que no había desaparecido. Se profundiza el modelo extractivista minero-energético en toda la región, es decir es una cuestión de afianzar mucho más ese tipo de modelo frente a cualquier otra perspectiva y eso es lo que vemos en América Latina y por su puesto en Colombia. Eso genera un recurso y un crecimiento económico que no se traduce en un desarrollo social, por lo menos, en el caso de un país como Colombia. Esto coincide con el gobierno de Uribe del 2002 al 2010 y con el gobierno de Santos hasta ahora, los cuales le han apostado todo al modelo minero-energético, y han facilitado así los intereses de las grandes empresas mineras. Digamos que las mineras han tenido una especie de Estado aparte, en donde han podido hacer de todo, incluso desviar ríos. Entonces, aquí no se habla de redistribución del ingreso. De hecho, en Colombia durante este período, en el que otros países de América Latina han mejorado en algunos aspectos de redistribución del ingreso, no ha habido nada de eso. En Colombia se ha concentrado más la tierra y, en general, se ha concentrado la riqueza. La diferencia es, quizás, que el modelo es el mismo pero hay una mayor concentración en la actividad minero-energética que por naturaleza es grande y está ligada más a intereses extranjeros que a intereses nacionales.

2. ¿Qué cambios en la política social de su país puede advertir en los últimos años?

No veo ningún cambio de fondo. Se aprobó una política muy importante que es la política de restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto que implica una inversión pública y social muy fuerte. Pero se ha avanzado muy poco en esa política porque va en contra vía de la visión neoliberal. Pero además porque el presidente Uribe con todos los sectores que le respaldan, muy ligados a la mafia y al paramilitarismo, han hecho todo lo posible por impedir que esto avance. Han estado muy comprometidos en frenar la restitución de tierras. De hecho están adelantado, en este momento, una política en contra de la firma de los acuerdos de paz. Creo que lo más importante en cuanto lo social lo han hecho gobiernos como el de Gustavo Petro en Bogotá. Fue un gobierno en el cual se volvió a darle primer lugar a lo público en medio de mucha oposición, de tener a todos los medios en contra, de muchas dificultades. Se logró revertir una tendencia muy clara que ahora por supuesto está cambiando con el gobierno neoliberal que tenemos en Bogotá.

3. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de Transferencias Condicionadas (Más Familias en Acción)?

Son programas concebidos para darle sostenibilidad al modelo económico de acumulación en pocas manos. Son programas típicamente asistencialistas que tratan de compensar un poco la crisis económica y social que se vive, pero que no logran sacar a las personas de las condiciones en las que ellas se encuentran. Esa es la crítica que se ha hecho frente a estas políticas. Ahora, si la persona no tiene empleo y no tiene nada más, pues obviamente abogar por que se quiten estas ayudas sería un error. Pienso que los subsidios sirven en la medida en que la economía y las políticas económicas le apunten a sacar a las personas de la crisis y los lleven a vincularse al mercado laboral o al sector productivo. Y eso es lo que no se ve, no solamente en Colombia, sino también en estos países que están desarrollando políticas progresistas. Hay que cambiar el modelo de desarrollo. Los subsidios cumplen una función mientras no haya las oportunidades para la mayoría de la población de empleo y acceso a servicios sociales básicos.

4. ¿Considera que ha disminuido la brecha de las desigualdades sociales en la última década? ¿Qué factores han incidido?

Colombia tiene una concentración cada vez mayor del ingreso, el Índice de Gini sube frente al de otros países donde ha tendido a bajar. En Bogotá, por ejemplo, la pobreza bajó en términos notorios frente al resto del país. Ahora, que baje la pobreza no es suficiente, lo que es importante es que baje el Índice de Gini, pero eso es producto de políticas de más largo plazo. En términos generales, en Colombia ha aumentado la concentración del ingreso. En este momento, Colombia se encuentra detrás de Honduras en concentración del ingreso, y también está primero en otros indicadores sociales negativos.

5. ¿Cree que la situación de los sectores más vulnerables ha mejorado substancialmente en la última década? ¿Ha existido un crecimiento pro pobre o pro rico?

El crecimiento económico le apunta al crecimiento de la riqueza pero no a la distribución del ingreso. Eso tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo con el cual se hacen las políticas públicas. El modelo minero-energético le apunta a la concentración de ese ingreso y por fuera del país, además. Muy buena parte de estos recursos se concentran en los países en donde tienen la casa matriz de estas empresas: Canadá, Estado Unidos, Suiza y Sudáfrica, que son las principales mineras con presencia en Colombia. Este modelo tampoco genera empleo, genera muy poco empleo y en general es de muy mala calidad y no cumple los estándares mínimos de seguridad. Es un sector en el cual hay accidentes permanentemente, incluso en los países desarrollados. No es un empleo que genere una acumulación interna que promueva el mercado local, el consumo, el gasto público y social, el acceso de la mayoría de la población a servicios sociales básicos. A parte de que la minería llega a lugares apartados, poco desarrollados, con una trayectoria muy de control oligárquico, de grandes terratenientes, y en el caso de Colombia de mafias. Eso hace mucho más

difícil establecer unas bases democráticas para que se redunde en un beneficio social para los habitantes de la región. En general, son lugares tan apartados donde los mismos mineros, que son campesinos o personas que no tienen otra opción, salen a defender la minería porque realmente no tienen otra opción y es que el Estado no se las da.

6. Con la crisis, además de la caída en los precios de los commodities como el petróleo ¿su gobierno tiene la capacidad de mantener los resultados obtenidos en el campo social en los últimos años?

La caída de los precios del petróleo generó una situación muy grave en todos los países, por supuesto en Colombia también. El gobierno lo que está tratando de hacer ahora y lo va a cumplir el próximo mes, es implementar una reforma tributaria absolutamente regresiva en donde se considera darle más garantías a los grandes grupos económicos, a la inversión extranjera, reducirles los impuestos, aumentarles las extensiones, entre otros. Esta es una tendencia típica recomendada por la OCDE, el FMI, el BM, el BID. La cual consiste en recoger recursos a partir de las rentas laborales y no de los sectores más ricos de la población. O sea no son políticas que tienden a redistribuir, sino a concentrar más. Otra medida que ha tomado el gobierno ha sido privatizar ciertas empresas que habían logrado sobrevivir en manos del sector público. Es decir, el gobierno recurre a darle más auge a estas políticas que vienen desde los años noventa en vez de pensar en políticas redistributivas.

7. ¿Cómo ve Ud. el interés de Colombia de ingresar a la OCDE?

Colombia le ha apostado a este organismo llamado el club de los ricos, desde que empezó a gobernar Santos. Para esto, le han puesto muchas condiciones. Una va a ser esta reforma tributaria que va a generar mucho rechazo entre la población en un momento muy difícil porque vamos a firmar el acuerdo de paz. Los sectores están entre apoyar la firma del acuerdo de paz y rechazar las medidas neoliberales. La OCDE ha pedido hacer algunas reformas, que son más de lo mismo. Reformas que tienden a que no suba el salario mínimo, a que se posponga la pensión, que la gente trabaje más y que se busque mejores condiciones para el sector privado. Ahora, lo que pasa es que la OCDE también busca espacios como Colombia y en alguna medida como México, que es un país mucho más rico, pero tiene que una condición social muy difícil en este momento. Entonces estos países son la garantía de obtener unos mejores resultados económicos. En el caso de la Unión Europea, este es el papel que juegan los países del sur del mediterráneo que compensan a los países más grandes, que son los que más ganan como Alemania. El hecho de que los principales países de la OCDE tengan socios en peores condiciones que las de ellos, les permite compensar y tener mayores beneficios en términos económicos, comerciales y de inversión.

8. ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la reprimarización de las exportaciones colombianas en este período?

Tiene que ver con las políticas que se adoptan a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, donde la apertura económica propicia una situación muy difícil para el sector agrario. En Colombia es muy complicado, por ejemplo, por el conflicto armado. Entonces entra en crisis la producción agrícola, y hablamos del conflicto pero también de la importación masiva de alimentos, sobre todo, de Estados Unidos. Entonces producir en el campo no es negocio. Porque para los campesinos no les sale nada beneficioso producir si tienen que vender por menos de los costos de producción. En el sector industrial, lo mismo. También, los tratados comerciales que se han hecho con Estados Unidos, con la Unión Europea y otros que vienen en camino han impedido que el sector productivo se desarrolle. Las políticas del Estado no han apoyado a los sectores productivos. Desde el Estado se orienta para allá, desde los organismos internacionales se orienta a fortalecer la inversión extranjera. Se pone como estratégica la inversión extranjera.

9. ¿Considera que es factible que su país pueda pasar de una economía extractivista a una economía con valor agregado en el mediano plazo? ¿Cómo? ¿Qué es necesario?

Son dos cosas las que se necesitan. La primera, la firma del acuerdo de paz, sin acuerdo de paz no podemos pensar en nada más. De hecho, el conflicto interno se ha llevado toda la atención a nivel político y ha hecho que se derecho mucho la sociedad colombiana. La firma del acuerdo de paz nos debe llevar a constituir un escenario donde se puedan plantear alternativas. Yo creo francamente que el presidente Santos puede servir para firmar la paz pero no más. Es un neoliberal puro que no va a construir nada después del proceso de paz en términos de lo que necesita el país. Le está apostando solamente a traer a los inversionistas de la OCDE y a los países ricos para que vengan a comprar tierras y a quedarse con los recursos del país. Necesitamos un escenario en que los distintos sectores democráticos, con una postura de izquierda democrática, pero en general democrática, traten de darle una activación tengan una incidencia, tengan audiencia en el congreso, en el gobierno para sacar adelante un proyecto productivo en el país, mucho más parecido a lo que trataron de hacer estos gobiernos progresistas en un periodo muy difícil. Yo creo que esa es la solución apoyar a los sectores productivos, apoyar al mercado interno, es decir una especie de neo keynesianismo.

Fecha: 16 de junio de 2016

Entrevistado: Fander Falconí

1. ¿Qué necesitan nuestros países para un desarrollo social sostenible?

Las materias primas se comportan por grandes ciclos en términos de precios. Quizás aquí hubo una falta de previsión sobre el ciclo porque estábamos avizorando ya un ciclo de caída de precios. Para mí la lógica es que no debe sufrir la política social. Lo que se hizo tradicionalmente en el caso ecuatoriano y en el caso de América Latina es tratar de siempre ver a la política social como la variable de ajuste. Entonces, yo esperarí que ahora no sea la variable de ajuste, ya que se debe trabajar sobre la productividad, la eficiencia económica, previsión del gasto público, pero que no altere la política social. Porque si quieres generar salida de la pobreza y de la desigualdad en nuestros países necesitas generar amplias inversiones y sostenidas particularmente en educación y salud que son las herramientas fundamentales de cualquier proceso de cambio.

2. Mucho se nos ha hablado de la necesidad de un cambio en la matriz productiva ¿Por qué ha sido tan difícil este cambio?

No tienes cambios fundamentales en la composición de la matriz productiva. Primero, porque son procesos estructurales, de larga data, y segundo no dejamos el chip de reprimarización como lo dice Svampa. Cuando hablamos de reprimarización no es solo un problema de estructura de comercio, sino que conduce a problemas relacionados con el consumo por el tipo de producción que se está estableciendo. Uno, son problemas de estructura y dos, un cierto facilismo de no buscar diversificación. Esa es una de las paradojas de los cambios de precios, porque entre el 2002 y el 2012 tú tuviste un alza y luego un descenso. Lo paradójico es que en este tiempo entre el 2002 y 2012, una década, lo cual es bastante, no tienes cambio en la administración de los recursos, tienes un proceso de reprimarización, es decir aquí debiste haber aprovechado ese boom de precios para diversificar mercados. Se necesita la creación de industria de base, poder desarrollar petroquímica, metalurgia, lo cual es fundamental en un proceso de cambio de matriz productiva. Evidentemente en eso si es un acierto del gobierno el haber diversificado fuentes de energía, cambiando la matriz de producción netamente fósil. El tejido productivo empresarial que es bastante monopolizado por lo tanto se necesita ampliar el mismo.

3. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de Transferencias Condicionadas (BDH)?

Es importante diferenciar los distintos mecanismos de transferencias monetarias condicionada, es decir tratar de hacer una tipología mucho más adecuada. En el caso del bono este antes era un bono de pobreza, tú pagabas a los pobres. El BDH es otra cosa, no es un bono de pobreza porque ahora está condicionada a que tú lleves a los niños a la escuela, a las visitas médicas. En otras palabras, ya deja de ser un bono asistencialista y se convierte en un bono que te garantiza derechos, y como tal, forma parte de un piso de protección social. Entonces ese es un mecanismo, pero no es el

único medio de protección social. Ha brindado acceso a la seguridad social de un grupo que antes lo tenía.

4. ¿Cree que los avances en el campo social se encuentran intrínsecamente relacionados con el desempeño económico de su país?

El crecimiento económico es expansión. Cuando tú aumentas el consumo, las exportaciones, niveles de inversión, eso no tiene nada que ver con lo social. Hay muchos países que crecen a costa de deteriorar todo el asunto social. Tú podrías crecer a costa de comerte todo tu capital natural, es decir deforestar. El crecimiento económico no necesariamente expresa procesos de redistribución. No solo es el crecimiento. El crecimiento es un elemento pero el desarrollo es lo que conservo.

5. Entonces, ¿cuál ha sido la relación entre lo económico y social en esta coyuntura del boom de los commodities y de sus rentas extraordinarias?

El Ecuador es un país petrolero. Lo que has tenido son dos momentos muy claros en el ciclo: uno de alza y otro de baja. En realidad el ciclo de los precios no ha sido tan extraordinario. Lo que ha pasado es que el Estado ha tenido mayores ingresos presupuestarios que han tenido un énfasis evidente en lo social. Cuando pienses en lo social piensa al menos en lo siguiente: primero, niveles de cobertura, como por ejemplo aumentar cobertura en educación; y dos, aspectos de calidad, ya que podrías tener más cobertura pero pésima calidad, este indicador es súper importante cuando hablas de política social. Son dos cosas a las que se debería prestar mucha atención: cobertura y calidad. No siempre la cobertura es sinónimo de calidad.

Fecha: 17 de junio de 2016

Entrevistado: Alberto Acosta

1. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre dos gobiernos, un progresista en Ecuador, un neoliberal en Colombia?

Ambos países siguen dentro de la lógica de una economía primario exportadora, en la cual el extractivismo es una de sus manifestaciones más claras y profundas. El extractivismo entendido como la apropiación masiva de recursos naturales que se destinan prácticamente sin ningún procesamiento al mercado internacional. En ambos casos, son países que dependen de la exportación de materias primas como el resto de los países de la región. Tanto en Ecuador como en Colombia, los gobiernos se han beneficiado del boom de los commodities. De eso no hay ninguna duda. En ambos casos los dos grupos de países, progresistas y neoliberales, más allá del discurso y de algunas políticas pos neoliberales de los gobiernos progresistas, han impulsado una lógica desarrollista. Tienen como eje central el logro del progreso y como motor para el logro del progreso al crecimiento económico. Inclusive en ambos casos, los dos grupos de países han justificado el extractivismo desde la necesidad de tener recursos económicos para superar la pobreza.

Ahí habría que comenzar a hacer algunas diferenciaciones, pero señalaría algo que es muy importante, en ambos casos en estos años, hay una reducción de la pobreza. También, en ambos hay una reducción de la inequidad. Un punto que hay que destacar y que marca una suerte de diferencia importante: el crecimiento económico de Colombia explica más la caída de la pobreza que el crecimiento económico en Ecuador. En Ecuador más que el crecimiento económico hay una política social para reducir la pobreza. En resumen, en ambos casos hay una reducción de la pobreza e inequidad. La diferencia entre Ecuador y Colombia es que en Ecuador es más el resultado de una redistribución de los ingresos, no de la riqueza, y en Colombia más del crecimiento económico. Ese es un punto medular.

2. ¿Qué significó el boom de los commodities para estos países?

El saldo es que los gobiernos neoliberales y los gobiernos progresistas se beneficiaron del flujo de recursos económicos cuando hubo el consenso de los commodities. Lo que habría que tratar, es ver cómo los dos grupos de países están sufriendo ahora el impacto del agotamiento del boom de los commodities. En el caso de Ecuador y Colombia hay un punto determinante. Los colombianos tienen política monetaria y cambiaria, nosotros no. Entonces para el Ecuador el asunto es muchísimo más complejo, hay que recurrir a las salvaguardias arancelarias que pueden ser la única opción que tenemos, pero se lo hace de una manera no planificada, no como resultado de una estrategia para favorecer la industria, sino simplemente para superar el bache. Mientras tanto, los colombianos con su política cambiaria dan señales que pueden generar resultados más homogéneos para toda la colectividad. Nos está pasando la factura la dolarización. Con los precios de las materias primas a la baja y la apreciación del dólar tenemos un escenario bastante complejo y difícil.

3. Mucho se nos ha hablado de la necesidad de un cambio en la matriz productiva ¿Por qué ha sido tan difícil este cambio?

Ni en Ecuador ni en Colombia hay nada respecto al cambio de matriz productiva. Hay varias razones, primero que no se está afectando la lógica primaria exportadora, la cual en ambos casos se está fortaleciendo. La idea de que superar el extractivismo es posible gracias a más extractivismo, lo dice públicamente el gobierno ecuatoriano, el gobierno colombiano no lo dice, pero se ha demostrado que esa no es la solución, es obvio, me parece que es evidente y que ni si quiera hay que señalarlo. Luego tienes un problema serio, en el caso ecuatoriano sobre todo, con un gobierno que ha desperdiciado y que ha despilfarrado los recursos económicos. Es el gobierno que más tiempo ha estado en funciones, que más dinero ha tenido en toda la historia de la república, que contó con un marco jurídico constitucional propicio para el cambio, que tuvo (en tiempo pasado) un amplísimo respaldo popular como nunca en la historia de la república, pero que a la postre ha desperdiciando toda una década. Aquí hay que hablar de toda una década desperdiciada.

El caso colombiano tiene otras diferencias, debido incluso al conflicto interno. Pero a pesar del conflicto interno uno puede ver ciertos elementos interesantes. Lo que sí es claro y evidente es que en Colombia hay un acelerado proceso de desindustrialización. En los años noventa en la industria, la manufactura representaba un 20% del PIB. El año pasado la industria representaba un 11% del PIB. En el caso ecuatoriano la industria se reduce un par de puntos, pero está en el orden del 12- 13%. El último año sube un poco porque caen los precios del petróleo. Ahora la pregunta que podríamos hacernos es si el alza de los precios del petróleo, explica también por qué la industria se mantiene baja. Entonces habría que hacer un análisis más detenido de la industria propiamente dicha. Pero aquí en Ecuador es cierto que hay algunas señales de que se está procesando ciertas materias primas y se las exporta como el cacao vuelto chocolate. Pero la transformación de la matriz productiva no está en marcha. Entiendo que eso no se lo puede hacer de la noche a la mañana, pero estamos ya casi 10 años y se deberían ver ciertas señales y no hay nada de eso.

4. ¿Considera que es factible que su país pueda pasar de una economía extractivista a una economía con valor agregado en el mediano plazo? ¿Cómo? ¿Qué es necesario?

Se necesitaría una transición para poder salir del extractivismo. Eso no se lo hace de la noche a la mañana, requiere toda una visión estratégica, a dónde se quiere llegar y cómo salir allá. Entonces eso requiere varias etapas. Algunas de las cuales este gobierno las ha intentado, pero creo que no de una manera suficientemente clara y menos eficiente. Por ejemplo, un país que exporta petróleo y que tiene que obtenerlo con un alto costo socio-ambiental está en una situación perversa cuando a la vez tiene que importar derivados de petróleo. Entonces, la primera cosa que debía haberse hecho es fortalecer y ampliar la capacidad de refinación para disminuir la demanda de derivados de petróleo. Pero estamos ya más de 9 años y recién se está concluyendo la rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas con un costo altísimo. Cuando empezó este gobierno se hablaba de una rehabilitación de la refinería, una rehabilitación integral, que no costaba 200 millones de dólares. Las cifras ahora andan en más de 1200 millones, e incluso he oído cifras de 2000 millones de dólares solo por la rehabilitación. Lo cual no es normal. Entonces tenemos un problema muy serio. Y además la refinería no mejoró. La refinería está como a sus inicios, no mejoró la relación productos livianos como gasolina, nafta y diésel y productos pesados como bunker. No mejoró la calidad de las gasolinas, ya que seguimos utilizando bencenos que son tremendamente cancerígenos. Debido a que no hay suficiente petróleo crudo, muchas veces la refinería no produce a capacidad, porque gran parte del petróleo está comprometido sobre todo con los chinos o los tailandeses. Luego habría que ver también en el caso ecuatoriano todo el esfuerzo que se ha hecho, que es importante, para ampliar la capacidad de generación hidroeléctrica. Pero sin una real planificación. No me opongo a esas obras, pero se debían haber hecho escalonadamente. Ahora tenemos una serie de obras que están entrando en funcionamiento, casi al mismo tiempo, y no tenemos capacidad para utilizar toda esa electricidad. Entonces la respuesta parche, emergente, desesperada, son las cocinas de inducción. Con Colombia se trata de colocar algo de electricidad porque temporalmente tendría déficit, pero en el mediano y largo plazo no es así. Colombia tiene una gran capacidad

de generación de electricidad. Con Perú no se ha avanzado tampoco en un acuerdo. Ya se dijo en el año 2006 que la puesta era colocar la electricidad en Perú para venderla también a Chile. O sea nosotros vendíamos a Perú, y Perú a Chile, porque Chile si demanda electricidad en gran cantidad. Entonces tampoco se avanzó en ese tipo de respuesta. Ahora, adicionalmente en el caso de las represas hidroeléctricas, hay sobre costos y hay denuncias que podrían estar ya dándonos indicios sólidos de corrupción.

5. Entonces, ¿cree que los avances en el campo social se encuentran intrínsecamente relacionados con el desempeño económico de su país?

No necesariamente. El crecimiento económico en el caso ecuatoriano, ayuda a mejorar los niveles de bienestar de la gente, reduce la pobreza. Hay que ver cuánto es crecimiento económico y cuanto es políticas sociales. En el caso colombiano, si es más marcada la proporción del mayor bienestar debido al crecimiento económico.

6. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de Transferencias Condicionadas (BDH)?

En realidad, estas trasferencias vienen de Estados Unidos, de los años 30. Ahí se conoce como estampillas de la alimentación o food stamps que siguen todavía en la actualidad y que benefician a más de 50 millones de personas en ese país. Así que no es tan nuevo. En América Latina esto empieza a fines los noventa con México primero, pero la historia es anterior. Es una propuesta del Banco Mundial cuando se dieron cuenta que sus políticas de ajuste estructural y sus planes de estabilización inspirados en el Consenso de Washington, neoliberalismo, generaban tremendos impactos sociales y eso estaba provocando respuestas políticas que hacían peligrar la aplicación económica de todo su recetario. Entonces de ahí surge la idea de estas medidas más de tipo parche. Si reducen la pobreza pero no de una manera sustentable, sostenible más que nada. Son políticas clientelares puntuales, que no han tenido la capacidad de transformarse en una herramienta productiva por ejemplo. Imagínese si teníamos la posibilidad de que estas políticas sociales, como el bono, se transformen en un bono de desarrollo humano y productivo. La gente que recibiría ese bono tendría la posibilidad de transformarlo en más, siempre y cuando, comprara productos de los artesanos y campesinos. Entonces eso podría haber alentado la producción, y podría ser un bono de desarrollo humano, productivo y comunitario.

7. ¿Cree que la situación de los sectores más vulnerables ha mejorado substancialmente en la última década? ¿Ha existido un crecimiento pro pobre o pro rico?

Los grupos económicos han sacado una gran ventaja. Hay un documento del gobierno que dice: “Nunca antes los grupos poderosos han estado mejor, y nunca antes los pobres de la Patria han estado menos peor”. Es obvio, hubo mucho dinero, una distribución de los ingresos petroleros, algo de los ingresos fiscales también, y políticas sociales pero sin afectar la matriz primario exportadora y sin afectar una matriz sustentada en el poder de grandes grupos oligopólicos que son los grandes beneficiarios de estos gobiernos.

8. En cuanto a salud y educación se ha mejorado en cobertura, pero la calidad aún es cuestionada, ¿Cuál es su opción al respecto?

Primero debemos ver el tema desde las cantidades, y ahí tenemos que rescatar que sí que ha subido la inversión en educación y salud y eso es indudable. Es más que en la época neoliberal. Pero estamos lejos de la meta constitucional. En salud debería ser el 4% del PIB, estamos en el orden del 2%. En educación debería ser el 6%, estamos en el orden del 4%. En educación no se suma la educación universitaria porque eso no establece la Constitución. Entonces si hay más inversión, pero todavía falta. Luego vemos la calidad de la inversión en educación y salud y tenemos muchas dudas. Y en ese ámbito de las calidades, por ejemplo en salud, se ha priorizado la salud curativa y no la salud preventiva; en el ámbito de la educación se ha priorizado la educación tecnocrática y no una educación que apunte a la construcción del buen vivir, por ejemplo. Nada de eso hay, no hay ninguna propuesta comunitaria. Luego hay un tremendo desperdicio de recursos como en el caso de Yachay, eso es un desperdicio de recursos sin lugar a duda. Y en el ámbito de la salud, ese importante incremento de inversión en salud que parece bueno y que de hecho en principio hay que apoyarlo, nos confronta con una lamentable realidad. El grueso de los recursos terminó en los grupos económicos que controlan el sector de la salud: clínicas, hospitales, centro médicos y farmacéuticas privadas.

Fecha: 17 de junio de 2016

Entrevistado: Álvaro Lemus

1. ¿Cómo observa la situación económica reciente de su país?

Actualmente, para ambos países es un momento difícil. No estamos atravesando una buena época. Ecuador al estar dolarizado, el tema de si sube o si baja el dólar influye bastante en nosotros. En parte, en Colombia empezó a crecer el porcentaje de las exportaciones, tradicionales o de bienes primarios. Esto se dio porque hubo el boom de los precios internacionales de las materias primas y Colombia empezó a recibir muchos dólares tanto por exportación de bienes primarios como de bienes no tradicionales. La IED empezó a crecer en Colombia. El turismo empezó a crecer de muy buena forma también. Lo que hizo que ingresara muchos dólares en Colombia. Entonces el peso se revaluó y las exportaciones colombianas dejaron de ser atractivas porque se volvieron más costosas. Lo que pasa en este momento en Ecuador, donde el dólar esta alto, entonces las exportaciones ecuatorianas se vuelven un poco más costosas sin que haya implicado el precio del producto, simplemente por el precio de dólar. Eso pasó en Colombia. Como llegó mucha inversión, la economía creció y se volvió atractiva para las mismas empresas colombianas. Muchas empresas que eran exportadores de bienes no tradicionales, bienes con valor agregado, prefirieron vender en Colombia y dejar de exportar y no ampliar sus mercados. Entonces el ritmo de crecimiento bajó de las exportaciones no tradicionales, en parte porque el mercado colombiano se volvió muy atractivo para ellos y por el tema de la revaluación también muchos mercados internacionales dejaron de ser atractivos o los márgenes no eran los mismos para competir en Colombia o afuera, entonces prefirieron muchas competir

afuera. Había empresas que estaban dedicadas 100% a las exportaciones y en un momento empezaron a mirar el mercado colombiano como atractivo. Por ejemplo, aquí en Ecuador el banano, las flores, los camarones tienen un gran porcentaje de ventas en el mercado internacional. En Colombia también hay una gran cantidad de empresas que su gran porcentaje de ventas o totalidad de ventas iba hacia el exterior, pero que empezaron a ver que el mercado colombiano atractivo ya que venía creciendo porque el consumidor se volvió sofisticado y podía consumir otro tipo de productos que ellos en ese tipo veían que no podían dedicar a Colombia. A parte de eso se sumó el boom de las materias primas, los precios internacionales tan altos del petróleo, del carbón, del ferroníquel, algunos que son nuestros productos más básicos. Eso hizo que el porcentaje de las exportaciones minero-energéticas crecieran de una muy buena forma y las otras empezaran a perder terreno. Antes de eso estábamos en un 60 - 40%, inclusive en un momento llegaron a un 50 - 50%, pero en esa época que fue entre 2008 y 2013 los precios internacionales tan buenos que habían de las materias primas, el crecimiento de China y su demanda, hizo que las exportaciones no tanto en volumen pero si en precio crecieran bastante. Todos los ingresos que vienen al país producto de las exportaciones de bienes primarios, principalmente de productos minero-energéticos se llaman regalías.

2. ¿Considera que ha disminuido la brecha de las desigualdades sociales en la última década? ¿Qué factores han incidido?

En el tema de inequidad Ecuador tiene mayores avances que nosotros. Son varios factores que inciden en eso. Ecuador es un país más pequeño y en paz, nosotros somos un país mucho más grande, un país donde hay distancias muy grandes. El centro del país, Bogotá, se encuentra a larga distancia de la amazonia y de los departamentos más pobres. Además, el Estado todavía no llega a ciertas zonas, por el conflicto. No es tan fácil la redistribución, y además si uno ve el aparato industrial colombiano está concentrado en ciertos departamentos y el resto se dedica a actividades extractivas de la tierra. El tema de inequidad, de redistribución del ingreso no es tan eficiente como en Ecuador. Aquí se ha venido democratizando más el tema de los ingresos. Ecuador está por encima de nosotros por el tamaño, por cuestiones que han pasado en el país, y eso hace que no haya redistribución en el ingreso. Pero se está trabajando en eso y aparte lo que se está logrando en el tema de regalías es que donde no había servicios básicos se implementen los mismos para bajar un poco las desigualdades. ¿Cómo se ha canalizado esas regalías? Con Santos se empezó un programa de viviendas gratuitas que ya lleva una gran cantidad de viviendas entregadas a las familias de escasos recursos, se llaman viviendas de interés social. También, está brindando un subsidio para que cada vez más colombianos tengan vivienda propia, eso está saliendo de las regalías para equilibrar un poco las inequidades. Las inequidades aún existen como en muchos países Latinoamérica, pero cada vez las brechas se han venido cerrando entre las personas de mayores y menores recursos.

3. ¿Cómo han evolucionado el sector educación y salud en este período?

Hay mayor cobertura en educación, sobre todo en educación básica, y el analfabetismo ha bajado mucho. La educación superior si bien no llega a todos, viene creciendo. Eso ha hecho que haya unos mayores índices de desarrollo social aunque todavía falta mucho. También, hay un tema de corrupción muy fuerte que impide que se logre esto. En los departamentos más pobres es donde hay más corrupción, como en el caso de la Guajira y el Chocó. Muchos de los países latinoamericanos vivimos el problema de la corrupción que es una característica del tercer mundo. Poco a poco se han mejorado algunos índices pero falta mejorar en calidad. El tema de salud, educación, distribución del ingreso falta mucho. La corrupción nace porque hay un privado que ejerce presión para lograr sacar beneficios de ciertas cosas. El hecho de que en Colombia haya una incidencia muy fuerte del narcotráfico, incide también en que parte de la población quiere que las cosas se hagan fáciles.

4. ¿Cómo ve Ud. el interés de Colombia de ingresar a la OCDE?

Colombia está trabajando muy fuerte en ese tema. Cada vez hay más reportes de cómo hemos ido mejorando en ciertos índices e indicadores. El ingreso de Colombia a la OCDE le daría un impulso a la economía colombiana, y en este proceso que está liderando Santos de lograr los acuerdos de paz podría captar muchos recursos de inversión social para esas regiones en las cuales ha habido una mayor presencia de la guerrilla para que el Estado pueda desarrollar proyectos sociales. Que Colombia esté dentro del mapa de la OCDE hace que haya una mayor inversión en muchas cosas y un mayor apoyo sobre todo en lo que quiere el presidente, que es esa etapa de post conflicto. Son cosas que no son fáciles de manejar y en lo que se está trabajando. Pero estando con la OCDE y estando dentro de ese club, podemos captar recursos para inversión social productiva en muchas zonas del país que tienen un gran potencial, pero que no se ha explotado porque hay una fuerte presencia de grupos guerrilleros que no ven con muy buenos ojos las iniciativas privadas. El hecho de que Colombia le apunte a la OCDE, es un hecho bueno porque trata de mejorar ciertas falencias.

5. Con la crisis, además de la caída en los precios de los commodities como el petróleo ¿su gobierno tiene la capacidad de mantener los resultados obtenidos en el campo social en los últimos años?

Lo que se ha hecho, en primer lugar, en el tema del petróleo y del carbón es ajustar el tamaño de las empresas exportadoras, volverse más competitivos para que lo menos que está ingresando no se vaya solo a cubrir los costos sino que deje también utilidades. Entonces Ecopetrol está tratando de bajar al máximo los costos para que se genere utilidades. En el tema de petróleo el precio está castigado. Se está buscando mucho apoyo internacional para la financiación de proyectos sociales. Se está tratando de que las regalías que siguen ingresando se distribuyan de una mejor forma. A diferencia de Ecuador donde recién se está dando, en Colombia hay mucha inversión público-privada. Se está tratando de que haya inversión extranjera enfocada hacia el desarrollo de proyectos productivos pero con un enfoque social para que la inversión nacional o extranjera vaya enfocada hacia el tema de proyectos sociales. Hay un ajuste muy fuerte del gasto público para tratar de que en esta época de vacas flacas se

continúe manteniendo la inversión social y si hay recortes que éstos no sean tan fuertes. También, se creó el Departamento Nacional para la Prosperidad que lo que busca es llegar a mayores zonas donde no había servicios públicos.

6. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de Transferencias Condicionadas (Más Familias en Acción)?

Con el programa más Familias en Acción se busca que los recursos que llegan al Estado puedan canalizarse a las familias más pobres a través de proyectos productivos, como proyectos de la granja sostenible, donde la empresa privada ha apoyado mucho en ese tema. Tiene un tema asistencialista pero ha logrado que muchas familias puedan obtener ese tipo ayudas para generar proyectos productivos.

7. Mucho se nos ha hablado de la necesidad de un cambio en la matriz productiva ¿Por qué ha sido tan difícil este cambio?

En Colombia hay el programa de transformación productiva que es como la matriz productiva o sectores estratégicos en Ecuador. El ministerio de comercio, industria y turismo, en el año 2004, empezó a desarrollar el tema de la matriz productiva y a enfocarse hacia sectores de talla mundial que tuvieran un impacto en Colombia y en las exportaciones. Así, se creó el programa de transformación productiva de la mano de la presidencia de la república. Se hicieron estudios, se trajeron consultores internacionales que analizaron varios sectores en Colombia: turismo, tecnología, cosmético, agroindustrial, energético y otros sectores que han ido apareciendo. Es un tema que implica liderazgo del gobierno pero también de la industria privada. Es un trabajo en conjunto para desarrollar ciertos sectores. Se hizo un diagnóstico de varios sectores. Se identificaron falencias como el bilingüismo. Hay sectores en los que se está trabajando. El tema de agricultura es un sector que tiene mucha potencialidad pero que tiene problemas estructurales desde hace muchos años que no han permitido que éste se desarrolle de mejor forma. El problema ha sido los territorios con presencia de la guerrilla y la actitud latifundista que ha primado el ganado y no la agricultura.

8. ¿Cuáles han sido los efectos de la masiva privatización de los servicios públicos en Colombia?

En Colombia muchos de los servicios públicos se han privatizado. Surgió mucho de la corrupción que había. Muchas empresas se privatizaron a través de inversión nacional o extranjera. En consecuencia, los costos han bajado, la calidad de la cobertura ha crecido porque ya se maneja como empresa privada. Al abrirse a la empresa privada se ha beneficiado al consumidor. El Estado lo puede hacer, pero en países como los nuestros donde todavía hay mucho el tema de corrupción, de favorabilidad de ciertos intereses, hace que no sea tan competitivo o beneficioso para el consumidor final que una empresa pública haga este tipo de manejo. La eficiencia en costos y calidad de los servicios sociales se ha dado por la apertura a las empresas privadas. En tema de calidad y de cobertura, Colombia ha mejorado bastante.

Lista de siglas y acrónimos

ALBA	La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
BDH	Bono de Desarrollo Humano
BM	Banco Mundial
BRICS	Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CORDES	Corporación de Estudios para el Desarrollo
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FMI	Fondo Monetario Internacional
ICSS	Instituto Colombiano de Seguros Sociales
IDH	Índice de Desarrollo Humano
INB	Ingreso Nacional Bruto
ISI	Industrialización por Sustitución de Importaciones
ITT	Ishpingo - Tambococha - Tiputini
MCDS	Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCP	Oleoducto de Crudos Pesados
OMC	Organización Mundial de Comercio
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
PIB	Producto Interno Bruto
PTC	Programas de Transferencias Condicionadas
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas

Lista de referencias

- Acosta, Alberto. 2009. *La Maldición de la Abundancia*. Quito: Abya-Yala.
- Acosta, Alberto. 2012. "Extractivismo y Neextractivismo: Dos Caras de la Misma Maldición". En *Más Allá del Desarrollo*, editado por Miriam Lang y Dunia Mokrani, 83-120. Quito: Editorial El Conejo.
- Adel, Christian. 2014. "Políticas sociales "progresistas" en el Cono Sur: discursos y prácticas desde los Estados." *Adaptação de palestra*, enero: 130-137.
- Adler, Gustavo y Sebastián Sosa. 2011. *Commodity Price Cycles: The Perils of Mismanaging the Boom*. FMI .
- Albornoz, Vicente, and Sebastián Oleas. 2012. "Pobreza, Desigualdad de Oportunidades y Políticas Públicas en el Ecuador". En *Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América Latina*, varios autores, 87-97. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Avritzer, Leonardo. 2009. "La nueva izquierda, la crisis de representación social en América Latina ". En *La "Nueva Izquierda" en América Latina: derechos humanos, participación política y sociedad civil*, editado por Cynthia Arnson, Ariel Armony, Catalina Smulovitz, Gastón Chillier, Enrique Peruzzotti y Giselle Cohen. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Barrientos, Armando. 2012. "Dilemas de las políticas sociales latinoamericanas: ¿Hacia una protección social fragmentada?" *Nueva Sociedad*, mayo-junio, 239 ed.: 65-78.
- Bonvecchi, Alejandro, Julia Johannsen y Carlos Scartascini. 2015. *¿Quiénes deciden la política social?: Economía política de programas sociales en América Latina*. Editado por Alejandro Bonvecchi, Julia Johannsen y Carlos Scartascini. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7065/Quienes_deciden_la_politica_social_Economia_politica_de_programas_sociales_en_America_Latina.pdf?sequence=1.
- Briones, Francisco, Jorge Rivas, Andrés Viteri y Leonardo Estrada. 2011. *La educación en el Ecuador, situación y propuesta del sistema de vouchers educativos como alternativa*. Guayaquil: ESPOL.
<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16995/1/La%20Educaci%C3%B3n%20en%20el%20Ecuador.%20Situaci%C3%B3n%20y%20Propuesta%20del%20Sistema%20de%20Vouchers%20Educativos%20como%20Alterna.pdf>.
- Bryman, A. 2008. *Social Research Methods*. Nueva York: Oxford University Press.
- Burchardt, Hans-Jürgen. 2008. "Desigualdad y democracia". *Nueva Sociedad*, mayo-junio: 79-94. http://nuso.org/media/articles/downloads/3523_1.pdf.
- Cardona, Alberto. 2011. *Gasto Público Social Colombia 2000-2010*. Bogotá: DPN Colombia.
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/Gasto%20P%C3%BAblico%20Social%20Colombia%202000-2010.pdf>.
- Cardozo Brum, Myriam Irma. 2005. "Neoliberalismo y eficiencia de los programas sociales en México". *Revista Política y Cultura*, otoño: 169-186.
- Carriel, Jorge. 2012. "Gasto público en salud en el Ecuador". *Revista Medicina - Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*, 1 ed.: 53-60.
<http://editorial.ucsg.edu.ec/medicina/article/view/603/547>.
- Castaño, Ricardo. 2002. "Colombia y el modelo neoliberal". *Revista Agora Trujillo*, julio-diciembre: 59-76.
- Castro, Carlos. 2012. *Salud y seguridad social: un breve comparativo de cinco países de América Latina*. Documento de Trabajo, Bogotá: FESCOL. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09229.pdf>.

- Cecchini, Simone y Aldo Madariaga. 2011. *Programas de Transferencias Condicionadas: Balance de la Experiencia Reciente en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27854/S2011032_es.pdf?sequence=1.
- Ceja Martínez, Jorge. 2014. "Extractivismo minero, globalización neoliberal y resistencias socio-ambientales en México". *Contextualizaciones Latinoamericanas*, julio-diciembre, 11 ed.: 1-10.
http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/pdf/Extractivismominero,globalizaci%C3%B3nneoliberalyresistenciasocioambientalesenM%C3%A9xico_11.pdf.
- CEPAL . 2002. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2001-2002*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2004. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2003-2004*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2005. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2004-2005*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2013. *Panorama Social de América Latina*. CEPAL .
- CEPAL. 2001. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2000-2001*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2003. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2002-2003*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2006. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2005-2006*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2007. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2006-2007*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2008. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007-2008*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2009. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2010. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009-2010*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2011. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2010-2011*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2012. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2012: las políticas ante las adversidades de la economía internacional*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2013. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013: tres décadas de crecimiento económico desigual e inestable*. Santiago de Chile: Naciones Unidas .
- . 2014. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014: desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2015. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015: desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- . 2013. *Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas .

- CINEP. 2010. *El legado de las políticas de Uribe: Retos para el gobierno de Santos*. Bogotá D.C.: CINEP.
<http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/5345ae03-695f-43a5-98dd-5b323dcc6863/CINEP%20-%20Legado%20Uribe%20%20Retos%20de%20Santos%202010%20%20informe%20especial.pdf?guest=true>.
- Constitución del Ecuador. 2008.
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.
- Cruz, Edwin. 2014. "La protesta social en el primer gobierno de Juan Manuel Santos". *Jurídicas CUC*, 233-281.
http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc/article/view/466/pdf_50.
- Cubilledo, Daniel. 2013. "La confrontación Uribe-Santos: ¿diferencias superficiales o contradicciones en el bloque de poder dominante?" *Cuadernos del GESCAL* 96-117.
- Cuestas, Javier. 2014. "Nueva izquierda y neopopulismo en América Latina". *Revista Sector-e*, segundo semestre: 25-27.
https://www.researchgate.net/publication/281781508_Nueva_izquierda_y_neopopulismo_en_America_Latina.
- Dávalos, Pablo. 2013. "'No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro': Las falacias del discurso extractivista". En *El correísmo al desnudo*, varios autores, 190-215. Quito: Arcoiris Producción Gráfica.
- Declaración del ALBA desde el Pacífico. XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. 2013. *Declaración del ALBA desde el Pacífico. XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP*. Guayaquil, julio 30.
<http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/declaracion-alba-guayaquil-julio-2013.pdf>.
- Dupas, Gilberto. 2008. "Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global". *Nueva Sociedad*, mayo-junio: 62-78.
<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33407-42895-1-PB.pdf>.
- Egas, Andrés. 2013. *La evolución del gasto público en el sector salud en el Ecuador: Análisis de su contribución en el mejoramiento de la calidad del servicio otorgado. Período 2007-2012*. Tesis, Quito: PUCE.
<http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/6097/T-PUCE-6334.pdf?sequence=1>.
- El Nuevo Día. 2014. "¿Es eficiente el gasto en Colombia?" *El Nuevo Día*.
<http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/negocios/223014-es-eficiente-el-gasto-en-colombia>.
- Ensignia, Jaime. 2008. *Globalización e Integración Regional: los desafíos para el progresismo latinoamericano y chileno*. Santiago de Chile : Fiedrich Ebert Stiftung .
- Falconí, Fander. 2014. *Al sur de las decisiones*. Quito: Editorial El Conejo.
- Falconí, Fander y María Cristina Vallejo. 2012. "Transiciones socioecológicas en la región andina". *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, 35-71.
- Fernández-Ballesteros, Rocío. 1996. *Evaluación de Programas. 'Una Guía Práctica en Ámbitos Sociales, Educativos y de Salud'*. Madrid: Editorial.
- Gaitán, Flavio. 2014. *Auge, ocaso y resurgimiento de los estudios sobre desarrollo en América Latina*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36660/S2014113_es.pdf?sequence=1.
- Galindo, Carolina. 2007. "Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez". *iCONOS*, enero: 147-162. <http://www.flacso.org.ec/docs/i27galindo.pdf>.

- Garretón, Manuel. 2012. *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobiernos en la concertación de Chile, 1990-2010*. Santiago de Chile: Editorial ARCIS.
- Gasparini, Leonardo y Nora Lustig. 2011. *The rise and fall of income inequality in Latin America*. Society for the Study of Economic Inequality.
<http://www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2011-213.pdf>.
- Giedion, Úrsula, Manuela Villar y Adriana Ávila. 2010. *Los Sistemas de Salud en Latinoamérica y el papel del Seguro Privado*. Madrid: Fundación MAPFRE.
<https://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/libros/los-sistemas-de-salud-en-latinoamerica-y-el-papel-del-seguro-privado.pdf>.
- Gigli, Juan Manuel. 1999. "Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina". *Revista del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo*, mayo: 1-27.
- Grijalva, Diego. 2014. "El fin del súper ciclo de los Commodities y su impacto en América Latina". *Koyuntura*, septiembre: 1-6.
- Grugel, Jean, y Pía Ruggirozzi. "Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis". *Development and Change*, 2012.
- Gudynas, Eduardo. 2009. "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo". En *Extractivismo, política y sociedad*, varios autores, 187-225. CAAP y CLAES.
- . 2010. "La ecología política del progresismo sudamericano: los límites del progreso y la renovación verde de la izquierda". *Sin Permiso*, diciembre: 147-167.
- . 2010. "La ecología política del progresismo sudamericano: los límites del progreso y la renovación verde de la izquierda". *Sin Permiso*, diciembre, 8 ed.: 147-167.
<http://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasEcolPoliticaProgresismoSP10.pdf>.
- Guillén, Arturo. 2008. "Modelos de Desarrollo y Estrategias Alternativas en América Latina." En *América latina y desarrollo económico: estructura, inserción externa y sociedad*, Eugenia Correa, José Deniz y Antonio Palazuelos, 16-42. Madrid: Editorial Akal.
- Hernández, Joaquín. 2006. "¿Una nueva izquierda latinoamericana?" *Revista de Análisis Político: La Tendencia*, diciembre: 18-21.
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4917/1/RFLACSO-LT04-03-Hernandez.pdf>.
- Hidalgo, José y Felipe Hurtado. 2016. "Introducción: Auge y deterioro de un modelo estatista y derrochador". En *El socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities*, editado por José Hidalgo y Felipe Hurtado. Quito: Fundación Konrad Adenauer.
- Humphreys, Mcartan, Sachs Jeffrey y Joseph Stiglitz. 2007. "What is the problem with natural resource wealth?" En *Escaping the resource wealth*, Mcartan Humphreys, Sachs Jeffrey y Joseph Stiglitz, 1-20. New York: Columbia University Press.
- Jenkins, Rhys, y Enrique Dussel. *China and Latin America: Economic relations in the twenty-first century*. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2009.
- Justo, Marcelo. 2016. "¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina?" *BBC MUNDO*, marzo 9.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab.
- Lander, Edgardo. 2014. "El Neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones." En *El Neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones*, varios autores, 2-11. Heinrich Boll Stiftung.
- . 2015. "Neoextractivismo y alternativas: debates y conflictos en los países con gobiernos progresistas en Suramérica". *Revista Perspectivas*, septiembre 29.
<https://mx.boell.org/es/2015/09/29/neoextractivismo-y-alternativas-debates-y-conflictos-en-los-paises-con-gobiernos>.

- Lerman Alperstein, Aída. 2014. "Extractivismo y neo-extractivismo: ¿variaciones sobre un mismo tema?" En *Instituciones y desarrollo*, por Novelo Urdanivia, 125-142. México DF: UAM-X, CSH, Depto. de Producción Económica.
- Lustig, Nora. 2009. "Hacia un marco para entender la política de reducción de la pobreza y la desigualdad". *Gobernabilidad Democrática y la "Nueva Izquierda"*, octubre: 5-10.
- Lustig, Nora. 2015. "La mayor desigualdad del mundo". *Finanzas y Desarrollo* 14-16. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/lustig.pdf>.
- Martner, Gonzalo. 2011. *Los gobiernos progresistas y el sindicalismo en América Latina: los casos de Chile, Argentina y Uruguay*. Santiago de Chile: Fiedrich Ebert Stiftung.
- Medellín, Nadin y Fernando Sánchez. 2015. *¿Cómo funciona Más Familias en Acción?: Mejores prácticas en la implementación de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina y el Caribe*. BID. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7301/C%C3%B3mo_funciona_M%C3%A1s_Familias_en_Acci%C3%B3n.pdf?sequence=1.
- Medina, María. 2016. "¿Para qué ha servido Más Familias en Acción?" *El Espectador*, abril 10. <http://www.elespectador.com/noticias/economia/ha-servido-mas-familias-accion-articulo-626381>.
- Mejía, Juliana. 2012. "Modelos de implementación de las políticas públicas en Colombia y su impacto en el bienestar social". *Analecta política*, julio-diciembre: 141-164.
- Mejía-Ortega, Luz, and Álvaro Franco-Giraldo. 2007. "Protección Social y Modelos de Desarrollo en América Latina". *Revista de Salud Pública*, septiembre: 471-483.
- Midaglia, Camen. 2012. "Un balance crítico de los programas sociales en América Latina: Entre el liberalismo y el retorno del Estado". *Nueva Sociedad*, mayo-junio, 239 ed.: 79-89.
- Mieles, José, interview by Belén Aguirre. 2016. *Caso Ecuador* (junio 2).
- Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 2012. *Agenda Social 2009-2011*. Quito: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/2_Agenda_Social_09_11.pdf.
- Minteguiaga, Analía. 2007. "La política social del gobierno de Rafael Correa". *Revista La Tendencia*, noviembre, 6 ed.: 56-62. <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4842/1/RFLACSO-LT06-10-Minteguiaga.pdf>.
- Moncayo, Víctor Manuel. 2012. "¿Cómo aproximarnos al Estado en América Latina?" En *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*, Mabel Thwaites Rey, 19-50. Santiago de Chile: Editorial ARCIS.
- Montilla, Paola. 2014. "Colombia: ¿Hacia una reestructuración del sistema político?" *Revista de Ciencia Política*, 105-124. <http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v34n1/art05.pdf>.
- Ocampo, José Antonio. 2011. "Seis décadas de debates económicos Latinoamericanos." http://policydialogue.org/files/events/SEGIB-PNUD_Ocampo-final.pdf.
- OCDE. 2015. *Colombia: Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo*. Paris: OCDE. <https://www.oecd.org/about/publishing/colombia-politicas-prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf>.
- Papa, Gabriel. 2004. *La herencia del neoliberalismo en América Latina y los márgenes de maniobra de los gobiernos progresistas*. Montevideo: Fiedrich Ebert Stiftung - Uruguay .
- Parra Torrado, Mónica, and José Daniel Trujillo. 2012. "El combate contra la pobreza y la desigualdad. Lecciones y propuestas de política: el caso de Colombia". En *Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América Latina*, varios autores, 59-72. Rio de Janeiro : Konrad-Adenauer-Stiftung.

- Pastrana, Eduardo, and Diego Vera. 2012. "De Uribe a Santos: ¿continuidad o nueva orientación de la política exterior colombiana?" En *Colombia: ¿Una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior*, Stefan Jost, 57-80. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer - Colombia.
- Perticara, Marcela. 2012. "Introducción: El combate contra la pobreza y desigualdad. Lecciones y propuestas de política." En *Pobreza, Desigualdad de Oportunidades y Políticas Públicas en América Latina*, varios autores, 5-7. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Petras, James. 2013. "El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista". En *Extractivismo, y simulacro progresista en Bolivia y Latinoamérica*, James Petras y Jorge Lora, 9-22. Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego".
- Ponce, Juan. 2008. "Estudio introductorio". En *Es posible pensar una nueva política social para América Latina*, Juan Ponce Jarrín, 9-28. Quito: FLACSO, Sede Ecuador y Ministerio de Cultura .
- Ponce, Juan. 2011. *Desigualdad del ingreso en Ecuador: un análisis de los años 1990s y 2000s*. Documento de Trabajo, Quito: FLACSO-Sede Ecuador.
- Portillo, Luis. 2014. "Estractivismo clasico y neoextractivismo, ¿dos tipos de extractivismo diferentes?". *Tendencias*, julio-diciembre: 11-29.
- Prada, Raúl. 2014. *Crítica a la Economía Política del Extractivismo*. La Paz: Comuna.
- Prosperidad Social. 2016. *Más Familias en Acción*. Acceso 05 01, 2016.
<http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx>.
- Quintero, Jaime. 2013. "La culebra está viva: la reelección presidencial de Álvaro Uribe". *Tendencias & Retos*, enero-junio, 1 ed.: 81-93. /Dialnet-LaCulebraEstaViva-4929406.pdf.
- Ramírez, Franklin. 2008. "Proceso constituyente y tránsito hegemónico." En *Nueva Constitución*, varios autores, 46-66. Quito: ILDIS y La Tendencia.
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05700.pdf>.
- Ramírez, Walter, Martín Polo, and Andrea Sabatini. 2008. "El Boom de los Commodities: ¿Transitorio o Permanente?" *Ejecutivos de Finanzas* , junio: 6-10.
- Recalde, Paulina. 2007. "La redimensión de la política social en el Ecuador: El bono de desarrollo humano en el gobierno de Rafael Correa". *Observatorio Político CELA*, 1-25. <http://www.puce.edu.ec/sitios/ocpal/images/documentos/BDH.pdf>.
- Revista Semana. 2011. "Desigualdad extrema en Colombia". *Revista Semana*.
<http://www.semana.com/nacion/articulo/desigualdad-extrema/236705-3>.
- Rey, Nicolás. 2015. "Neoextractivismo y lógicas de integración". Manuscrito inédito.
- Rodríguez, Gina. 2014. "Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?" *Nueva Sociedad*, noviembre-diciembre, 254 ed.: 84-99.
http://nuso.org/media/articles/downloads/4071_1.pdf.
- Rodríguez, Leilo. 2014. "Consideraciones sobre el gasto público social". *IM-Pertinente*, julio-diciembre: 129-169.
- Sánchez, Valeria. 2012. "La equidad-igualdad en las políticas sociales latinoamericanas". *desiguALdades.net Working Paper Series*, 1-25.
- Schuldt, Jürgen. 2004. "La Insignia". *Somos pobres porque somos ricos*, julio.
- Seoane, José, Emilio Taddei y Clara Algranati. 2001. "Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta". *Cronología*, mayo-agosto: 45-52.
- Serrano, Claudia. 2005. *La política social en la globalización. Programas de protección en América Latina* . Santiago de Chile: CEPAL.

- Sevares, Julio. 2011. "El ascenso de China: oportunidades y retos para América Latina". *Revista Nueva Sociedad* (235): 35-49.
- Sierra, Natalia. 2011. "Los "gobiernos progresista" de América Latina. La avanzada del posneoliberalismo". *Revista electrónica de derechos humanos*, julio.
- Sinnott, Emily, John Nash y Augusto De la Torre. 2010. *Los recursos naturales en América Latina y el Caribe: ¿Más allá de bonanzas y crisis?* Washington, DC: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial.
- Spray, Sharon y Roselle, Laura. 2012. *Research and Writing in International Relations*. Nueva York: Longman.
- Sousa, Liliana. 2015. "What does the end of the commodity boom mean for poverty in Latin America?", <http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/what-does-end-commodity-boom-mean-poverty-latin-america>
- Svampa, Maristella. 2013. "Consenso de Commodities y Lenguajes de Valoración en América Latina". *Revista Nueva Sociedad* 244 (marzo-abril): 30-46.
- UNASUR y CEPAL. 2013. *Recursos naturales en UNASUR: Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Uribe, María Teresa. 2004. "El republicanismo patriótico". En *Reelección: el embrujo continúa*, by Camilo Borrero, 10-18. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.
https://pbideutschland.de/fileadmin/user_files/projects/colombia_formacion/files/Documentos/Políticas_de_Seguridad/0409-embrujo_2.pdf.
- Valdés, Juan y Mayra Espina. 2011. *América Latina y el Caribe: La política social en el nuevo contexto - Enfoques y experiencias*. Montevideo: UNESCO.
- Veltmeyer, Henry. 2013. "The political economy of natural resource extraction: a new model or extractive imperialism". *Canadian Journal of Development Studies*, 79-95.
- Vergara, Andrés. 2015. "Gasto público en educación en Colombia: entre la inflexibilidad y la priorización de la inversión". *Revista Nova et Vetera*.
<http://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera/Vol-1-Ed-3/Omnia/Gasto-publico-en-educacion-en-Colombia-entre-la-in/>.
- Vergara, Rubén. 2012. "Análisis de política exterior en Colombia: gobierno de Juan Manuel Santos, ¿continuación de un proceso cambio de rumbo?" *Equidad Desarrollo*, enero-junio: 149-175. [Dialnet-AnalisisDePoliticaExteriorEnColombia-5166431.pdf](http://dialnet-analisisdepoliticaexteriorencolombia-5166431.pdf).
- Vilas, Carlos. 2007. "Desigualdad social y procesos políticos: una perspectiva interdisciplinaria". *Anuario de Filosofía Argentina y Americana*, 9-33.
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3431/vilascuyo24.pdf.
- Zapata, Juan. 2009. *Coordinación y gestión territorial de la política social en Colombia*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Zibechi, Raúl. 2015. "El mito del progresismo y la desigualdad". *Resumen Latinoamericano*, octubre 10. <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/11/01/el-mito-del-progresismo-y-la-desigualdad>.